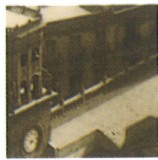
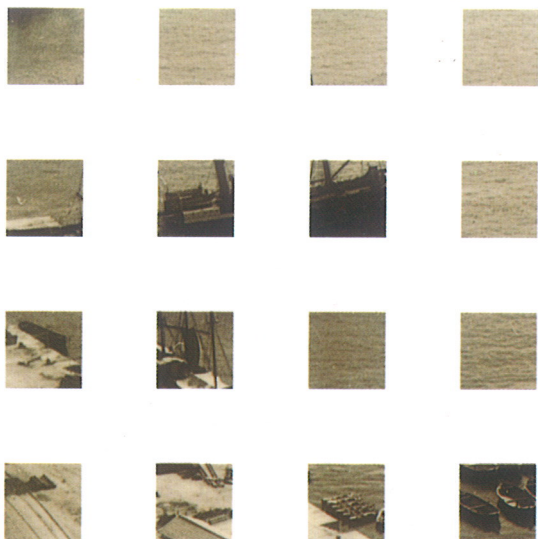


HISTORIA DE LA CIUDAD DE ALICANTE EDAD CONTEMPORÁNEA





1490-1990

QUINTO CENTENARIO CIUDAD DE ALICANTE
CINQUÉ CENTENARI CIUTAT D'ALACANT



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE

HISTORIA DE LA CIUDAD DE ALICANTE

Patronato Municipal para la conmemoración del Quinto
Centenario de la Ciudad de Alicante

ALICANTE

1 9 9 0

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: LANINA

PORTADA: Puerto de Alicante a primeros de siglo
(Fotografía de Cantos)

© Los autores

© Patronato Municipal para la conmemoración del
Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante.

I.S.B.N.: 84-404-8407-0

I.S.B.N.: 84-404-8405-4

Depósito Legal: A-1230 - 1990

IMPRESO EN SUCH SERRA - ALICANTE

HISTORIA DE LA CIUDAD DE ALICANTE

TOMO IV

E D A D



CONTEMPORÁNEA

Coordinado por

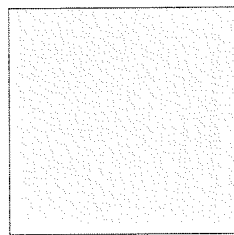
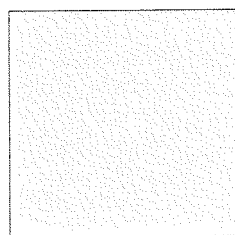
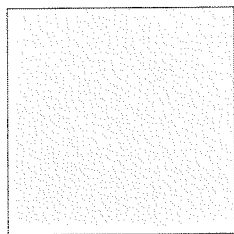
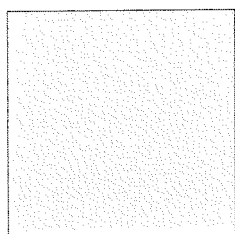
GLICERIO SÁNCHEZ RECIO

Universidad de Alicante

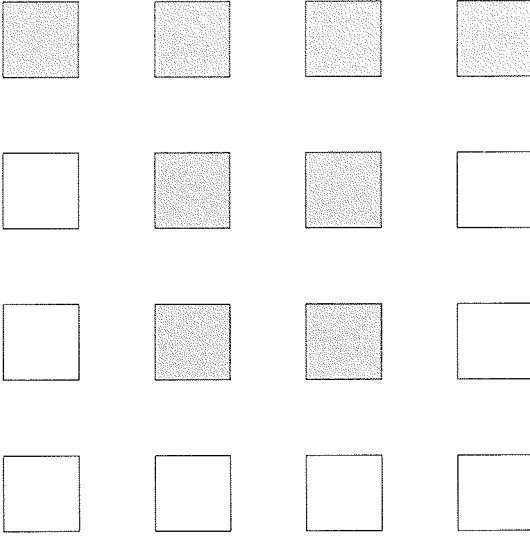
FRANCISCO MORENO SÁEZ

Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert"

E D A D
CONTEMPORÁNEA



S I G L O X I X



INTRODUCCIÓN

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO
Universidad de Alicante

E

L conocimiento histórico acerca de la provincia y la ciudad de Alicante se ha ampliado notablemente a lo largo de las dos últimas décadas y esta obra constituye un excelente testimonio de ello. Gran parte de la responsabilidad de esa ampliación y profundización del conocimiento histórico ha correspondido a la creación de la Universidad de Alicante –y a su antecesor Centro de Estudios Universitarios–, en la que los investigadores se han dedicado en muchos casos al estudio de la historia del ámbito más próximo a ella. Tampoco hay que olvidar la contribución de otras instituciones alicantinas, entre las que destaca el Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”.

Los estudios realizados han ido dilucidando nuestro pasado, tanto el más cercano como el remoto, y si, por una parte, encerraban el peligro de olvidar las coordenadas históricas en las que se debía situar las cuestiones que ocupaban y preocupaban a nuestros antepasados, empujándonos a un falaz aislamiento cultural e histórico, por otra, nos han enseñado también a situar *nuestra historia* en un contexto mucho más amplio, en la historia compartida por todos los territorios que conforman el Estado Español e, incluso, en la que trasciende los límites de éste, insertándola en la de las regiones ribereñas del Mediterráneo occidental.

Del siglo XIX podría decirse que fue una centuria de cambios y transformaciones: políticos, sociales, culturales, económicos, urbanos y, por lo tanto, vitales; y en los seis primeros capítulos de este volumen se trata de la transformación y el cambio que se dió en la ciudad de Alicante. A lo largo de las páginas no sólo se exponen cambios y transformaciones desde 1814 a 1900 –los primeros años del siglo se han incluido en el volumen anterior como continuación y contrapunto de la época ilustrada– sino que se le da un protagonismo especial a la propia ciudad, que es el resulta-

do, por lo demás, de las preocupaciones y los intereses de sus habitantes, los ciudadanos.

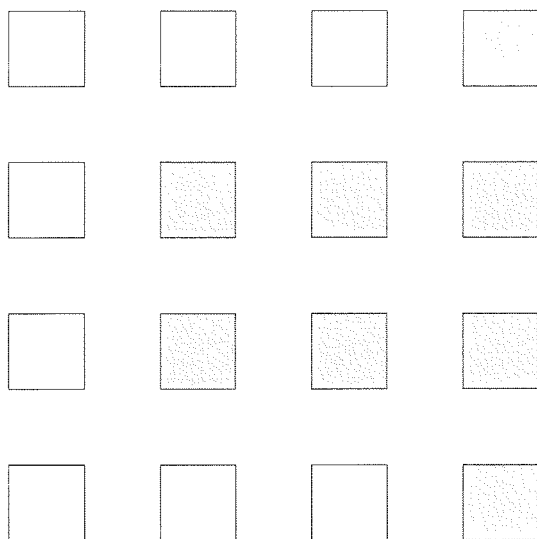
Pero esta obra refleja también el nivel que ha alcanzado el conocimiento histórico sobre la ciudad de Alicante y su entorno próximo; de ahí que pienso que la *Historia de la Ciudad de Alicante* y, particularmente, *Alicante en el siglo XIX* pueda ejercer dos funciones: la de haber sintetizado los conocimientos logrados por las investigaciones recientes, y la de estimular para llevar a cabo otros estudios, ya que también aparecen las cuestiones menos tratadas y, por defecto, las desconocidas. En general, puede decirse que nos hallamos todavía muy lejos de llegar a conclusiones definitivas sobre cualquiera de los temas planteados; y aunque hay aspectos sobre los que el conocimiento histórico ha hecho considerables progresos, falta, sin embargo, establecer las interrelaciones que existían entre unos y otros dentro de la sociedad alicantina para aproximarnos a un conocimiento completo y profundo de la misma.

Los aspectos mejor conocidos de la historia de la ciudad de Alicante en el siglo XIX son los urbanísticos, los demográficos, los económicos, sobre todo, en la segunda mitad del siglo, y los relativos a las comunicaciones. En cambio, los políticos y sociales presentan mayor dificultad, son más complejos y, por lo tanto, los análisis y las interrelaciones más complicadas, si se pretende ir más allá de la pura descripción de los hechos y de las esquematizaciones mecánicas y simplistas. Sin embargo, es preciso destacar el alto nivel de conocimiento alcanzado en algunas cuestiones como las relativas a los republicanos durante el Sexenio Revolucionario y la Restauración gracias a los trabajos de la Profesora Gutiérrez Lloret; pero nos falta mucho por saber acerca de los partidos liberales y dinásticos y, por consiguiente, del sector mayoritario de la burguesía alicantina. También es muy fragmentario el conocimiento acerca de las clases bajas, de las organizaciones obreras y de la difusión de las ideologías cooperativistas y socialistas, a pesar de los trabajos del Profesor Moreno Sáez; pero nuestro conocimiento es mucho menor aún acerca de la primera mitad del

siglo XIX: sabemos muy poco, por ejemplo, sobre la evolución de la burguesía y la función que ejerció en todos los aspectos de la vida social y sobre las relaciones que mantuvo con las demás clases y grupos sociales. Esas relaciones explicarían la actitud que la ciudad adoptó ante los cambios políticos y las diversas coyunturas que se presentaron a lo largo del siglo.

Quiero también resaltar aquí la importancia que tuvo para la ciudad de Alicante convertirse en la sede de la administración provincial porque desde ella se diseñó y modeló la unidad de la provincia y ésta reportó grandes ventajas a la ciudad; debido a ello, por ejemplo, Alicante no sólo estaría bien comunicada con la capital del Estado y con las ciudades más próximas, sino que un entorno amplio –su provincia– se organizaría asimismo alrededor de ella. Acerca de la administración provincial y municipal, sobre todo en la primera mitad del siglo, estamos necesitando también una amplia y profunda investigación.

Así pues, pienso que esta obra, escrita con motivo del *V Centenario de la Ciudad de Alicante*, puede ser una digna aportación a la *historiografía local* como síntesis de nuestro conocimiento histórico y proyección hacia nuevas investigaciones.



LA CIUDAD ENTRE 1800 Y 1860

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO
Universidad de Alicante

E

N una obra como ésta, sobre la historia de la ciudad de Alicante, debe concedérsele el principal protagonismo a la propia ciudad. La evolución de la ciudad de Alicante, como la de cualquier otra, es el reflejo más fiel de la actividad que en su interior y en torno a ella se desarrolla, del quehacer de sus gentes, de sus intereses y de sus aficiones, de sus preocupaciones y de sus gustos, de sus creencias y de sus temores. Y todo ello se manifiesta en la disposición de sus barrios, en el trazado de sus calles y en el lugar que ocupan las principales construcciones dentro del conjunto urbano. Todo lo anterior tiene aún más sentido tratándose de la historia de la ciudad en el siglo XIX, a lo largo del cual Alicante se transforma profundamente y, respetando sus características propias, ha de reordenar el legado histórico recibido y diseñar el trazado al que se ha de ajustar su ensanche.

La ciudad de Alicante había experimentado una gran transformación a lo largo del siglo XVIII, que se había reflejado en el aumento de su población y en la construcción de importantes edificios civiles y religiosos. Esto había estado condicionado en gran medida por el incremento del comercio de importación y exportación, al ser autorizado su puerto a embarcar mercancías hacia las colonias americanas, función que desempeñó junto a la ya tradicional de los intercambios comerciales con otros puertos del Mediterráneo y del Norte de Europa. Por lo tanto, en el crecimiento y transformación de la ciudad de Alicante había desempeñado un importante papel el puerto, factor que continuaría ejerciendo una notable influencia en el futuro de la ciudad y que, por lo mismo, se convertiría en uno de los principales centros de interés del municipio alicantino a lo largo del siglo XIX, prolongando sus muelles, facilitando la entrada de los buques de gran calado, dotándolo de los servicios necesarios y tomando las medidas convenientes para su defensa.

Así pues, a lo largo del siglo XIX, la ciudad de Alicante desarrollaría ampliamente su función comercial y estrecharía sus

relaciones con las ciudades y mercados del interior de España a través del ferrocarril, al haber sido ésta la primera ciudad costera que estuvo unida con la meseta por el nuevo medio de transporte, por lo que la actividad comercial fue particularmente intensa en los últimos años de la década de los cincuenta y primeros de los sesenta del siglo pasado; y, en consecuencia, Alicante, además de centro de importación y exportación, se convirtió en mercado de distribución de las mercancías importadas. Las actividades económicas tuvieron unas claras repercusiones demográficas y el municipio experimentó un intenso crecimiento de la población, que, a su vez, se manifestó en la expansión del plano de la ciudad y en la transformación interna de la misma. En Alicante, a lo largo del siglo, se abrieron y trazaron amplias avenidas, se construyeron plazas y jardines y se levantaron grandes monumentos, de manera que, a finales del XIX, la vieja ciudad del XVIII no era sino un reducto del nuevo Alicante.

Las transformaciones políticas que tuvieron lugar en España, a lo largo del siglo XIX, dejaron un profundo impacto en Alicante. En primer lugar, en la ordenación territorial llevada a cabo desde 1833, Alicante se convirtió en capital de la provincia que lleva su nombre y, por lo tanto, en un centro administrativo, que pronto tendría un claro reflejo urbanístico, y que extendería su influencia incluso a centros a los que no llegaba su influjo económico. Pero una ciudad de estas características lógicamente había de adoptar unas posiciones políticas muy matizadas; Alicante no sólo se había de decantar a favor del liberalismo y en defensa de las instituciones del nuevo régimen, sino que, además, asumiría, en determinados momentos, las actitudes más radicales, bien cuando el régimen liberal se hallaba a punto o en peligro de sucumbir frente al ataque de los absolutistas o derivaba hacia formas autoritarias, y siempre se manifestó a favor de las medidas librecambistas en la política comercial.

A lo largo de los dos primeros capítulos del volumen nos haremos cargo de todas y de cada una de las cuestiones que se han enunciado, intentando exponer el crecimiento y la evolución de la ciudad de Alicante durante los dos primeros tercios del siglo XIX, procurando verla como un todo, en el que la evolu-

ción de uno cualquiera de sus elementos es efecto y a la vez causa de la evolución de los demás.

La transformación y el crecimiento del casco urbano

En este apartado se tratará tanto de la transformación del casco histórico de la ciudad como de la expansión superficial del mismo, ya que durante el período que se va analizar se llevaron a cabo cumplidamente ambos fenómenos.

La ciudad de Alicante, en los primeros años del siglo, presentaba el aspecto tradicional de una vieja ciudad, a la que se le habían quedado estrechos los muros que la cercaban; de manera que fuera de los mismos habían aparecido algunos núcleos de población, hacia los que se proyectaba la futura expansión, tales eran el arrabal Roig y el de San Antón, situados al NE y NO, respectivamente, y en los que ya desde antiguo, particularmente en el segundo, se habían levantado algunos edificios de gran importancia, como la Casa de la Misericordia y el convento de los Capuchinos. El recinto amurallado, por su parte, estaba formado por dos conjuntos, ya que el núcleo histórico, que se extendía desde la ladera del Benacantil hasta la actual calle de la Rambla de Méndez Núñez, se le había adosado, al sur, a principios del siglo XVIII, y rodeado de un muro el barrio de San Francisco. Así pues, este recinto amurallado y los barrios extramuros tuvieron que soportar el crecimiento demográfico y económico que se dió en Alicante en dicho siglo.

Como consecuencia de lo anterior, y tal como aparece en la documentación de los primeros años del siglo XIX, la densidad demográfica dentro de los muros de la ciudad era muy alta, ya que a la falta de espacio para construir se unía la prohibición, por razones defensivas, de aumentar la altura de los edificios existentes; lo que pesaba gravemente sobre la población y había causado una elevación considerable del precio de los alquileres de las viviendas. De ahí que, en las mismas fechas, se suplicara a las autoridades del Estado que proporcionaran “los ensanches que necesita con la construcción de un nuevo recinto”.

La guerra de la independencia brindó la oportunidad de ampliar el perímetro murado de la ciudad, a la vez que se refor-

zaban las defensas y construía, fuera de las murallas, el castillo de San Fernando sobre el monte Tosal, situado al NO, a escasa distancia del casco urbano. A. Ramos Hidalgo describe de la siguiente manera el nuevo espacio añadido al núcleo de la ciudad: “Arrancando de la Puerta de San Francisco, por donde se daba paso a la salida en dirección a la carretera de Madrid, llegaban (las nuevas murallas) al cilíndrico torreón de San Nicolás, ubicado en la intersección de las actuales calles de General Goded (hoy del Teatro) y Soto. Cambiando la dirección se dirigía hacia otro torreón similar que ocupaba el cruce de las calles Pascual Pérez y Alvarez Sereix, llamado de San Cayetano, desde el que la muralla seguía hasta conectar con la vieja, de la que la citada calle servía de ronda. En el interior del ampliado recinto quedaban la parte suroriental de la *Montañeta*, el convento y huerto de San Francisco y los sectores vacíos aledaños”. Sin embargo, esa ampliación fue inmediatamente contrarrestada porque en su interior se hubo de dar cobijo a los habitantes del barrio de San Antón, cuyas viviendas fueron derribadas, por razones defensivas, para evitar que los franceses las ocuparan y utilizaran como base ante un probable ataque y asedio de la plaza de Alicante.

El recinto urbano ampliado y descrito anteriormente fue el que albergó Alicante durante toda la primera mitad del siglo XIX, aunque, una vez terminada la guerra, de nuevo se construyó y ocupó el barrio de San Antón, del que sólo habían permanecido en pie los viejos edificios de la Casa de la Misericordia y convento de los Capuchinos, y se convirtió en el núcleo principal de la expansión urbana. En otros puntos de la periferia, en torno al muro, fueron apareciendo algunos pequeños núcleos que anticipaban la dirección de la expansión de la ciudad en la segunda mitad del siglo. Tal sucedió a lo largo y en torno de la carretera de Madrid y de la alameda de San Francisco y en las proximidades del baluarte de San Carlos, en el extremo suroccidental, en donde se ubicaron determinados oficios relacionados con el transporte y el comercio y con las actividades marineras y portuarias.

La ciudad de Alicante, durante la guerra de la independencia, no sufrió asedio alguno ni destrozos materiales causados por

el enemigo; sin embargo, la guerra afectó duramente a sus habitantes, porque, aparte de dañar gravemente el sistema productivo, como sucedió en todo el país, y particularmente las actividades mercantiles, aquellos tuvieron que enfrentarse a fuertes gastos y colaborar a duros trabajos, como los que se precisaron para levantar las nuevas murallas; asimismo fue muy gravoso el derribo del barrio de San Antón y, finalmente, la ciudad, en su función de retaguardia, tuvo que cobijar a numerosos refugiados y servir de desembarque y, consiguientemente, abastecer a unidades del ejército que desde Alicante había de desplazarse a los frentes de combate.

Ante la situación anterior, no es extraño que, una vez terminada la guerra, la ciudad tardara en recuperarse y creciera y se transformara lentamente; sin embargo, no debe deducirse que se entrara en una etapa de completa inactividad, porque ya a mediados de la segunda década se decidió facilitar la comunicación entre los tres núcleos que integraban el recinto amurallado, y más en concreto entre el casco antiguo y los barrios de San Francisco y Nuevo, ya que el muro que separaba a estos últimos se había destruido unos años antes, al finalizar la obra de ampliación anterior. Para ello se proyectó el derribo de la muralla que seguía la dirección de la actual calle de la Rambla de Méndez Núñez y aprovechar los escombros para cubrir el barranco lateral y elevar el centro de la amplia avenida resultante, en cuyos lados se plantaron árboles y se colocaron bancos, protegiéndolos con una verja; de manera que la unificación del casco urbano llevó consigo la aparición de un elemento que contribuía al embellecimiento de la ciudad. Este fue el origen de lo que, primero, fue Paseo del Vall, después de Quiroga y, más tarde de la Reina.

Pero, dada la gran densidad de las viviendas en el casco antiguo y la estrechez de las calles, los únicos cambios posibles en el paisaje urbano serían los que procedieran de la construcción de nuevos edificios sobre viejos solares y los que se logran reformando y dando mayor altura a los existentes, excepto en el barrio Nuevo, en donde podía llevarse a cabo una distribución racional del espacio y reservar algunos solares para la construcción de edificios de carácter público y destinar otros al esparci-

miento de la población, tal como sucedió con la construcción del cuartel del Rey, en 1816, y del teatro principal, en 1847, en la calle del Barranquet, actual avenida de la Constitución, y la apertura de la plaza de Santa Teresa (Plaza Nueva), que ordenaba el conjunto urbano de todo el barrio. También el barrio de San Antón se reconstruyó racionalmente, con calles rectas y amplias, en el que se levantó algún edificio público, como la plaza de toros, en 1846, y se destinaron algunos espacios al esparcimiento, como la alameda que desde la calle de San Vicente se prolongaba hasta el convento de los capuchinos y que, más tarde, en 1850, se remató con el paseo de Campoamor.

En las décadas de los cuarenta y cincuenta del XIX, como consecuencia de la aplicación de las leyes de desamortización de los bienes del clero regular, publicadas por el gobierno liberal, en 1836 y 1837, el casco antiguo de la ciudad conoció alguna remodelación importante, ganando dos pequeños espacios abiertos, mediante el derribo de los conventos de los agustinos y de los carmelitas, que habían sido entregados al municipio, y que se convirtieron respectivamente en las plazas de Quijano y del Carmen; en cambio, en el mismo núcleo histórico, con fachada a la calle Mayor y lindante con la muralla se hallaba el convento de los dominicos que, vendido en pública subasta y derribado, fue sustituido por el edificio, aún en pie, estructurado en torno al Pasaje de Amérigo, entre las calles Mayor y Altamira. J. Pastor de la Roca, en su *Guía del alicantino y forastero en Alicante*, publicada en 1875, se refería con las siguientes palabras a la venta y destrucción de dicho convento: “El gobierno que en Alicante carece de locales para sus oficinas en todos los ramos, pagando en concepto de alquiler crecidas sumas por los particulares que ocupan las mismas, pudo haberse resevado con dicho objeto este edificio tan capaz, tan sólido y situado precisamente en el punto más céntrico de la ciudad, ...obteniendo así comodidad, decoro y sobre todo grandes ventajas económicas. Lo contrario ha sido un errado cálculo de imprevisión...”. Con lo que los intereses de la Hacienda Pública se habían antepuesto a cualquier otro objetivo social o político, por tratarse de un solar, que, debido a sus dimensiones y localización, podía alcanzar un óptimo precio en el mercado. En el extremo occidental de la ciudad,

intramuros, el convento de San Francisco, también entregado al municipio y derribado, se convertía en la plaza del mismo nombre, permaneciendo en pie únicamente la iglesia; y en el barrio de San Antón el de los capuchinos se transformaba en Casa de Beneficiencia. Finalmente, en la calle del Vall, fuera de la vieja muralla, el convento de las capuchinas reformó, primero, su fachada para adecuarla a la nueva avenida, siendo ocupado más tarde su solar por la sucursal del Banco de España, tal como se mantiene en la actualidad.

Ya en la década de los cincuenta, ante una coyuntura económica favorable y la perspectiva de un importante crecimiento económico y demográfico, la ciudad de Alicante, una vez superada la resistencia de las autoridades militares, proyectó el derribo de las murallas, que se llevó a cabo a lo largo de los veinticinco años siguientes. Con ello la ciudad no sólo se abría hacia el oeste y el suroeste, anexionando las edificaciones extramuros y permitiendo los proyectos de ensanche que se elaboraron a partir de 1860 en esa zona, sino también se ocupaban y urbanizaban los terrenos extramuros a lo largo de la línea de la playa y del malecón del puerto. Así se efectuó la comunicación de la plaza de Ramiro con la playa y se construyó sobre el malecón el paseo de los Mártires, desde el baluarte de San Carlos hasta la plaza del Mar, que más tarde se convertiría en la Explanada.

La rápida transformación de la ciudad coincidió con un fuerte auge de la actividad comercial, intensificada, primero, con la llegada del ferrocarril, que enlazaba Alicante con Madrid y con el norte de la península, siendo la primera ciudad de la costa que lo lograba, y después en los años setenta, otra coyuntura favorable para el comercio de exportación impulsaría, más aún, el crecimiento urbano.

Las comunicaciones de la ciudad con el exterior: La red de caminos, el puerto y el ferrocarril.

La importancia de la ciudad de Alicante dependía lógicamente del papel que desempeñaba tanto en su entorno próximo como en el más amplio de todos los territorios de la monarquía

española; de ahí la destacada función que corresponde a los medios de comunicación en el desarrollo de la misma.

En las últimas décadas del siglo XVIII, el puerto y la red de caminos, que se complementaban entre sí, constituían esos medios, y así continuó hasta mediados del XIX, cuando Alicante quedó unida a Madrid por el ferrocarril; sin embargo, a lo largo de la primer mitad de ese último siglo, aunque en el puerto se hicieron también importantes trabajos, se puso especial interés en la reforma de la red y construcción de nuevos caminos para tratar de crear y definir con precisión, en torno a la capital, el territorio de la nueva provincia.

A principios del siglo XIX, Alicante era la sede de una gobernación, cuyos límites llegaban poco más lejos de los de su municipio, dentro de la gran provincia formada por el antiguo reino de Valencia. De ahí que las comunicaciones de Alicante con su medio geográfico próximo correspondieran a la influencia económica que ejercía; sin embargo, con la creación de la provincia, la función administrativa complementaría la influencia de la ciudad-capital y la haría llegar, en algunos casos, a lugares a los que no se extendía la anterior. Alicante disponía de un excelente camino, a través del valle del Vinalopó, para comunicarse con Madrid, el camino real, que en Almansa enlazaba con el camino de Madrid a Valencia por Albacete. Por ese mismo camino se efectuaba la comunicación terrestre entre Alicante y Valencia, ya que no existía la calzada de la costa; en cambio, era importante la comunicación marítima entre las dos ciudades. En segundo lugar, otra vía de comunicación, aunque frecuentemente en mal estado, era el camino que unía Alicante con Orihuela a través de Elche y que continuaba hasta Murcia. Por el contrario, no existía comunicación directa entre Alicante y Alcoy, sino a través de una senda a partir de Jijona, debiendo realizarse la comunicación entre las dos primeras ciudades por Villena. Finalmente, no existía ninguna vía estable a lo largo de la costa que uniera la ciudad con Denia ni con Torrevieja, sino unas meras sendas.

Como consecuencia de lo anterior, desde los últimos años de la década de los treinta, la Diputación Provincial adoptaría, con carácter prioritario, el proyecto de reparar los caminos que

se hallaban en mal estado, como el de Alicante a Orihuela, de abrir los caminos de la costa y establecer la comunicación entre Alicante y Alcoy a través de San Vicente del Raspeig y de Ibi; asimismo, la Diputación Provincial se proponía la reparación y apertura de los caminos transversales de la provincia, el de Denia a Villena por Alcoy, el de Alcoy a Sax por Castalla, el de Novelda a Orihuela y Murcia por Crevillente, etc. De esta manera se pretendía estrechar los lazos entre las cabeceras de las comarcas –cabezas de los partidos judiciales– y la capital de la provincia, con lo que la influencia administrativa que ejercería Alicante se convertiría en otro factor que impulsaría el crecimiento de la ciudad.

Estas comunicaciones, por otra parte, eran muy lentas, los vehículos que se utilizaban –carros arrastrados por mulas, caballos o bueyes– eran de escasa capacidad y muy incómodos, particularmente en aquellos tramos en los que, a causa de las lluvias o por el excesivo uso y la falta de reparaciones, se hallaban en mal estado, y, finalmente, algunos puntos del trayecto eran especialmente inseguros por las actuaciones de grupos de bandoleros que solían frecuentar ciertos tramos arriscados de los caminos, como sucedía en la “garganta de Crevillente”, en la transversal de Novelda a Orihuela, en donde, durante el primer tercio del siglo XIX, Jaime “el Barbudo” solía realizar sus asaltos y extorsiones a los viajeros.

El puerto de Alicante ha sido históricamente el factor principal de la evolución y del desarrollo de la ciudad desde su propio emplazamiento. El puerto ha servido de entrada y salida de mercancías, de hombres y de culturas y, por lo tanto, Alicante, a lo largo del tiempo, ha sido centro de acogida y de distribución de los productos e, incluso, de las ideas que llegaban a sus muelles. Además, la importancia del puerto y la función que desempeñaba estuvieron protegidas por el castillo de Santa Bárbara hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la evolución de la técnica militar redujo estas fortalezas a meros monumentos históricos. Ambos elementos, puerto y castillo, han condicionado la historia de la ciudad y explican la razón por la que históricamente Alicante ha sido tan codiciada. En un plano de la ciudad trazado por Manuel Miralles, en 1794, se refleja perfectamente la

posición de la ciudad entre los montes de Benacantil y Tosal, al E. y O. respectivamente, abriéndose desde el barrio de San Antón, por NE, hacia la huerta y prolongándose hacia el S. a través del puerto; finalmente, en el SO, desde la puerta de San Francisco, partía, en diagonal, el camino de Madrid. Es decir, se había captado en dicho plano todos los elementos que intervenía en la evolución de la ciudad.

En un documento de 1804 –*Informe incompleto sobre Alicante*–, escrito con finalidad defensiva, se describía el puerto de la siguiente manera: “La bahía de Alicante está formada por el Cabo de la Huerta o de la Alcodra que dista una legua al E. de la plaza y por el de Santa Pola o del Aljibe distante tres leguas al SO, siendo generalmente tres leguas de distancia de uno a otro Cabo.

“Su fondo es limpio, de arena firme y alga y de muy buen tenedero, todo lo cual lo constituye capaz de contener con seguridad los mayores armamentos sin riesgo de que peligre ningún buque (...) Además, como esta bahía es tan espaciosa, se puede entrar y salir de ella con todos los tiempos y para todos rumbos, cuyas circunstancias, su situación con respecto a la Corte y a lo interior del Reino, y los exquisitos vinos y otros frutos de que abunda el país, atraen a ella multitud de buques de todas naciones y constituyen a esta plaza por una de las más útiles y de mayor comercio de esta monarquía”.

En el texto anterior, por lo tanto, se insistía en el doble aspecto de plaza militar y centro comercial de Alicante, el segundo de los cuales, como se sabe, se había desarrollado sobremedida durante el último cuarto del siglo XVIII. Y será la función comercial lo que más llame la atención de los viajeros y estudiosos, tanto españoles como extranjeros, que visiten o hagan referencia a Alicante en sus obras. A título de ejemplo, baste citar a A. Laborde, entre los segundos, quien, en 1826, decía que “Alicante es el principal depósito del comercio del reino de Valencia, de Murcia, de Aragón y de una parte de Castilla la Nueva. Es la ciudad más comerciante de España, después de Cádiz y Barcelona; su gran bahía es una de las mejores y más bien resguardadas del Mediterráneo”; y entre los autores españoles, P. Madoz, veinte años más tarde, después de recoger el eco de las anteriores

descripciones del puerto, decía que “al género de vida a que más afición tienen los alicantinos es el comercial”.

Dadas esas características, se comprende fácilmente el interés de la ciudad de Alicante por ampliar el puerto, darle seguridad a sus muelles y dotarlo de servicios de manera que se potenciara su uso, y también la actitud de la monarquía, que aprobó sucesivamente los planos de ampliación y creó los organismos que debían dirigir las actividades que se llevaran a cabo. En ese sentido ha de interpretarse la concesión a Alicante de un consulado marítimo y terrestre con jurisdicción sobre la ciudad y los pueblos de la diócesis de Orihuela, en 1785, en el que, además de ejercerse las funciones administrativas correspondientes, se desarrollaba una importante actividad cultural con el establecimiento de las escuelas de dibujo, náutica y francés. Para albergar al consulado se construyó un edificio con fachada a la plaza del Mar, la misma en la que tenía el ayuntamiento su fachada principal.

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, varias disposiciones legales y los trabajos que intermitentemente se llevaron a cabo condujeron a la adecuación del puerto para ser capaz de soportar la afluencia de tráfico y mercancías que se dio desde el final de los años sesenta. Así, en 1803, Carlos IV aprobó los planos de ampliación y reforma diseñados por el ingeniero M. Miralles, y se dieron comienzo los trabajos, utilizando como mano de obra a los presidiarios que había en el correccional de la ciudad, siendo financiados mediante un impuesto sobre las mercancías que circulaban. En 1845, el muelle medía 386 metros, pero, por ser insuficiente, se elaboraron otros proyectos para ampliarlo en 300 metros más y aumentar la protección. Las obras terminaron en 1873. Desde el punto de vista administrativo, después de la concesión del consulado, en 1818 Fernando VII lo declaró *puerto de depósito*, con la finalidad de facilitar las operaciones mercantiles, y en 1855 fue reconocido como *puerto de interés general*.

Roca de Togores y Saravia, en 1882, en su *Guía de Alicante*, describía el puerto con las siguientes palabras:

“El puerto está formado por dos muelles de los cuales el del E. mide 664 metros de longitud y 25 de anchura media, y el

contramuelle o muelle de O. 540 metros de longitud y 10,73 de anchura. Ambos están enlazados por un muelle de costa de 938 metros de longitud, y separados en los extremos opuestos, mar adentro, por un espacio de agua de 83 metros y 59 centímetros que constituyen la entrada. El espacio total que ocupa es de 366.136 metros.

“La altura de sus diques desde su arranque del nivel medio, u ordinario, del mar, es de 1,6 metros, y en los extremos 2,40.

“La profundidad es de 9,75 metros en la puerta o entrada, y la mínima junto al muelle 1,67.

“Despréndese de estos datos que en una grande extensión no tiene calado suficiente para las embarcaciones y que como consecuencia de ello es reducidísimo, puesto que sólo puede habilitarse la parte del muelle y una muy corta del contramuelle”.

Alicante, por lo tanto, había conseguido disponer de un puerto de gran amplitud y muy seguro, aunque, a esas alturas del siglo, se observaran otras deficiencias importantes, consecuencia del crecimiento del tráfico marítimo, por una parte, y del aumento del arrastre y del calado de los barcos, por otra. Pienso que no es necesario insistir en las repercusiones que la reforma y la ampliación del puerto y el crecimiento del tráfico marítimo y, consiguientemente, de la actividad comercial representaron en la evolución de la ciudad.

Finalmente, el ferrocarril es el tercer medio de comunicación que, a mediados del siglo XIX, ejerció una influencia notable sobre la evolución de la ciudad de Alicante. Nunca será suficiente la insistencia que se ha hecho sobre la importancia y, consiguientemente, la significación del ferrocarril en la época de su aparición; no sólo aumentaba la capacidad y la rapidez del transporte y las comunicaciones, acercando entre sí a los hombres y a los mercados sino, lo que era más importante, alteraba profundamente el ritmo de la vida de las sociedades e introducía un elemento que distorsionaba el comportamiento de los hombres. El tiempo, que hasta entonces había discurrido de manera muy lenta y casi homogénea desde los siglos más remotos, sufría una fuerte aceleración y se convertía en algo sumamente valioso; con la

velocidad el tiempo adquiría valor en el mercado y la información se convertía en uno de los bienes más preciados. Velocidad, tiempo e información calarán profundamente en la vida y en la psicología de los hombres, a mediados del siglo XIX, y transformarán su comportamiento; y todo ello será efecto, en primer lugar, del ferrocarril. Pero las profundas repercusiones no fueron sólo sociales y económicas, sino también políticas y culturales, porque el ferrocarril facilitaba la rápida aplicación y control de las leyes e instrucciones del gobierno del Estado y la rápida movilización de sus fuerzas y recursos. El ferrocarril, por lo tanto, se transformaba también en un medio por el que tanto las distintas regiones como las voluntades se aproximaban entre sí y colaboraban en la consolidación del nuevo tipo de sociedad y Estado que había impuesto el liberalismo.

Dadas las características que se han señalado más arriba de la ciudad de Alicante, es indudable el interés que había de manifestar en que una vía de ferrocarril terminara en ella, a través de la cual quedara enlazada con Madrid y con el resto de las principales ciudades del Estado. De ahí que en fecha muy temprana, en enero de 1844, ya se interesara en la concesión hecha por el gobierno al ingeniero P. de Lara y Meliá para hacer los estudios y elaborar el proyecto de construcción del ferrocarril de Madrid a Alicante, desplazándose, incluso, a esta ciudad el concesionario, que, poco después, hubo de abandonar su objetivo por falta de recursos; pero dicha concesión fue transferida a la sociedad "Caminos de Hierro de María Cristina", constituida en Madrid en el mes de abril, de la que el ingeniero Lara era uno de los socios, y a cuya cabeza se puso el duque de Riánsares, esposo de la reina madre. También se interesó Alicante por la formación de esa sociedad, desempeñando un importante papel la Diputación Provincial, que, en palabras del cronista N.C. Jover, "comprendiendo las ventajas que la realización de aquel proyecto debía reportar al país, invitó a las personas que por su fortuna y posición social se hallaban en el caso de coadyuvar a su buen éxito a que tomasen parte en dicha empresa". A pesar de ello, la sociedad no pudo continuar con el proyecto por carecer de los suficientes medios financieros, por lo que hubo de disolverse, pasando la propiedad de la concesión del ferrocarril al marqués

de Salamanca. Por este motivo, en el mes de mayo de 1845, P. de Lara se reunió en el Consulado de Alicante con los accionistas de esta ciudad para anunciarles la disolución de la sociedad. Comentando estos acontecimientos, el mismo cronista escribía en 1863: “Estos trabajos de la sociedad y de la diputación provincial no fueron infructuosos, pues aunque el ferrocarril no se inauguró por entonces, prepararon el terreno facilitando la ejecución de la obra colosal que algunos años después se realizó..., cambiando por completo las condiciones y hasta el carácter de esta población”. En 1846, D. José de Salamanca comenzaba la construcción del ferrocarril de Madrid a Aranjuez, según los planos de Lara, que sería el primer tramo del proyecto inicial y terminaría en febrero de 1851.

La nueva concesión hecha por el gobierno al marqués de Salamanca para continuar la construcción del ferrocarril desde Aranjuez hasta Almansa despertó de nuevo el anterior intento y se planteó inmediatamente el proyecto de prolongarlo hasta Alicante; pero, en esta oportunidad, la burguesía de la ciudad y las instituciones municipales y provinciales tomaron la iniciativa de formar la sociedad del ferrocarril de Alicante a Almansa y solicitar la correspondiente autorización del gobierno. Una vez redactadas y publicadas las bases de la compañía, se pusieron a la venta las acciones que debían constituir el capital social, veinticinco mil a 2.000 reales, que ascendía a 12.500.000 pesetas. Estas acciones tuvieron una gran aceptación en el mercado, habiendo suscrito el ayuntamiento de la ciudad un importante paquete, para lo que tuvo que vender algunos de sus escasos bienes de propios, entre ellos la huerta de Valladolid, pero la mayor parte de ellas las adquirieron inversores de Barcelona, de manera que, a finales de julio de 1852, en una junta general de accionistas se aprobaron los estatutos y el reglamento de la sociedad, pasándose inmediatamente a solicitar la autorización de la misma y la concesión del ferrocarril.

La concesión de la construcción de la línea fue solicitada, a título individual, por el marqués de Río Florido, “senador del reino y vecino de alicante”, quien, además, era el presidente de la nueva sociedad ferroviaria; pero con ello Alicante intervenía, defendiendo sus intereses, en la polémica que se estaba llevando

a cabo en torno a cual debería ser el término de la línea de Madrid al Mediterráneo, para el que se barajaban tres ciudades: Alicante, Cartagena y Valencia. De ahí que el marqués, en su solicitud, adujera tres razones a favor de la primera: la menor distancia de Madrid a Alicante que a las otras dos, las mejores condiciones orográficas para construir la vía, y la situación más favorable del puerto alicantino para las actividades comerciales. Atendiendo a las anteriores razones, se otorgó la concesión solicitada por un real decreto del Ministerio de Fomento, el 4 de septiembre de 1852, y, unos días más tarde, el 21 del mismo mes, el marqués de Río Florido transfería sus derechos a la sociedad ferroviaria, que fue legalmente reconocida por una real orden provisional del 22 de diciembre del mismo año. La euforia ferroviaria que existía en Alicante era tal que, el 29 de marzo de 1853, a las afueras de la ciudad, en el llano del Espartal, se inauguraron las obras del ferrocarril, estando presentes el gobernador civil, la junta directiva de la sociedad ferroviaria, D. Ramón Campoamor, antiguo gobernador civil de la provincia y representante de D. José de Salamanca, uno de los principales accionistas de la sociedad, los ingenieros de la empresa constructora y de la provincia, y el abad de la Colegiata de San Nicolás, quien, asistido por el clero, bendijo aquellas obras “de tanta trascendencia para nuestro país”, según la expresión de N.C. Jover.

Los trabajos de construcción de la vía se llevaron a cabo entre 1855 y 1857; sin embargo, la sociedad ferroviaria, de nuevo por dificultades financieras, hubo de transferir a D. José de Salamanca, ya principal accionista, los derechos de concesión de la obra, bajo las condiciones de concluirla en el tiempo previsto y de reembolsar a los accionistas el capital invertido por cada uno, según el acuerdo de la junta general extraordinaria del 5 de junio de 1856. Ya en abril de 1855 el marqués de Salamanca había obtenido una subvención de quince millones de reales del Estado para realizar dicha obra. Sin embargo, el nuevo concesionario de la línea, aprovechando las posibilidades que daban la ley general de ferrocarriles, de mayo de 1855, y la de sociedades de crédito, de enero de 1856, entró en contacto con una de éstas, la Sociedad Española Mercantil e Industrial, ligada a la banca francesa de los Rotschild, a la que vendió los tramos ya construi-

dos de la línea de Madrid a Almansa y la concesión del de esta última a Alicante. Con ello la Sociedad Española Mercantil e Industrial se constituía en una gran sociedad de inversión extranjera porque anteriormente ya había adquirido, también por mediación del marqués de Salamanca, la línea de Madrid a Zaragoza y, en consecuencia, por escritura notarial, el 31 de diciembre de 1856, se formaba la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y al Mediterráneo (MZA). Esta fue la compañía que finalizó las obras de construcción el 27 de diciembre de 1857. El primer tren, procedente de Madrid, llegó a Alicante el 4 de enero de 1858, después de un viaje de diecisiete horas, y el 1 de marzo se ponía en explotación la línea; pero la inauguración oficial no se efectuó hasta el 25 de mayo, con cuyo motivo Isabel II se desplazó a Alicante utilizando el nuevo medio de transporte.

La llegada del ferrocarril a Alicante no sólo suponía la comunicación más rápida y la relación más estrecha con otras ciudades y regiones españolas, sino que Alicante, además, adquiría una proyección internacional al entrar a formar parte del proyecto económico de una sociedad financiera internacional. La Sociedad Española Mercantil e Industrial pretendía establecer, a través de España, un nexo para los continuos intercambios comerciales entre Francia y la colonia argelina del norte de África, aparte de comunicar, mediante el ferrocarril, las costas del Mediterráneo y del Atlántico. En la Memoria que la MZA presentó a sus accionistas, en mayo de 1858, se referían los que, a su juicio, serían los principales efectos de la línea de Madrid a Alicante: la afluencia hacia esta ciudad del tráfico de mercancías y viajeros, que se trasladan hacia España desde otros puertos extranjeros del Mediterráneo, “donde nuestra línea lleve y recibe todo lo que hacia el centro de la monarquía afluye o de él parte”; la organización de un servicio de vapores entre Marsella y Alicante que muy pronto entrarían en funcionamiento; y la gran actividad mercantil que ya existía en el puerto de Alicante. Respecto al último punto decía la Memoria: “En estos momentos el puerto de Alicante está lleno de buques, cargados de mercaderías, para cuyo transporte se hace preciso esperar un turno de

expedición, y los carros continúan haciendo su servicio ordinario para suplir nuestra insuficiencia de medios de transporte”.

Aunque Alicante dispuso del ferrocarril en una fecha relativamente temprana, no consiguió, en cambio, contar con una red a escala provincial. Sólo, a mediados de la década de los ochenta, entró en funcionamiento la línea de Alicante a Murcia, a través de Elche y Orihuela, construida por la Compañía de Ferrocarriles Andaluces; Alcoy, sin embargo, no ha logrado la unión ferroviaria con la capital de la provincia. Los ferrocarriles de vía estrecha han cumplido, en parte, esa función, como los de Villena a Alcoy y de Alicante a Denia.

Las repercusiones del ferrocarril sobre la ciudad de Alicante fueron indudables y rápidas, no sólo en los aspectos económico y demográfico, sino también en el urbanístico. La llegada del ferrocarril, que coincidió con el comienzo del derribo de las murallas exteriores, y cuya estación se construyó, junto al camino de Madrid, al final de la alameda de San Francisco, no sólo proporcionó a la ciudad otro importante edificio, sino que acotó un amplio espacio hacia el que tendió de forma inmediata su expansión, tanto con la construcción de viviendas como de almacenes para las mercancías. La prolongación de la vía hasta los muelles del puerto introdujo también al ferrocarril en el paisaje urbano.

La economía y la población

Economía y población son dos términos relacionados estrechamente de forma que la existencia y el aprovechamiento sistemático de los recursos naturales y de otras capacidades espaciales, no estrictamente económicas, como las estratégicas y de situación, no sólo pueden producir un proceso simultáneo de crecimiento económico y demográfico sino también convertirse en el factor principal de la evolución de un núcleo de población. La ciudad de Alicante reunía unas y otras condiciones y la conjunción de ambas tuvo ya unos claros efectos urbanísticos en la segunda mitad del siglo XVIII.

La ciudad de Alicante incluía en su término municipal parte de una zona muy feraz —la llamada *huerta de Alicante*—, de la que también participaban los municipios de San Juan, Villafranqueza y Muchamiel, que se regaba con el agua procedente del pantano de Tibi; por otra parte, la comunicación con Castilla y las características del puerto la convertían en un importante centro de comercio, lo que facilitaba, a la vez, el abastecimiento de las materias de primera necesidad; la población, además, contaba con un excelente complemento alimenticio, como era el pescado que extraía de la bahía. La ciudad, finalmente, como ocurría en todas las ciudades de la época, disponía de centros artesanales y manufactureros con los que respondía a la demanda propia. Así pues, durante toda la primera mitad del siglo XIX, y más aún antes de la llegada del ferrocarril, la ciudad de Alicante tenía bien asegurado su abastecimiento con los productos propios y con los importados, ya fuera de otras regiones del interior ya del extranjero.

La huerta de Alicante se hallaba situada al NE de la ciudad y, según la descripción de Pastor de la Roca, tenía unas dimensiones de 6 kilómetros, aproximadamente, de E. a O. y de 8 de N. a S., abarcando 30.660 tahullas de muy buena calidad, que Madoz calificaba de “hermoso vergel”, en el que se practicaba el típico policultivo mediterráneo. Según Carratalá Figueras, a principios del siglo XIX, en la huerta se producía “trigo, maíz, cebada, algarrobas, almendras, cáñamo, lino, barrilla, seda, legumbres, hortalizas, frutas, aceite y gran cantidad de vino de muy buena calidad”. Si bien la huerta dispone de las aguas del pantano de Tibi y de las que proceden de otros dos azudes situados en el río Monnegre, aguas abajo de aquél —el de Muchamiel y de San Juan—, con frecuencia los cultivos acusan la falta de riesgo debido a la escasez de la lluvia, siendo ésta la principal limitación de la agricultura alicantina, que también periódicamente se ve castigada por los efectos de las lluvias torrenciales que arrancan la tierra fértil y transportan materiales con los que soterran las cosechas.

Los cultivos de la huerta de Alicante, como ya había descrito Townsend, a finales del siglo anterior, estaban sometidos a un sistema de rotación, de acuerdo con las estaciones del año, lo

que permitía un mejor aprovechamiento y obtener un rendimiento más alto de las parcelas. Así pues, en el otoño se sembraba cereal, cebada o trigo, sobre todo la primera, que se recogía en la primavera siguiente o a principios del verano. Una vez efectuada esta recolección y preparada la tierra, se destinaba una parte al cultivo del maíz y el resto a productos hortícolas —sandías, melones, pepinos, guisantes y otras plantas—, que se recogían a lo largo del verano o a principios del otoño. A veces el cereal se cambiaba por el lino y el cáñamo suplantaba al maíz o a los productos hortícolas, cuyos ciclos de cultivo eran semejantes a aquellos que sustituían. Los árboles frutales ocupaban también un lugar importante entre los cultivos de la huerta, a los que se destinaban preferentemente las separaciones entre las parcelas o se alineaban a lo largo de las acequias y de las conducciones del agua del riego, entre ellos hay que enumerar los naranjos y limoneros, los ciruelos, albaricoqueros y cerezos; gran importancia tenían también las moreras, a las que se destinaban las alineaciones a lo largo de los senderos y veredas de la huerta. Pero los árboles y arbustos más representativos de la huerta eran el olivo, el almendro, el algarrobo y la higuera, que se plantaban entre los cultivos, y particularmente la vid, cuyos productos se hallaban en la base de la alimentación de la población de la ciudad y de su entorno y sus excedentes se destinaban al comercio o abastecían a la artesanía local o comarcal, como la elaboración de turrónes o de aguardiente. En la primera mitad del siglo XIX, a juicio de A. López Gómez, la situación de la huerta, aunque se mantenía en lo fundamental, en parte se había degradado por la reducción de los riegos a consecuencia del “entarquinamiento progresivo del pantano” y de las sangrías que efectuaban en las acequias los vecinos de los pueblos situados aguas arriba y por decadencia de la seda.

En la huerta de Alicante predominaba la pequeña propiedad y no existían grandes explotaciones, aunque esto no debe inducirnos al error de pensar en una distribución igualitaria de la misma, ya que las grandes diferencias entre las explotaciones en regadío se han de buscar no tanto en la extensión como en la productividad. Durante los dos primeros tercios del siglo XIX no se produjeron cambios importantes en cuanto a la propiedad, a la

tenencia de la tierra y a los tipos de cultivo de la huerta de Alicante, más aún, en 1848, Roca de Togores y Carrasco hablaba de un “estado de decadencia general”, aunque debe tenerse en cuenta aquellos propietarios que adquirieron tierras en la huerta o las ampliaron, participando en las subastas de las fincas desamortizadas que habían pertenecido al clero de la ciudad, tanto al regular como al secular. Entre las del primero, destacaban las propiedades de los conventos de las monjas de la Santa Faz y de los frailes agustinos y dominicos. Se trató, sobre todo, de comerciantes de la ciudad, que invirtieron no sólo en la huerta de Alicante sino también en otras huertas, como las de Villena y Orihuela, y en tierras de regadío de la provincia, y que actuaron no siguiendo criterios localistas, a la inversa de la mayoría de los compradores de bienes desamortizados, sino por motivos estrictamente económicos, adquiriendo fincas de alta calidad y, por lo tanto, muy rentables.

En el resto del término municipal de Alicante predominaba la aridez y las explotaciones agrícolas eran de secano y estaban dedicadas a cultivos de autoconsumo, a excepción de pequeños huertos y otras parcelas que disponían de riego eventual, mediante el aprovechamiento del agua de lluvia, recogida en pequeñas balsas, o de la que se extraía de pozos excavados en las zonas bajas del relieve. En las proximidades de la ciudad, además, se recolectaban algunas plantas silvestres que se elaboraban artesanalmente, después, como el esparto y la barrilla, dedicándose, incluso, parte de la producción a la exportación.

La ciudad de Alicante, por lo tanto, disponía de importantes recursos alimenticios, pero frecuentemente resultaban insuficientes por la eventualidad de las cosechas, a consecuencia de la escasez de las lluvias o de otros accidentes meteorológicos. Era en esos casos de necesidad cuando la ciudad solucionaba sus problemas de abastecimiento en el puerto, algunas veces, incluso, por métodos tan expeditivos, como en 1802, en que se requirió parte de la carga de trigo que transportaba un buque que había fondeado en su puerto. Así pues, de la misma manera que sucedía en otras ciudades marítimas, el puerto de Alicante no sólo era un factor del crecimiento económico, sino también un medio

seguro y rápido de abastecimiento, a través del cual la ciudad podía prevenir con alguna antelación los períodos de escasez.

Ya se ha visto más arriba el interés que tanto la ciudad como el Estado mostraron por el puerto, porque éste subvenía no sólo en ayuda de la ciudad sino también del resto de la corona en las épocas de desabastecimiento de subsistencias, y había convertido a Alicante en un importante centro comercial del Mediterráneo. Madoz recoge en su *Diccionario* los datos relativos al movimiento de buques y mercancías en 1843 y 1844. En primer lugar, llama la atención el alto número de barcos que entraron y salieron del puerto de Alicante, que en 1843 fueron 2.589, de los que la mayor parte, el 81%, se dedicaban al cabotaje y eran todos ellos de bandera española, y del resto, que comerciaban con otros puestos extranjeros, aproximadamente la mitad era de bandera extranjera. En segundo lugar, contrasta la diferencia del valor entre las mercancías que entraron y salieron, habiendo cubierto solamente éstas el 50% del valor de aquellas. En consonancia con lo anterior, la mayor parte de unas y otras mercancías se destinó al comercio de cabotaje, que en casi el 90% estaba integrado por productos españoles. Por otro lado, en el comercio de cabotaje tenían un gran peso el trigo castellano, que se enviaba a Cataluña, y los productos americanos y extranjeros, como el azúcar, el cacao, el bacalao inglés, los cueros, las maderas tintóreas, etc., que se redistribuían por otros puertos. Finalmente, hay una clara diferencia entre las mercancías importadas y las exportadas, porque las primeras eran fundamentalmente materias primas para la industria y productos industriales, aunque había una importante partida de bacalao y otras menores de especias; en cambio, las exportaciones eran también materias primas, pero de diverso origen, agrario la mayor parte, entre las que se incluyen dos importantes partidas de barrilla y de esparto, minero-plomo y materiales de construcción. En consecuencia, a mediados del siglo XIX, el puerto de Alicante desempeñaba una importante actividad que se vería potenciada unos años más tarde con la transformación de los transportes y de las comunicaciones interiores efectuada por el ferrocarril.

La puesta en funcionamiento del ferrocarril produjo un doble efecto sobre Alicante: aumentó el tráfico comercial y de

viajeros que procedía o se dirigía al interior y, a la vez, influyó notablemente sobre las actividades que se desarrollaban en el puerto. Según los datos recogidos en las memorias anuales de la MZA, publicados por J. Giner, el volumen de mercancías que se transportó desde Alicante a Madrid, entre 1858 y 1864, creció sucesivamente desde las 150.000 toneladas a las casi 280.000, cifra que, incluso, se había superado en 1863; en sentido inverso, el volumen transportado fue sensiblemente menor, situándose entre 1860 y 1864 en, aproximadamente, la mitad del anterior. Los productos que se transportaban en una y otra dirección reproducían prácticamente la relación de los que entraban y salían por el puerto de Alicante; hacia Madrid iban los cereales importados para compensar la escasez del interior, algunos productos que se cosechaban o se elaboraban en la región, como esparto, aguardiente, barrilla, arroz, tabaco, cerámica, tejidos, etc., y otras mercancías importadas, alimenticias e industriales, como salazón de pescado, coke, hierro en barras y fundido, etc.; hacia Alicante el ferrocarril transportaba principalmente materias primas, como madera de construcción y lanas, y productos alimenticios, como cereales, harina, patatas, etc., mercancías muy sensibles a la inestabilidad de las cosechas; de ahí que el tráfico en esa última dirección fuera más irregular. Así en la Memoria de 1865 puede leerse: "... Inundación en Valencia. Paralización producida por la guerra civil americana, ha reducido considerablemente nuestras relaciones con aquel importante centro de producción y consumo; una mediana cosecha tras otra, apenas suficiente para satisfacer las necesidades de cada localidad, no ha dado lugar a cambios y transacciones entre unas y otras provincias...". Pero ese tráfico ferroviario, lógicamente, debía tener repercusiones sobre las actividades del puerto, en el que, además, como consecuencia del aumento de los intercambios con el exterior, se registraba la presencia de barcos de mayor tonelaje; así, en 1866, en plena crisis económica y cuando el puerto de Alicante había reducido su tráfico con Cataluña por haberse abierto la línea ferroviaria de Barcelona a Madrid por Zaragoza, el movimiento de buques fue superior a los 2.200, pero con un valor y un tonelaje superior al de veinte años antes, siendo las partidas de exportación más importantes las de vino, plomo,

esparto y otros productos agrícolas de la región, cargamentos que experimentarían, sobre todo los dos primeros, un intenso crecimiento durante las dos décadas siguientes.

Pero, además, la línea de Madrid a Alicante registró una importante afluencia de viajeros, que, según las memorias citadas más arriba, entre 1858 y 1875, se situaron entre los seiscientos y setecientos mil viajeros, a excepción de 1870, en que no llegó a los quinientos mil, debido a que el puerto estuvo cerrado a causa de la epidemia de fiebre amarilla que se declaró en Alicante; en cambio, en 1860, se sobrepasó la cifra de los setecientos mil. La intensidad del tráfico de viajeros se explica no sólo por la importancia comercial de Alicante, sino porque de su puerto partían buques hacia Marsella, Orán, las Islas Baleares y Cádiz, en donde se enlazaba con la línea que iba a las Antillas. Esta línea ferroviaria se utilizó, además, frecuentemente para el traslado de tropas.

La ciudad de Alicante, por lo tanto, en las décadas centrales del siglo XIX, se había convertido en un importante centro de comercio nacional e internacional, en lo que el puerto y el ferrocarril habían actuado como factores fundamentales; sin embargo, a la vez, la ciudad había crecido y era la capital de una provincia densamente poblada, a la que proporcionaba servicios y otros productos alimenticios y manufacturados, es decir que en sí misma constituía un valioso centro comercial. Ello hizo que el grupo de comerciantes asentados en ciudad, sobre todo los mayoristas, muchos de ascendencia extranjera, francesa e italiana, desempeñaran una notable influencia social y política y estuvieran presentes en las instituciones locales y provinciales. Finalmente, por el mismo interés comercial que tenía Alicante, a mediados del siglo XIX, se había convertido en sede de un buen número de legaciones consulares extranjeras, que según Madoz eran las de Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Roma, Prusia, Suecia y Noruega, Lubek y las Ciudades Hanseáticas, las vice-consulares de Brasil, Francia, Bélgica y Portugal, y un agente consular de los Estados Unidos de América.

En contraposición a lo dicho, en la ciudad de Alicante las actividades del sector secundario tenían un peso mucho menor

que las comerciales e, incluso, las agrícolas; exceptuada la producción que salía de la fábrica de tabacos, el resto de las actividades artesanales se dirigían sobre todo a satisfacer la demanda de la propia ciudad. En el citado *Informe de 1804* se recoge una relación de “fábricas, oficios y número de gente empleada”, que refleja perfectamente la situación a principios de siglo. Aparte de la fábrica de tabacos, en la que había empleadas 800 mujeres, y de los “matriculados y gentes de mar”, que ascendían a 390, los oficios que ocupaban a más de cien personas eran los “carpinteros, carreteros y toneleros”, los sastres, los “albañiles y canteros”, los zapateros y los toneros; por debajo quedaban los empaquetadores, los cordeleros de esparto y los sarrieros y esparteros; en torno a los treinta empleados eran los panaderos, los correoneeros, los chocolateros, los cerrajeros y los peluqueros; menos eran aún los tejedores de lienzo y de algodón y los que se ocupaban en la fabricación de aguardiente; y de uno a diez empleados tenían una serie de oficios de menos importancia pero todos ellos necesarios para la economía doméstica. Aparte de la anterior relación, en el *Informe* se hace referencia también a los trabajos que muchas mujeres y “gente pobre” hacen en sus casas con esparto para la “fábrica de libanes y filites de esparto”.

La situación anterior se mantuvo prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XIX, que, incluso, retrocedió en las décadas de los treinta y de los cuarenta, años en los que, como se verá más adelante, la población de la ciudad retrocedió de forma acentuada. Carratalá Figueras decía, refiriéndose a la industria, que, aparte de la fábrica de tabacos, “en los primeros años del siglo había otras veinte fábricas, reducidas en 1833 a cuatro o cinco. Completaban el cuadro de nuestra industria, la doméstica del “filet”, unas cuantas yeserías y varios tejares”. Cuando, en las décadas centrales del siglo creció la población, el sector más beneficiado fue el terciario, las actividades relacionadas con el comercio y los servicios; el crecimiento y transformación del secundario no se dió hasta el último cuarto del siglo, cuando pudo utilizarse fuentes de energía, fáciles de producir y cómodas de transportar, como la electricidad y el petróleo.

Una mención especial merece la fábrica de tabacos que estableció el gobierno de la monarquía en Alicante, en 1801,

aprovechando las excelentes comunicaciones de la ciudad con el exterior y con el resto de España. Para ello el obispo de la diócesis de Orihuela cedió parte de su antiguo palacio –Casa de la Misericordia–, situado en el barrio de San Antón, y que terminó ocupándolo totalmente, a excepción de la iglesia. Los cigarros elaborados en Alicante eran de alta calidad y contaron con una fuerte demanda en el mercado, por lo que la fábrica creció ampliamente, dando trabajo a un gran número de mujeres, que procedían de la propia ciudad y de los pueblos de la huerta, primero, más tarde, incluso, de otros más alejados, como de Elche y Crevillente, pero antes debía de producirse la modernización de las comunicaciones. A mediados del siglo, la fábrica de tabacos daba trabajo a más de tres mil operarias, y no hace falta insistir en las repercusiones económicas que ello tenía en la ciudad y, particularmente, para las clases más bajas de la sociedad.

La explotación de los recursos naturales y agrícolas y el aumento de las actividades comerciales debían reflejarse en el crecimiento de la población; sin embargo, durante la primera mitad del siglo XIX, la población de la ciudad de Alicante no sólo se mantuvo estancada, sino que las décadas de los treinta y cuarenta experimentó un profundo retroceso, aunque ésta es una cuestión que hay que precisar, particularmente analizando el distinto comportamiento de la población urbana y de la rural. Aunque hay que tener en cuenta cierta falta de precisión debido los métodos de recuento utilizados, tanto en los padrones de la primera mitad del siglo como en los primeros censos oficiales, la población de Alicante evolucionó de la siguiente manera: En 1803 era de 21.447 personas, prácticamente las mismas que en 1834; sin embargo, en 1840 eran 18.123; en 1850, 19.650; y en 1860, 31.162. Por lo tanto, en números absolutos, se dió un estancamiento a lo largo de las tres primeras décadas del siglo, al que siguió una profunda caída en las dos décadas siguientes, y se produjo una fuerte recuperación en la década de los cincuenta. Ahora bien, la población estrictamente urbana se mantuvo, primero, más estable y, después, creció más rápidamente que la rural. En 1803, vivían en el caso urbano unas 13.000 personas, y los habitantes de 1841 eran 14.396, y, en 1870, cuando la población del municipio era de 29.550, la población urbana ascendía a

21.719. Así pues, la población del casco urbano de Alicante, en la primera mitad del siglo XIX, a excepción de los períodos que siguieron a las graves crisis demográficas, no estuvo nunca por debajo de la cifra alcanzada en 1803; ahora bien, estuvo sometida a un largo y profundo estancamiento hasta la década de los años cuarenta, y experimentó un fuerte crecimiento en las décadas siguientes. En cambio, la población rural, durante el mismo período, se halló en una situación mucho más crítica; aquella era prácticamente la misma en 1803 y en 1870, y sufrió una fuerte reducción en los años treinta y cuarenta. Esa situación se explica por las repetidas afirmaciones acerca de la decadencia general en la que se hallaba la agricultura, el mal estado del pantano y de las conducciones del agua de riego y de las inclemencias del tiempo.

La población de Alicante, durante el período estudiado, presentaba las características del régimen demográfico antiguo, con altas tasas de natalidad, en torno o por encima de cuarenta por mil, y también con altas tasas de mortalidad, alrededor de treinta por mil, aparte la reiterada presencia de fuertes crisis demográficas causadas por el ataque de enfermedades infecciosas. De ahí que la duración media de la vida estuviera muy por debajo de los cincuenta años y la tasa de mortalidad infantil y de los adultos jóvenes fuera muy alta, como puede deducirse, más abajo de la relación de enfermedades con mayor letalidad en la ciudad. Y, por lo mismo, durante toda la primera mitad del siglo, el sector activo predominante fue el primario, tanto en el municipio como en el casco urbano. Según A. Ramos Hidalgo, en 1841, se dedicaban al sector primario más del 42% de la población de la ciudad, situándose los otros dos sectores en torno al 28% cada uno; en cambio, en 1870, se había producido un cambio espectacular en la ciudad, donde al sector terciario pertenecía más del 47% de los activos, hallándose el primario y secundario alrededor del 26%; y en el municipio, el sector primario mantenía el 41% pero el terciario había alcanzado el 38% a costa de la reducción del sector secundario.

A lo largo de los dos primeros tercios del siglo XIX, la población de Alicante, como la del resto del país, pasó por una serie de crisis económicas y demográficas, que interrumpieron o

redujeron el crecimiento de la población. Las crisis de subsistencias, a pesar de la situación favorable que ocupaba Alicante, asolaron con frecuencia a la ciudad; no transcurrió ninguna década, durante la primera mitad del siglo, en la que, al menos, no se presentaran dos años de fuerte escasez, y sucedió lo mismo en los años cincuenta y sesenta. Esas crisis tuvieron unas repercusiones más graves debido al alto crecimiento demográfico que se dió en la segunda mitad del siglo XVIII, a la crisis económica generalizada con la que empezó el siglo y que a Alicante, como a otras ciudades portuarias, afectó con dureza por la casi pérdida total del comercio con las colonias americanas y la prolongación de la guerra de la independencia, a la que siguió una larga atonía económica. Esa situación contribuye a explicar el estancamiento demográfico y el estado de decadencia general de los sectores más tradicionales de la economía —la agricultura y la industria—, en los que no se produjeron alteraciones importantes hasta que no tuvo lugar la reactivación del comercio.

Pero la población de Alicante, aparte de sufrir las repercusiones de las crisis de subsistencia, tuvo que soportar repetidas veces la invasión de enfermedades infecciosas con altos índices de mortalidad, como el sarampión, la viruela y la fiebre amarilla, que se desarrollaba muy fácilmente en Alicante a causa de sus condiciones climáticas y ambientales. Los ataques más fuertes de esa última enfermedad en Alicante tuvieron lugar en 1804 y 1870; en la primera, durante el último trimestre del año, murieron 2.777 personas, y en la segunda, desde mediados de septiembre a finales de noviembre, los muertos fueron 1.380 de una población urbana que no llegaba a los 22.000 habitantes, de los que fueron invadidos 5.353, y de éstos, por lo tanto, murieron el 25%. Pero, además, Alicante, como el resto del país, sufrió el contagio de la enfermedad infecciosa más característica del siglo XIX, el cólera morbo. Las principales invasiones se produjeron en 1834, 1854 y 1885, pero en 1859 y 1865 tuvieron lugar brotes de cólera con menor intensidad. El ataque de 1834 se dió entre el 23 de agosto y el 2 de octubre y murieron 830 personas de todas las edades porque esa enfermedad no presentaba preferencia por un grupo determinado de edad. La ciudad procuró evitar el contagio sometiendo a la población al aislamiento, controlando la

entrada de personas y alimentos desde el 27 de julio y fijando los lugares a los que debían dirigirse quienes sintieran síntomas de probable invasión; pero aquellas medidas resultaron ineficaces. En el brote de 1854, que se produjo entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre, murieron 1.900 personas, entre ellas el gobernador civil, D. Trino González de Quijano, que se contagió asistiendo personalmente a los enfermos, por lo que ha sido considerado como uno de los ciudadanos más ilustres de la ciudad.

M.A. Esteve ha analizado en los *Registros Parroquiales de Santa María* las causas a las que se atribuían las defunciones, entre 1840 y 1900, mostrándonos de esa manera el cuadro sanitario de la ciudad. La enfermedad a la que se le atribuían un mayor número de óbitos, el 11,5%, era la *inflamación*, de difícil etiología, y que se hacía constar a falta de un diagnóstico más preciso; en segundo lugar, la *pulmonía*, con el 9,5%; seguían las infecciones relacionadas con la *etapa de la dentición* con el 6,7%; entre el 4,5 y el 4% aparecían *la gastritis y las enfermedades intestinales, la difteria, la tuberculosis y la viruela*; el *sarampión* causaba el 3,1%; y en torno al 1%, entre otras, aparecían *la fiebre amarilla y la enterocolitis*.

Finalmente, un tercer factor que afectó a la población de la ciudad, como a toda la provincia, fue la emigración. Ante el prolongado estancamiento económico muchos alicantinos, particularmente de las partidas de la huerta, optaron por el cambio de residencia y la búsqueda de trabajo en otras regiones del país; en faenas de temporada, como la siega o la realización de obras públicas; pero otros se trasladaron al norte de Africa, a Argelia, en principio también en desplazamientos temporales, que, en muchos casos, se convirtieron en definitivos. Aunque referido a todos los emigrantes alicantinos, J.B. Vilar recoge un texto de un viajero francés sobre la aptitud de este grupo de emigrados en el norte de Africa: “Se les ve circular como por su casa, gravemente, con zaragüelles blancos, polainas de lana y la manta valenciana en bandolera”. A partir de la década de los cincuenta, para los habitantes de la huerta y del resto del municipio resultaba atractivo trasladarse a Alicante, en donde se estaba reactivando la economía y se emprendían importantes obras públicas, contribuyendo de este modo al crecimiento demográfico de la ciudad.

Condiciones de habitabilidad e higiene

Esta cuestión tiene tanto interés para el lector de hoy como para los vecinos de Alicante en el siglo pasado, a lo largo del cual, con el crecimiento urbano, cambió el concepto de ciudad, incorporando a los bienes de la comunidad, junto al aspecto de los edificios, la fortaleza de sus defensas, la belleza de sus fuentes y la espaciosidad de las plazas, la limpieza de sus calles y la higiene y el acondicionamiento de las viviendas. Una ciudad no sería ya sólo algo bello y fuerte, sino también algo agradable, limpio y cómodo, y, en definitiva, habitable.

Alicante, a principios del siglo XIX, como casi todas las ciudades, era un conjunto compacto de casas y edificios, ordenados, en su mayor parte, a lo largo de calles estrechas y empinadas, y cercado por un muro. Pero, en el interior de ese conjunto urbano, las condiciones de habitabilidad eran muy deficientes. Las calles, casi durante todo el año, estaban cubiertas de polvo, que levantaban el viento y el continuo discurrir de los carros y animales de tiro, y el resto del año estaban repletas de barro y lodo, producidos por la lluvia e, incluso, por las aguas sucias que arrojaban los vecinos. Las calles, además, no tenían pavimento ni estaban empedradas, lo que dificultaba sobremanera su limpieza, únicamente se había levantado a lo largo de las fachadas unas aceras, a veces, incluso, de forma discontinua. Es sintomático que la plaza del Mar, a la que miraban la fachada principal del Ayuntamiento y la del Consulado se conociera popularmente como “plaza o calle empedrada”, y constituía el lugar preferido por los vecinos para pasear.

Esas calles sucias y polvorientas, además, estaban llenas de malos olores a causa de las suciedades e inmundicias que se arrojaban desde el interior de las viviendas, el estiércol con el que regaban las calles los animales de tiro y los domésticos, que nadie recogía, y por la existencia dentro de la ciudad de cuadras, establos y de los obligados basureros. Las calles sucias y malolientes, habida cuenta de la temperatura agradable y de la humedad de la ciudad, eran un excelente criadero de moscas, que podían transmitir todo tipo de enfermedades e infecciones. Alicante, por lo tanto, no sólo era una ciudad sucia sino también

insana. En la descripción que hace Carratalá Figueras sobre Alicante en la época de Fernando VII, se recoge un hecho bastante representativo que se atribuye al cónsul de los Estados Unidos. Este importante representante extranjero, que vivía en una de las calles principales de la ciudad, se dirigía al ayuntamiento, quejándose de estar obligado a tener cerradas permanentemente las habitaciones de su casa “para defenderse un poco de la fetidez del ambiente”.

Las autoridades municipales se ocuparon con cierta reiteración de la limpieza y del estado sanitario de la ciudad, dirigiéndose a los vecinos mediante bandos, poco efectivos, si se tiene en cuenta la continua repetición de los mismos. Para ilustrar la causa de la suciedad y de los malos olores de las calles es adecuado un bando del 21 de febrero de 1813, en el que se prohibía, entre las diez de la mañana y las diez de la noche, verter basuras y estiércol, abrir las cloacas de las casas y hacer las necesidades o arrojar agua sucia a la calle. Es decir que se recogían las basuras y se limpiaban las calles ya muy entrado el día, sobre lo que también se manifestaban muchas protestas porque el carro sobre el que se depositaban recorría la ciudad descubierto y difundía los malos olores por toda ella. En otro bando, de 1842, se prohibía depositar el estiércol en las calles, éste debía extraerse a determinadas horas y conducirlo fuera de la ciudad, a los estercoleros, en carros preparados al efecto para que no lo derramaran por las calles, asimismo se prohibía criar ganado de cerda dentro de la ciudad y se mandaba transportar a los animales muertos a extramuros, a la partida de Babel, en donde se enterrarían en una zanja abierta al efecto. Se prohibía también dar de beber a los animales, lavarse las personas o cualquier clase de objeto doméstico o de trabajo en los pilones de las fuentes; y también se establecían algunas normas sobre el estado en que debían hallarse los alimentos que se despacharan en el mercado. Entre una y otra fecha, como puede advertirse, se habría dado un avance importante, si nos atenemos a los textos municipales, aunque todavía se estaba muy lejos de imponer y controlar la limpieza de la ciudad y, más aún, que los vecinos asumieran esa obligación. En algunos momentos determinados, cuando el estado de las calles de la ciudad estaba más descuidado, las autoridades municipales

solicitaron la mano de obra de los presidiarios, para que, a bajo coste, efectuaran la limpieza y reparación de las mismas, como sucedió en 1813 y 1833.

En la segunda mitad del siglo XIX, con el crecimiento de la ciudad y la mayor actividad económica, penetró más hondo la necesidad de la limpieza y de la higiene pública y privada; de ahí, el mayor interés del municipio, la difusión de esas ideas entre la población y los escritos dirigidos a las autoridades para que tomaran parte en promoverlas y buscaran los medios para aplicarlas. En ese contexto debe situarse la publicación de sendas “memorias higiénicas” de Alicante en 1884 y 1894, que juzgo conveniente citarlas aquí, a pesar de hallarse un poco alejadas de mi marco cronológico, porque en los aspectos relativos a la limpieza y la higiene los progresos son más lentos que en otros y, en definitiva, la situación en la que se hallaba Alicante, a finales del siglo, recordaba mucho de las décadas centrales.

Las calles, según los autores de las memorias higiénicas, no sólo estaban sucias en la superficie, seguían sin pavimento, a excepción de la calle Mayor que había sido empedrada, polvorientas en verano y llenas de barro en invierno, sino, lo que consideraban muy grave, el subsuelo estaba en peor estado aún, porque las cloacas se encontraba llenas de inmundicias en descomposición, expandiendo los malos olores por la ciudad y convirtiéndose en foco de infecciones. En ese estado, las cloacas no podían limpiarse adecuadamente cuando llovía; de ahí que arbitrasen distintos medios tanto para limpiarlas como para ventilarlas, uno de los cuales suponía la adopción de otras mejoras y reformas en las fachadas de las viviendas y en las aceras de las calles; se trataba de sustituir los canalones de madera, que conducían el agua de la lluvia por la pared de las fachadas hasta unos centímetros del suelo, por otros de hierro o zinc que, empotrados en la pared, debían conducirla desde los tejados hasta las cloacas, por debajo de las aceras; aparte del agua, esas canalizaciones aportarían aire para ventilar las conducciones subterráneas. La anterior medida debía completarse con el empedrado de las calles, que se realizaría con una leve inclinación del centro a los lados, para facilitar el lavado y la limpieza, ya que el agua de

lluvia y la derramada se encaminaría por sí misma a los laterales de las calles y por éstos a la boca de las cloacas.

Pero, si la situación de las calles era más bien deplorable en fecha tan avanzada del siglo, no era mejor el estado de las viviendas, al menos en los barrios altos y bajos de la ciudad, en los que vivían las clases con menos recursos y, consiguientemente, la mayor parte de la población. En la parte alta, se hallaban los barrios de Villavieja, Santa Cruz, Carmen, San Roque, Arrabal Roig, parte de San Antón y el extremo occidental del Barrio Nuevo; en la parte baja, el barrio de San Francisco y, en particular, las calles que se ordenaban en torno a la plaza de las Barcas, hoy de Gabriel Miró. Las viviendas, que en su mayoría eran de planta baja y de dimensiones muy reducidas, no alcanzaban los veinte metros superficiales, carecían de patios y las calles eran estrechas y empinadas en la parte alta de la ciudad. La descripción siguiente es de una rotundidad sobrecogedora: "Las casas no tiene más que la puerta de entrada y únicamente por ella puede entrar la luz y el aire, las familias viven allí hacinadas en tres o cuatro habitaciones, mezcladas en confuso montón con los animales domésticos; la luz artificial y el aliento y las emanaciones de toda clase y condiciones, vician aquella atmósfera que respiran". El anterior cuadro se agravaba más aún, en los barrios altos de la ciudad, con el calor sofocante que reinaba durante la mayor parte del año y, en particular, durante los meses de abril a octubre, y en los bajos, con la persistente humedad.

Pero la ciudad de Alicante, aparte de lo anterior, contaba con otros focos externos que contribuían a deteriorar más aún el ambiente interno. Esos eran los muladares, los estercoleros, el cementerio y el puerto. Los dos primeros, situados en un barranco de la vertiente del Tosal, junto al castillo de San Fernando, y en el espacio abierto entre la muralla y la estación del ferrocarril, respectivamente, porque el poco cuidado de los usuarios y la escasa vigilancia de las autoridades los convertían en focos de infección muy próximos a la población; algo semejante sucedía con el cementerio, que se hallaba enclavado en la vertiente occidental del Tosal, separado de la ciudad por una pequeña loma, y a sólo 800 metros, se decía en 1894, de la avenida de Maignonne. El cementerio había sido construido en 1804, cuando, como

consecuencia del elevado número de defunciones por la invasión de la fiebre amarilla, no sólo el antiguo del Benacantil fue insuficiente sino que se abandonó casi definitivamente la práctica del enterramiento en las iglesias. En los años sesenta del pasado siglo, a pesar de las continuas ampliaciones, el cementerio del Tosal estaba lleno y las sepulturas debían abrirse sin haberse consumado la descomposición de los cadáveres; estos hechos, junto a la costumbre de enterrar en nichos, la mala calidad de la tierra para acelerar la descomposición y las aguas que, en tiempo de lluvias, descendían del cementerio hacia el barranco de San Blas, que por la estación del ferrocarril se dirigían hacia el mar, convertían al cementerio en otro de los focos peligrosos para la salud de la ciudad.

Finalmente, el puerto, a pesar de la importancia que tuvo, como se sabe, para el crecimiento de la ciudad, era, asimismo, un foco de infecciones, porque la ciudad no sólo estaba abierta al mar sino que las brisas y los vientos dominantes eran los del E., y la población alicantina tenía la costumbre de pasear, primero, por el malecón y, después, a medida que la zona se fue urbanizando, por el paseo de los Mártires, el antecedente de la Explanada. El puerto, sin embargo, era un lugar sucio y maloliente porque allí y en sus inmediaciones desembocaban las cloacas de la ciudad; tal era el estado de suciedad y pestilencia del puerto que, como dice Roca de Togores y Saravia, algunos propusieron abrir dos portones, en el muelle y contramuelle, para crear una corriente de agua que arrastrara las impurezas, aunque ello supusiera su anegamiento. En el puerto, además, solía arrojarse directamente escombros y basuras, y a él iban a parar todos los desperdicios y deshechos procedentes de la plaza del mercado, cuya puerta daba a la entrada del muelle: "... las tripas de pescado destinado al interior, que abren, limpian y salan los industriales frente a la plaza del mercado, y las barreduras, frutas pasadas y desperdicios de toda clase, de los buques anclados en andana o amarrados a los muelles".

Otra cuestión de gran importancia para la higiene y el estado sanitario de la ciudad era el aislamiento de los enfermos infecciosos y la desinfección de las camas y habitaciones que habían sido ocupados por aquellos. En estos aspectos, incluso a

finales del siglo, el abandono era total, tanto en los domicilios particulares como en los hospitales, por la desinformación, el descuido de las autoridades sanitarias y por la confusión de los particulares entre la fatalidad del destino y los sentimientos humanitarios, por un lado, y el peligro real de infección, por otro. Los relatos de los autores de las memorias higiénicas sobre estas cuestiones son impresionantes. Así los ejemplos de las madres, acompañadas de sus hijos pequeños, ante la cama de un enfermo de difteria, a pesar de las protestas del médico. Se decía en la memoria de 1894: "Por ignorancia o por terquedad no han abandonado al enfermo mientras no arrojó el último suspiro y, aún entonces, han ayudado a la desconsolada madre del diftérico a cubrir de flores el cadáver de su tierno niño, y han consentido, si no han mandado, a los suyos, que acompañaran a su amiguito hasta darle sepultura". Lo mismo ocurría con la desinfección, ya que no se tenía la precaución, por ejemplo, de separar las ropas usadas por unos u otros enfermos, en los establecimientos públicos, pasando todas por el mismo proceso de limpieza y, consiguientemente, mezclándose las de unos enfermos con otros en la misma colada, fueran infecciosos o no. Este texto está tomado de la misma memoria: "Todo se hace lo mismo, las ropas al montón de la colada, si es que se hace esta operación; que si no, van directamente al lavadero empapadas con el vómito o las deyecciones del colérico, con la membrana diftérica o la pus o las costras del varioloso; allí se mezclan con otras ropas y en la misma canasta que las llevaron al lavado, las colocan una vez lavadas y secas". No se utilizan prácticas distintas en la desinfección de las habitaciones en las que muere un infeccioso, no se lava siquiera y como máximo se quema en una cazuela un puñado de azufre; si el infeccioso había muerto en su propia casa, la costumbre era aún más peligrosa porque "la familia del muerto abandona la casa para vivir en otra y el nuevo vecino, que nada sabe de lo ocurrido, tiene su ignorancia como preservativo contra la infección o el contagio". Sólo muy pocas familias de la ciudad, por su grado de cultura, eran conscientes de la necesidad de la higiene y de la desinfección y, en esos casos extremos, tomaban las medidas que, en aquella época, recomendaba la ciencia.

Una de las principales causas de los muchos males que

aquejaban a la ciudad y al vecindario de Alicante era la permanente escasez de agua, problema que se agravó a partir de la década de los años sesenta cuando, debido a la mayor extracción y consumo, los manantiales de Casa Blanca y Valladolid, que habían abastecido tradicionalmente a la población, se secaron. Entonces Alicante, siempre sedienta, comenzó un triste calvario para buscar el agua de pozos y empresas particulares, primero, de San Vicente y de la Alcoraya, de donde, o bien por arrendamiento del ayuntamiento o por venta directa de las empresas propietarias de las aguas, se surtían las fuentes y se satisfacía la demanda de la población, y después, de Sax y de Villena, pero estas aguas no llegaron a Alicante hasta los últimos años del siglo.

Finalmente, juzgo también de interés tratar en este apartado de la alimentación de los alicantinos, ya que la fortaleza biológica de éstos estaba en estrecha relación con su resistencia a las enfermedades. Durante toda la primera mitad del siglo, debido a las grandes dificultades en las comunicaciones interiores y a pesar de la importancia del puerto, las posibilidades de autoconsumo tuvieron un destacado papel; de ahí la alta participación que tuvieron en la dieta de la mayor parte de los vecinos de Alicante las frutas y verduras y el pescado, fresco o en salazón; en cambio, la carne era un producto escaso y muy caro para la mayoría, también el pan, aunque no faltaba, era de mala calidad, y el vino, abundante y de buena calidad en la huerta, pero el que se bebía era malo y caro a causa de los impuestos que gravaban los consumos. Esta situación se mantuvo también en la segunda mitad del siglo, aunque con algunas variaciones por la mayor agilidad del tráfico. En una de las memorias, citadas más arriba, se decía: "En éste (país), donde por falta de pastos no se cría ninguna clase de ganado y los que vienen destinados a la alimentación enflaquecen a los pocos días, se crían en cambio hermosas frutas y legumbres, riquísimas verduras; el mar nos da pescados sabrosos en abundancia; y en diferentes épocas se reciben grandes cargamentos de bacalao que se exporta al interior dejando para el consumo de la localidad una buena parte".

El régimen alimenticio de la mayor parte de la población de la ciudad se componía de un *desayuno*, que consistía en "una

taza de café o una copa de aguardiente"; el *almuerzo*, a las 8 de la mañana, en el que tomaban "un pedazo de pan y un trozo de atún, de bacalao o pescado frito", no acostumbrando a tomar vino a esa hora; la *comida*, a las 12, formada por "un plato de arroz con bacalao u otra clase de pescado...; algunos días hacen el arroz con alubias y verdura... y acompañan la comida de pan de segunda, y de un vino que, por lo menos, tiene una tercera parte de agua"; y la *cena*, en que toman "unos pescados fritos, o unas patatas cocidas, o un trozo de bacalao frito, pan y vino". Algunos días mejoran la dieta y "comen el clásico cocido", pero esto no sucede más de ocho veces al cabo del año. Al menos un tercio del salario han de dedicarlo diariamente a comprar el pan, porque los obreros, que ganaban poco, de 8 a 10 reales al día, solían tener las familias más numerosas. El régimen alimenticio de la mayor parte de la población de Alicante era claramente "insuficiente", estando faltos sus organismos de algunos elementos importantes; de ahí que frecuentemente fueran presas enfermedades e infecciones.

La educación y la cultura

Alicante, a principios del siglo XIX, era una ciudad de mediana población, que pertenecía a la provincia de Valencia, y había adquirido, en el siglo anterior, un gran peso económico, aprovechando las excelentes facultades de su puerto; en cambio, su función administrativa se reducía a ser cabeza de una gobernación y sede del Consulado del Mar, y la cultural era prácticamente inexistente. Más aún, la capital cultural —y clerical— del sur del antiguo Reino de Valencia era Orihuela, sede del obispado y de una universidad, en la que durante los dos siglos anteriores se habían impartido estudios de teología, filosofía, derecho y medicina. En torno a esas dos instituciones, por lo tanto, se había desenvuelto la actividad cultural y científica del tercio meridional del territorio valenciano. La Iglesia —obispado, cabildo catedralicio y frailes dominicos— había ejercido una función tutelar sobre la universidad, desempeñando el papel institucional que le correspondía en el antiguo régimen. La universidad de Orihuela

fue clausurada en 1807, cuando el antiguo régimen en España entraba en la crisis que no podría superar.

Alicante, en cambio, era una ciudad eminentemente laica, segunda sede de la diócesis –con el cabildo de la Colegiata de San Nicolás–, pero sus intereses estaban orientados hacia la actividad mercantil y se hallaba abierta a las nuevas ideas culturales y políticas para lo que servían de excelente cabeza de puente la nutrida colonia de comerciantes extranjeros que residía en ella. Por lo tanto, Alicante, a principios del siglo XIX, tenía ante sí un futuro prometedor, que el régimen liberal alentaría unos años más tarde, y Orihuela, en cambio, entraría en un proceso de estancamiento y de crisis.

Desde finales del siglo XVIII, a partir de la concesión del Consulado, Alicante estuvo dotada de cátedras de náutica, dibujo y francés, que se alojaron en el edificio de aquél y estaban subvencionadas por la junta de comercio. Así pues, se trataba de materias eminentemente prácticas y muy relacionadas con las actividades marítimas y mercantiles. Después, sería el régimen liberal y la conversión de Alicante en capital de la provincia de su nombre lo que impulsaría la cultura y haría que se crearan en la ciudad los centros de educación que extenderían su influencia a toda la provincia. El principal de ellos fue un Instituto de Segunda Enseñanza, creado en 1845 y establecido en la Casa Asegurada, frente a la plaza de Santa María. Ese tipo de centros, en la época, tenía una mayor entidad que en la actualidad, porque, aparte de otorgar la formación de nivel medio y preparar a los estudiantes para las carreras superiores, concedía títulos auténticamente profesionales; de ahí que al Instituto de Alicante se incorporaran, en 1850, la escuela Náutica y la de Dibujo, en 1857, que antes habían funcionado en el edificio del Consulado, y, en 1851, la de Comercio, creada aquel mismo año. A este primer centro de la capital y provincia siguieron las escuelas normales de magisterio, que fueron financiadas por la Diputación Provincial: la de maestros comenzó a funcionar en 1844, en Orihuela, y se trasladó a la capital, en 1858, y al año siguiente se creó la de maestras. Ambas contaban, asimismo, con su respectiva escuela superior práctica para completar la formación de los

maestros. Financiadas también por la Diputación Provincial se crearon una escuela de ciegos y otra de sordomudos.

Sin embargo, el primer problema educativo de la ciudad era atender la enseñanza de las primeras letras y procurar rebajar el elevado nivel de analfabetismo. De ahí que, aunque se reconociera el esfuerzo que en este sentido estaban haciendo el ayuntamiento y la Diputación Provincial, fueran frecuentes las quejas por la falta de locales, las malas condiciones de los existentes y el alto número de niños sin escolarizar y, por lo tanto, analfabetos. A mediados de la década de los ochenta, asistían a las escuelas, públicas y privadas, sólo el 6,84% del total de la población del municipio, y, según los datos de 1877, en la provincia de Alicante había 23.548 niños, en edad escolar, que no sabían leer, de los que 9.768 eran varones y 13.780 hembras. El régimen liberal había introducido importantes transformaciones en el campo de la educación, al atribuir a los municipios y, consiguientemente, a las diputaciones provinciales, la responsabilidad directa de la enseñanza primaria, lo que conllevaba las propiedades de gratuita y obligatoria; sin embargo, a la vez, habría de superar las dificultades que suponía la organización educativa, al cerrar las escuelas conventuales y clericales que habían estado funcionando; ahora bien, esto último no debió incidir de forma notable en el crecimiento del analfabetismo, ya muy alto a finales del antiguo régimen. La iniciativa privada jugó un papel importante en la educación, al interesarse particulares e instituciones por la fundación de centros, sobre todo, de segunda enseñanza; así, la Sociedad Económica de Amigos del País abrió un Colegio de Humanidades en 1836, y en otra fecha más avanzada, en 1872, comenzaron a funcionar dos colegios de enseñanza primaria y secundaria, que ejercieron gran influencia en Alicante, "La Educación" y el "Politécnico de San José".

Una ciudad de las características de Alicante tampoco podía tener muchas ni importantes instituciones y centros culturales; ahora bien, la falta de arraigo de ese tipo de actividades permitiría que las manifestaciones culturales, durante la primera mitad del siglo, respondieran a un diseño típicamente burgués y se dirigieran no sólo a cultivar y elevar el grado de cultura existente en la ciudad sino a promocionar también técnicas y conoci-

mientos científicos de un importante nivel de utilidad. Las dos instituciones más representativas, en este sentido, fueron la Sociedad Económica de Amigos del País y el Liceo, creados, respectivamente, en 1834 y 1839, como centro de promoción y de divulgación, el primero, y el segundo como lugar de encuentro, de intercambio de opiniones y, en definitiva, de cultivo de los propios gustos artísticos y literarios. En los años sesenta, se amplió el marco de este tipo de instituciones, abriéndolas a las clases medias de la ciudad; a ellas pertenecía el Círculo de Artesanos, creado por E. Maisonnave, en el que a la finalidad de promoción técnica y de formación cultural hay que añadir la divulgación de ideas de reforma política y social. Muestra de la escasa entidad cultural de la ciudad eran las bibliotecas existentes y la precariedad de sus fondos. Se trataba de las bibliotecas de los centros oficiales, las del Instituto de Segunda Enseñanza, convertida en provincial en 1876, y que, según Roca de Togores y Saravia, contenía 12.719 volúmenes, y de la Escuela Normal de Maestros, las de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio, que se hallaba en la casa del Consulado, y de la Sociedad Económica de Amigos del País, y, finalmente, la de San Nicolás, que estuvo abierta hasta 1856, año en que los herederos del marqués de Algorfa se negaron a continuar manteniendo los costes de la misma, tal como lo había hecho el marqués durante los últimos veinte años.

Mayor importancia tuvo en la ciudad la prensa periódica, particularmente a partir de 1844 y, después, a lo largo del reinado de Isabel II; pero, antes también, durante los cortos periodos liberales de 1811 a 1814 y de 1820 a 1823. En cambio, en los periodos de gobierno absolutista, sólo se publicó el *Diario de Alicante* entre 1817 y 1819, periódico de escasa entidad, en el que se publicaban más noticias del extranjero que de España, el movimiento del tráfico portuario y el de los precios de Alicante y Valencia y algunos artículos de divulgación técnica y económica. Durante la primera etapa liberal, de 1811 a 1814, la prensa de Alicante, como la del resto del país no ocupado por los franceses publicaba noticias y comentarios sobre la marcha de la guerra y las actividades de las Cortes de Cádiz. Esta prensa, a juicio de E. La Parra, se aprovechó de la libertad de opinión propiciada desde

1808 y de la desaparición de hecho de las instituciones de control ideológico del Antiguo Régimen. Las *Décadas Filológicas* y *El Imparcial* de Alicante fueron dos buenas muestras de este tipo de publicaciones. Mayor desarrollo alcanzó la prensa durante el trienio liberal en el que la libertad y el apasionamiento político que se vivió en esos años fueron unas condiciones muy favorables para el desarrollo de esa actividad. Sin embargo, a partir de 1844 la prensa entraría en una etapa nueva; según el historiador citado más arriba, durante el reinado de Isabel II aparecieron en Alicante “más de 50 títulos entre diarios, semanarios y publicaciones de periodicidad varia”, afirmando más adelante que “toda esta prensa... responde a la perfección a los ideales burgueses arquetípicos, constituyendo tal vez uno de los modelos más acabados de la prensa burguesa en la España de la época”. Esas publicaciones pueden ordenarse en varios grupos de acuerdo con su línea y sus preferencias temáticas: Periódicos de información general, muchos de ellos subtitulados “periódico político, literario y de intereses materiales”, que recogen la información municipal y provincial, la nacional, algún comentario de actualidad, algunas noticias del extranjero, anuncios y el capítulo correspondiente del folletín; a este grupo pertenecían, entre otros, *El Diario de Alicante*, creado en 1853, y *El Agente de Alicante*. Entre las publicaciones de información general se observan diferencias ideológicas y matices de carácter político, que, en algunos casos, destacan en la propia cabecera del periódico; así, en 1854 se publicó *El Eco de Manzanares*, entre 1856 y 1857, *La Unión Liberal*, y entre 1865 y 1871, *El Eco de Alicante.-Diario Progresista*. Otro grupo estaba formado por las publicaciones literarias, como el *Album Literario*, en el que colaboraron, aparte de escritores locales y valencianos, autores de proyección nacional; otros se dedicaron preferentemente a los temas económicos como el *Boletín Comercial y de Anuncios*, a los costumbristas como *Los Hijos de Eva*, o a la sátira como *El Bostezo*, alguno de los cuales se encontró con problemas gubernamentales, teniendo que suspender la publicación por orden de la autoridad.



EVOLUCIÓN SOCIOPOLÍTICA ENTRE 1814 Y 1868

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO
Universidad de Alicante

El Reinado de Fernando VII

E

L regreso de Fernando VII a España, en la primavera de 1814, una vez terminada la guerra de la independencia, tuvo malas consecuencias para el proceso de transformación política que, en nombre del rey, se había dado a partir de 1810, y cuyas manifestaciones más importantes habían sido la Constitución de la Monarquía Española de 1812 y los decretos de las Cortes de Cádiz, publicados entre 1811 y 1813, y dirigidos a la reforma de la sociedad y del Estado. Fernando VII había comenzado desobedeciendo al Consejo de Regencia y a las Cortes al seguir un itinerario distinto al que se le había marcado para su regreso; esto, que ya anticipaba una desaprobación, si no un enfrentamiento entre el rey y las Cortes, alcanzaría su máximo desarrollo durante la estancia de aquél en Valencia, en donde se encontró un buen número de diputados — los persas— dispuestos a abrazar de nuevo las viejas instituciones, un grupo de nobles descontentos por la pérdida de sus privilegios señoriales y estamentales, y la fuerza armada necesaria para protagonizar la contrarrevolución, encabezada por el general Elío. En todas esas fuerzas e intereses se apoyaron el decreto del 4 de mayo y el consiguiente golpe de Estado, por el que se abolía la obra efectuada por las Cortes de Cádiz y se restablecía el antiguo régimen íntegramente; aunque, para expresarse con más propiedad, Fernando VII retuvo algunas aportaciones liberales que servían para reforzar el poder real, como el poder jurisdiccional de los señores que continuó incorporado a la corona, según había establecido el decreto del 6 de agosto de 1811. Con ello el rey “deseado” se convertía en una dura carga que pesaría sobre el país durante dos décadas y que, celoso de sus privilegios absolutos, paralizaría todo intento de reforma, sirviéndose de las amenazas y del engaño a sus amigos y colaboradores.

Pero aquí convendría también preguntarse por el papel que jugó el pueblo en estos acontecimientos, entendiendo por tal todos aquellos grupos sociales que no fueron protagonistas principales, pero que estuvieron implicados tanto en el proyecto

revolucionario, como, después, en el contrarrevolucionario y que, por lo tanto, sufrieron las consecuencias. La actitud de esos grupos sociales, en principio, podría calificarse de contradictoria, a causa de la distinta situación en que se hallaban en unas regiones y otras; así el régimen señorial no pesaba de igual manera sobre unos y sobre otros y, por lo tanto, no esperaban lo mismo de su abolición; por otra parte, las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades eran distintas a las de los núcleos rurales, por lo que sus intereses podían no ser coincidentes; ahora bien, sobre todos ellos incidían las repercusiones de la crisis económica, que afectaba al país desde los últimos años del siglo XVIII, y que la guerra había acentuado; de ahí que la actitud favorable o contraria al régimen constitucional se debiera, en definitiva, a las esperanzas o a las desconfianzas que se habían depositado en él, como el acceso a la propiedad de la tierra, por parte de los campesinos de algunas regiones, o del mantenimiento de la situación existente, por parte de otros que se consideraban asistidos por las instituciones del antiguo régimen. A unos y a otros tanto el régimen constitucional como el absoluto les prometían la salida de la crisis y la "felicidad", pero el mostrarse partidarios de uno o de otro dependería de la seguridad de sus convicciones y de la presión ideológica y fáctica que las instituciones y las personas ejercieran sobre ellos. El régimen constitucional tenía en su contra el esfuerzo realizado durante la guerra y, por lo tanto, la escasez, los reclutamientos masivos, los precios altos y los impuestos muy gravosos, y a su favor, unas leyes de reforma, algunas de las cuales habían frustrado ya las esperanzas de la población. El rey absoluto, en cambio, había estado alejado del país durante la guerra, representando un triste papel en Francia, pero en su nombre se había llevado a cabo la obra de las Cortes de Cádiz y se había idealizado su persona, reclamando ahora sus viejos privilegios; de ahí que encontrara una respuesta favorable en muchos grupos de las clases populares.

Alicante durante el sexenio absolutista, 1814-1820

Alicante, que había jugado un importante papel de retaguardia durante la guerra, se encontró, al final de la misma, con

su población dividida entre los partidarios del régimen constitucional y los del rey absoluto, pero, sobre todo, confundida acerca del verdadero significado de la actitud de Fernando VII. Alicante, debido a su actividad económica predominante, era una ciudad a la que el liberalismo podría beneficiar enormemente a través de sus instituciones políticas y económicas; ahora bien, su economía se hallaba en una situación deplorable y la propia ciudad en un estado de gran abandono, y en esa coyuntura, Fernando VII, a la vuelta de su cautiverio, rechazó todo aquello que se había realizado en su nombre y en la defensa del trono. Pero la situación se complica más aún si se tiene en cuenta el territorio que rodeaba la ciudad, en donde, por haber estado sujeto al régimen señorial, la restauración del absolutismo suponía la obligación de pagar de nuevo las rentas y las cargas señoriales, lo que daría origen a multitud de conflictos a lo largo de todo el período. El estado de división de la población ya lo ponía de relieve Viravéns, en su *Crónica*, cuando escribía: “Una gran parte de los alicantinos se declararon desafectos a la constitución, porque en ella creyeron ver amenguado el prestigio de la autoridad real y expuesto el país a ser teatro de licencias, impiedades y crímenes por la libertad que establecía, mientras que otros se mostraron sus más entusiastas partidarios, fundados en que aquella ley limitaba el poder absoluto de los reyes, reducía la influencia del clero y garantizaba los derechos políticos de los ciudadanos”, lo que explicaba, a juicio del autor, la formación de los dos partidos políticos, el liberal y el absolutista, “si bien el último era más vigoroso que el primero, porque contaba con grandes auxiliares que mantenían en el pueblo los celos y sospechas contra el régimen liberal”.

Una vez publicado el decreto del 4 de mayo, la ciudad de Alicante fue alcanzada por la marea absolutista que invadió España, desempeñando un gran protagonismo las autoridades municipales que habían sido elegidas de acuerdo con el procedimiento establecido en la constitución. Así, el Ayuntamiento califica el 15 de mayo, día en que se recibió el decreto, como “el más feliz por que tanto había suspirado”, tal como se expresaba en un texto de felicitación enviado al rey el 20 del mismo mes. Unos días más tarde, con motivo de la onomástica real, se cele-

braron en la ciudad importantes fiestas civiles, religiosas y populares, en las que se exaltaba al rey victorioso, a quien se le dedicaba la actual plaza de Elche, que desde el mes de marzo anterior se había llamado de la Constitución, se daban gracias y se pedía a Dios la protección del rey, y la alegría popular invadía las calles con desfiles de disfraces y bailes. Pero la abrogación de la obra de las Cortes de Cádiz llevaría consigo la promulgación de otros decretos, tales como los destinados a reintegrar a los señores sus derechos y privilegios tradicionales, aunque esto no se produjera completamente, a restablecer el tribunal del Santo Oficio, y a destituir a los cargos municipales elegidos y reponer los “realistas de 1808”, según se decía en el decreto del 30 de julio. Así pues, a pesar del fervor realista manifestado por las autoridades municipales de Alicante, éstas eran destituidas y en su lugar se colocaba un ayuntamiento de composición estamental, sentándose en el consejo representantes de la nobleza, de los ciudadanos –vecinos que ejercían profesiones liberales y empleados de la administración–, y de los comerciantes, presididos por un corregidor de nombramiento real, que desempeñaba, a la vez, las funciones de jefe militar de la plaza.

Las nuevas autoridades de Alicante tratarán, en primer lugar, de controlar a la población, sobre todo la que había manifestado actitudes y sentimientos liberales, y de reforzar las instituciones recién restauradas, para lo que impulsarán de manera notable el estrechamiento de las relaciones entre la administración municipal y la iglesia; de ahí la reiterada celebración, aprovechando los motivos más baladíes, de *tedeums*, *triduos*, rogativas y procesiones en honor de los santos de mayor devoción y patronos de la ciudad, en particular de la Virgen del Remedio y de la Santa Faz. Asimismo utilizarán todas las ocasiones que se presenten para manifestar y proclamar su devoción a Fernando VII, ya se trate de onomásticas o cumpleaños reales, de matrimonios o de condolencias por la muerte de la reina; una ocasión especial se ofrecería en el verano de 1819, con motivo del paso por Alicante, en dirección al Escorial, de los cadáveres de los padres de Fernando VII –Carlos IV y María Luisa de Parma–, que procedían de Nápoles, en donde habían fallecido en enero de aquel año, y a los que el rey había traicionado y destronado en la

primavera de 1808. Con tal motivo las autoridades de la ciudad celebraron grandes fastos funerarios, a los que la población asistió tumultuosamente, llena de curiosidad, de temor e, incluso, de morbosidad. A cambio de todo esto el monarca no concedió al ayuntamiento de la ciudad el tratamiento de *excelentísimo*, que solicitó en 1814, pero otorgó al puerto la categoría de “depósito”, de lo que la ciudad y la hacienda pública también obtendrían importantes beneficios.

Pero las nuevas autoridades tendrían que responder también a otras necesidades materiales, dado el estado lamentable de la ciudad después de la guerra. Como ya se sabe, se llevaron a cabo obras de remodelación y de restauración y se mostró algún interés por la limpieza de las calles, aunque la administración municipal se encontró continuamente con el obstáculo de la escasez de recursos financieros a causa de la decadencia económica general, el retroceso de la actividad portuaria, agrandado por la pérdida de las colonias americanas, y por el estado calamitoso de la agricultura en esos años, en los que la sequía permanente impedía el desarrollo de las cosechas y dejaba desabastecida la ciudad, que, además, encontraba dificultades para compensar la escasez con la importación de cereales y otros productos alimenticios. La restauración de los privilegios estamentales repercutía también en la fiscalidad municipal al eximir a los nobles y clérigos del pago de algunos impuestos. Todo ello hizo que para llevar a cabo algunos trabajos de desescombros y limpieza el municipio solicitara la mano de obra de los presidiarios que se hallaban encarcelados en Alicante. Aparte de la anterior situación, la ciudad tuvo que enfrentarse también a alguna desgracia colectiva, como sucedió en octubre de 1817, cuando, en la noche del día 12 se abatió sobre Alicante una lluvia torrencial, que inundó la parte baja de la ciudad, arrancó y arrastró grandes piedras por la ladera del Benacantil e, incluso, abrió un boquete en la muralla a la altura de la plaza del Barranquet, a donde conflúan las aguas del barranco de Canicia; bastantes meses después, recordaban los cronistas del siglo pasado, quedaban en las calles los rastros del siniestro.

Aunque en Alicante se había asumido pacientemente el régimen absolutista, no por ello habían desaparecido las ideas y

los sentimientos liberales. Los comerciantes y los menestrales de la ciudad no se habían manifestado, ni mucho menos conspirado, en contra del régimen, como sucedió en otras ciudades mediterráneas, como Barcelona y Valencia; sin embargo, cuando triunfó el pronunciamiento de 1820, no sólo se apoyó inmediatamente sino que Alicante se convirtió durante el trienio en firme defensora del liberalismo y, al final, incluso en su símbolo.

Alicante durante el trienio liberal

El trienio liberal tuvo una gran importancia en la evolución política del siglo XIX porque representó la primera oportunidad de ensayar el nuevo régimen de forma sistemática, encontrándose con las grandes dificultades que suponían las resistencias a cualquier tipo de reformas y a la pérdida de privilegios por parte de algunos sectores sociales, encabezados por el propio Fernando VII, quien, a lo largo de los tres años, mantuvo de forma clara una actitud contraria al funcionamiento de las instituciones del liberalismo. Sin embargo, el nuevo régimen no sólo debía llevar a cabo la reforma de la sociedad y del Estado sino que, mediante las nuevas instituciones y las leyes, tenía que hacer frente a los problemas que la anterior etapa de gobierno absolutista había dejado pendientes, el de la hacienda, en particular el de la deuda pública, en el interior, y el de la rebelión colonial, en el exterior. Pero las medidas fiscales adoptadas provocarían también críticas en sectores partidarios del liberalismo, que pedían mayor radicalismo o coherencia con otras medidas de reforma. Esa compleja situación condicionó tanto la elaboración de las leyes y las actuaciones del gobierno como el comportamiento de los grupos sociales partidarios o contrarios al liberalismo; de ahí la moderación, en términos generales, de las leyes promulgadas y de las actuaciones del gobierno, la división de los liberales entre exaltados y moderados, y la rebelión de los absolutistas; y todo ello en una situación internacional adversa que conduciría a la intervención armada de las potencias de la Santa Alianza, por considerar que el régimen liberal español era un peligro para el resto de Europa.

Efectuado el pronunciamiento de Riego, el 1 de enero de 1820, el régimen liberal no se restableció hasta el 7 de marzo; fue preciso que la noticia se difundiera lentamente y los sentimientos liberales se manifestaran y acrecentaran. Dice Gil Novales, en acertada frase: "Aún con temor al fracaso y a la represión absolutista, toda España había vivido los tres primeros meses de 1820 imaginando los movimientos de Riego, que la distancia, la incertidumbre y la ilusión agrandaban". Cuando se conoció en Alicante la noticia del pronunciamiento, como en el resto del país, las autoridades intensificaron la vigilancia para impedir que la población se adhiriera al mismo, "cosa difícil, escribe Viravens, por las numerosas tropas que guarnecían la plaza para defender las instituciones vigentes"; sin embargo, el 1 de marzo, a pesar de la vigilancia y de la intervención inmediata del ejército, se produjo una sublevación popular a favor del liberalismo y de la proclamación de la constitución, que, de momento, fue sofocada. Cuando, el 12 de marzo, llegó la noticia de los acontecimientos que habían sucedido en Madrid los días 6 y 7 y el decreto del rey, por el que se restablecía el régimen liberal, los ánimos ya estaban preparados y, sin esperar la intervención de la autoridad militar, el pueblo proclamó la constitución de 1812, pidió al gobernador militar que cesara y propuso al brigadier D. Pablo Miranda para sustituirle; de manera que, en Alicante, de forma rápida y por la acción popular, se produjo el traspaso de poderes de las autoridades absolutistas a las constitucionales. Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobernador fue la destitución del ayuntamiento realista y la reposición del que había sido elegido en 1814. El mismo día 12 de marzo, en dos puntos de la costa, próximos a la ciudad, en Torrevieja y en Benidorm, se presentaron grupos de hombres armados que, procedentes de Cádiz, se dirigían a Valencia y Cataluña, por vía marítima, para proclamar la constitución. Esos movimientos formaban parte de un plan que tenía por objeto implantar el liberalismo presionando desde la periferia y que la anterior decisión de Fernando VII había convertido en innecesario. El restablecimiento del liberalismo se celebró en Alicante de forma tan festiva y siguiendo el procedimiento inverso al de la anterior entronización del absolutismo; la proximidad del 19 de marzo —aniver-

sario de la promulgación de la constitución de 1812— brindaba una excelente oportunidad para llevarla a efecto.

Los problemas que se le plantearon al régimen a escala general tuvieron su correspondiente traslación a Alicante y, más aún, debido a que ésta se convirtió, en octubre de 1821, en capital de la provincia, con lo que ampliaba su influencia sobre el territorio que se le adscribía. Sin embargo, durante esos años, se produjeron unos movimientos sociopolíticos de gran importancia porque, debido a la moderación con la que pretendían actuar el gobierno y las instituciones, se dió el acercamiento entre grupos de la nobleza y la burguesía, comprendiendo los primeros que la pérdida de algunos privilegios podía ser compensada con las oportunidades económicas y políticas que ofrecía el nuevo régimen, y descubriendo los segundos que para defender sus intereses y ejercer el control político necesitaban la alianza de los primeros. La promulgación de los decretos de desamortización eclesiástica y de abolición de los señoríos jurisdiccionales fueron dos muestras claras de dichas oportunidades. Por el contrario, de esa alianza quedaban desplazadas las clases populares que, paradójicamente, se convirtieron en los más encendidos defensores del régimen, y marginado el clero, particularmente el regular, que sufrió las repercusiones más duras del cambio político, por lo que también se transformó en el enemigo más acendrado del liberalismo.

Pero la instauración del liberalismo necesitaba también contar con una opinión pública favorable para lo que era preciso crear las instituciones y los órganos convenientes para la difusión de las ideas liberales; las tertulias políticas, la prensa e, incluso, el clero desde el púlpito llevaron a cabo dicho objetivo; sin embargo, a la vez que difundían el liberalismo, alentaban la división de los liberales y crecía el número de sus enemigos. En Alicante, a finales de mayo de 1820, se formaba la primera de las tertulias, *los amantes de la constitución*, cuya junta directiva estaba constituida por personas de reconocido liberalismo, pertenecientes a la burguesía comercial; esa tertulia se reunía en el atrio del ayuntamiento los domingos, lunes, jueves y viernes, al anochecer y, en palabras de Viravéns, “los patriotas alicantinos concurrían a estas reuniones, en las que se pronunciaban discurs-

sos para educarles en el ejercicio de los derechos políticos y en la práctica de la libertad". Pero la evolución de las ideas y de los comportamientos políticos llevaría, en 1821, según C. Saiz Pastor, a la aparición de otras dos tertulias, la *patriótica*, formada por militares constitucionales y ciudadanos "españoles", cuyo objetivo era "ilustrar a este pueblo con la lectura de lo mejor de los periódicos", y la *popular filantrópica*, a la que pertenecían también ciudadanos extranjeros residentes en la ciudad. Esta última tertulia era más radical que la anterior y entró en conflicto con ella repetidas veces. También fueron numerosos y frecuentemente se produjeron enfrentamientos entre los periódicos que se publicaron en Alicante durante el trienio; y si los curas de las parroquias de San Nicolás y de Santa María, cumpliendo órdenes de la superioridad, explicaban desde el púlpito los principios constitucionales, por las mismas razones surgía el conflicto con el obispo de Orihuela, a cuya diócesis pertenecía Alicante, optando éste por exiliarse para no tener que someterse a la pretendida política regalista del gobierno; la actitud del obispo influyó sobre el comportamiento del clero y de muchos fieles en contra del régimen liberal, particularmente en la ciudad de Orihuela. En la misma línea de oposición al régimen se situaría el clero regular, primer afectado por el decreto de desamortización y por las medidas tendentes a reducir el número de conventos y de frailes; de ahí que, en julio de 1821, fueron cerrados en Alicante los conventos de los dominicos, agustinos y capuchinos y enviados los frailes a conventos de su misma orden en otros pueblos de la provincia; sin embargo, contra los carmelitas y franciscanos, únicos que permanecieron en la ciudad, las autoridades municipales tuvieron que actuar con cierta violencia y desterrarlos, en agosto de 1823, por alentar y ser aliados de la rebelión realista.

El régimen liberal necesitaba contar también con una organización ciudadana armada con fines defensivos, aparte del ejército, siempre condicionado por la aptitud de sus jefes; esa organización debía ser la *milicia nacional*, cuyo solo nombre ya llevaba importantes resonancias revolucionarias. Los mandos de la milicia estarían, en Alicante, en manos de algunos miembros de la nobleza local y de la burguesía mercantil; en este sentido

tienen gran interés datos como la solicitud enviada al gobernador militar por el conde de Casa-Rojas desde Madrid, donde se hallaba al servicio del rey, el 2 de mayo de 1820, solicitando ser admitido como miliciano voluntario, o la petición de Bartolomé Arques, en abril de 1823, para que se le permitiera formar a sus expensas una partida de 50 o más hombres para ayudar a la ciudad de Valencia. La tropa, en cambio, estaría formada, según C. Saiz, por “un número importante de artesanos, jornaleros, tenderos y pequeños comerciantes”, es decir, miembros de grupos que tenían grandes esperanzas en los cambios sociales y políticos que debía aportar el liberalismo, que radicalizarían sus posiciones a medida que el régimen les negaba sus reivindicaciones y que los grupos absolutistas se rebelaban contra él.

En ese contexto hay que situar las distintas intervenciones que la milicia nacional de Alicante llevó a cabo en varios pueblos de la provincia, principalmente del valle del Vinalopó, y en Orihuela, aunque esta ciudad, durante el trienio perteneció a la provincia de Murcia, actuando en contra de las partidas realistas, que en esos años aparecieron asociadas con el fenómeno endémico del bandolerismo, figurando, incluso, Jaime *el barbudo* como un cabecilla realista; en cambio, en Alicante, los partidarios del absolutismo no contaron con gran influencia, habiendo tenido solamente alguna intervención pública en julio de 1822 y en 1823, con algún intento de manipulación de las autoridades liberales, en el primer caso, y de provocación y de rebeldía, en el segundo. Los acontecimientos más graves que tuvieron lugar en Alicante sucedieron en julio de 1822, dentro de la marea absolutista que se extendió por todo el país, a raíz de la rebelión realista de Madrid, el día 7, y que la milicia nacional hizo abortar; unos días más tarde, la rebelión estallaba en Orihuela y de un encuentro habido con las fuerzas leales, el día 14, se obtenía un resultado dudoso. Cuando se tuvo conocimiento de esos hechos en Alicante, el día 16, inmediatamente se formó una manifestación para pedir a las autoridades municipales y provinciales que enviaran fuerzas de la milicia nacional y del ejército para auxiliar a los leales de Orihuela, a lo que aquellas, en principio, se opusieron por quedar Orihuela fuera de los límites de su jurisdicción; de ahí que se produjera un duro enfrentamiento entre los

sectores moderados de la burguesía y de la nobleza local y los más radicales de la milicia y las clases populares, ante cuya presión los primeros hubieron de autorizar la marcha de las fuerzas liberales. El día 17, por la mañana, salían hacia Orihuela un grupo de 170 milicianos, a los que se unían varios oficiales del Regimiento de Navarra y otros voluntarios, bajo las órdenes del coronel D. Antonio Fernández Bazán, entonces director de la fábrica de tabacos de la ciudad. Entre tanto, en Alicante existía un clima de gran agitación política y de desconfianza hacia los que habían marchado por parte de las autoridades, situación que los partidarios del absolutismo, “la facción aristocrática”, aprovecharon para promover un motín y lograr que se reuniera, en sesión extraordinaria, el ayuntamiento, ante el que denunciaron como insubordinados y exaltados a los que días antes habían marchado a Orihuela y a otros que permanecían en la ciudad, quienes a su regreso destituirían a las autoridades y atacarían a ellos mismos. En esa “facción aristocrática” se hallaba ya incluido el conde de Casa-Rojas junto a otros miembros de la nobleza local, militares retirados, algunos clérigos y funcionarios del puerto. Si bien el ayuntamiento aceptó las denuncias, añadió a las listas presentadas algunos nombres por propia iniciativa y ordenó algunas detenciones, tres días más tarde, revisaba los acuerdos del día 22 y marcaba de nuevo las distancias con la “facción aristocrática”, quedando deshecha la alianza, en palabras de C. Saiz, “entre grupos de ideología moderada, sectores filoserviles y primeras autoridades locales”. Los milicianos alicantinos tuvieron dos encuentros con los realistas en las cercanías de Orihuela, el 19 y 23 de julio, venciéndolos en ambas ocasiones y, unos días más tarde, regresaban a la capital.

Al malestar en el interior y a las sucesivas rebeliones realistas, se añadiría la intervención de la Santa Alianza, cuyas potencias, reunidas en Verona, amenazaban al gobierno español, en noviembre de 1822, con enviar un ejército de intervención si no se abolía la constitución de 1812 y no se restablecían los poderes absolutos del rey. Este mal presagio se cumplía a mediados de abril de 1823 con la invasión del ejército francés, los cien mil hijos de San Luis; con lo que las cortes, el gobierno y el rey trasladaron su residencia desde Madrid, primero a Sevilla y, des-

pués a Cádiz. Ante esta coyuntura Alicante, como otras plazas del reino, se dispuso a resistir y a defender el liberalismo. En el mismo mes de abril se había formado una “junta auxiliar de defensa nacional” que se encargaría de coordinar todos los esfuerzos defensivos, y a la ciudad llegó un gran número de soldados y de gentes de otros pueblos de la provincia, que se consideraban en peligro y buscaban refugio, siendo muy cuantiosos los gastos que hubo que hacer y que recayeron sobre la economía de los ciudadanos. Para organizar la defensa de la plaza, a principios de agosto, se nombró gobernador militar a D. Joaquín de Pablo Chapalangarra, de gran lealtad y energía; pero Alicante no tardó en quedar aislada porque a los movimientos del ejército francés se unían los de los rebeldes realistas, con lo que el control de la mayor parte del territorio se efectuó inmediatamente. El 30 de septiembre, las cortes, comprendiendo la imposibilidad de resistir, dejaban en libertad a Fernando VII para unirse al ejército invasor y, aunque el rey prometía el olvido general de todo lo pasado, en seguida cambió de parecer y, el 1 de octubre publicó un decreto de signo contrario. Con ello, en palabras de Gil Novales, “comienza la represión cruel e ininteligente, a la española”. Alicante, aislada, resistió todavía un mes y sólo se rindió cuando estuvo completamente asediada y pudo verificar la liberación del rey y la petición de rendimiento que éste había hecho. El acta de rendición se firmó en Elche, el 6 de noviembre, en la que se aseguraba el respeto a los vecinos y a sus bienes y a los miembros de la milicia nacional, una vez desarmados.

El último período absolutista, 1823-1833

No sin razón a esta última etapa del reinado de Fernando VII se la conoce en la historiografía tradicional como “década ominosa”, debido a la generalización y a la dureza de las prácticas represivas. Durante esos años se persiguió y controló de forma sistemática a todos aquellos que se habían distinguido por sus manifestaciones de liberalismo y se superaron los límites de la represión selectiva que se aplicó en el sexenio de 1814 a 1820, como recientemente ha estudiado E. La Parra. Con todo, mien-

tras permanecieron en Alicante las tropas francesas se respetaron los términos del acuerdo de capitulación y los vecinos de Alicante no fueron molestados, aunque tuviera opiniones contrarias al régimen restablecido. Sin embargo, una vez evacuadas dichas tropas y habiendo tomado posesión D. Pedro Fermín Iriberry como gobernador militar de la plaza y corregidor de Alicante, en los primeros días de diciembre, a pesar de las impresiones iniciales favorables, cambió la actitud de las autoridades y comenzó a ejecutarse la represión. El restablecimiento del absolutismo se celebró en Alicante de forma semejante a como se había hecho en 1814, se repuso el ayuntamiento realista, se retiraron los símbolos del régimen anterior y se dió un recibimiento triunfal a los religiosos que habían sido expulsados de la ciudad durante el trienio liberal, con fiestas religiosas y civiles, y para la defensa del régimen se creó una fuerza cívica, los *voluntarios realistas*.

Los primeros síntomas del cambio de actitud de las autoridades los percibieron los liberales alicantinos cuando observaron que Iriberry se estaba rodeando de una camarilla, en palabras de Viravens, “de personas impopulares, identificadas con el absolutismo, y a quienes distinguía la opinión pública por los odios y rencores que abrigaban contra determinados sujetos partidarios del régimen constitucional”. El gobernador militar, apoyado en esa camarilla y utilizando los servicios de los voluntarios realistas, se convirtió en el auténtico dueño de la ciudad, controlando el gobierno, las finanzas, el orden público y la conducta de los vecinos. Esa política tuvo una sólida ayuda en el ambiente impregnado de fanatismo religioso, alimentado por los clérigos y religiosos antiliberales; de ahí el elevado número de manifestaciones públicas religiosas, que se convertían en actos políticos y de resentimiento antiliberal.

El primer golpe asestado por Iriberry contra los liberales alicantinos tuvo lugar en la tarde y noche del 26 de diciembre de 1823, cuando un buen número de vecinos regresaba a la ciudad, después de haber pasado en el campo el tradicional segundo día de navidad; para ello el gobernador militar, de acuerdo con su camarilla, organizó un simulacro de rebelión para poder obrar con mayor rapidez y prender a cuantas personas juzgaba implicadas por sus simpatías o convicciones liberales. Los detenidos

fueron tan numerosos que, aparte las cárceles de los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, hubo que habilitar como prisión la casa Asegurada. Muchos liberales huyeron o se exiliaron para no ser detenidos y algunos, incluso, se fugaron de la prisión por miedo a ser eliminados. El control de la población llegó a tal extremo que para ejercer cualquier actividad u ocupar cualquier puesto público eran necesarios informes favorables de las autoridades civiles y religiosas, abriéndose, incluso, centros en los que se intentaba corregir la conducta personal de los individuos.

Durante esos años, Alicante, como el resto del país, continuaba sufriendo los efectos de una prolongada crisis económica, acentuándose los caracteres del autoabastecimiento por la reducción de los intercambios comerciales con el exterior; en esas condiciones la aridez del clima hacía sentir sus condicionamientos con mayor dureza y la sequía permanente impulsaba a los alicantinos a buscar todo tipo de ayudas, tanto las espirituales, las rogativas a la Santa Faz, como las materiales, la elaboración del proyecto para traer a Alicante las aguas sobrantes del río Júcar. En esa coyuntura, como se sabe, la población de la ciudad experimentó un fuerte retroceso. La situación se agravó más aún a causa de los efectos del terremoto que, en marzo de 1829, afectó duramente a varios pueblos de las comarcas del Bajo Segura y del Bajo Vinalopó, a los que Alicante se sintió obligada a ayudar.

Alicante, por la trayectoria seguida durante el trienio y por sus condiciones estratégicas, era considerada por los liberales como una plaza en la que podrían apoyarse en cualquier intento de recuperar por la fuerza el régimen; de ahí que fuera tenida en cuenta en el primer diseño hecho por los liberales, desde el exterior, para la toma del poder. La operación sobre Alicante consistiría en el reconocimiento del terreno, la entrada en contacto con los liberales del lugar y la toma de posiciones en espera de la llegada de refuerzos del exterior para llevar a cabo la operación. La acción la dirigiría el coronel D. Antonio Fernández Bazán, ayudado por un hermano suyo, al frente de unos ochenta hombres. El 19 de febrero de 1826, se efectuaba el desembarco de la expedición, procedente de Gibraltar, en la playa de Guardamar del Segura; sin embargo, los voluntarios realistas no estaban desprevenidos e impidieron a los expedicionarios retornar a las naves,

obligándolos a dirigirse hacia Elche e internarse en la sierra de Crevillente, siendo perseguidos por aquellos. La persecución se prolongó los días 20 y 21, incorporándose los realistas de Alicante, Orihuela, pueblos del Vinalopó Medio, Castalla y poblaciones próximas a la capital. Los liberales recorrieron la sierra hasta las cercanías de Agost, pretendiendo alcanzar de nuevo la costa a través de San Vicente y de San Juan, pero, dispersos por la huerta de Villafranqueza, fueron capturados.. Los supervivientes del grupo fueron fusilados, unos en Alicante, el día 25, y otros en Orihuela, el 28; finalmente, Antonio Fernández Bazán fue ajusticiado en Orihuela, el 4 de marzo. Fernando VII agradeció los servicios prestados a la monarquía por los voluntarios realistas, disputándose el protagonismo principal las autoridades de Orihuela y Alicante.

En los últimos años del reinado se dieron algunos signos, a nivel estatal y municipal, de cambios inminentes. La monarquía, ante la situación de quiebra económica del país y la división política existente, no podía emprender la larga minoría de edad de la futura reina sin la búsqueda de fuerzas sociales y políticas en las que apoyarse, porque los partidarios del absolutismo preferían como rey al príncipe Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. La amnistía decretada por la reina regente, en octubre de 1832, que ejercía las funciones por incapacidad del rey, y que abría las puertas para el retorno de los liberales, fue el primer signo de esperanza. También en el municipio de Alicante, en esos años, se incorporaron al ayuntamiento hombres de talento liberal, como Melchor Astiz o Joaquín María López, que desempeñaron un importante papel, en la década siguiente de asentamiento del liberalismo. El propio corregidor Iriberry, ascendido a mariscal de campo, cesó en su cargo en noviembre de 1832.

La evolución sociopolítica de Alicante durante el segundo tercio del siglo XIX

El segundo tercio del siglo XIX estuvo ocupado por el reinado de Isabel II; sin embargo, no se incluye esa referencia en el

título porque, a diferencia de Fernando VII que por sí solo puede personificar los obstáculos que debió salvar el liberalismo para imponerse, el reinado de su hija fue mucho más pluridimensional ya que, aunque la monarquía mantuvo muchos resabios del antiguo régimen, la familia real se alió con los liberales para mantener los derechos de la reina frente a los alegados por el pretendiente y sus partidarios –los carlistas–, cuestión que, al final, se dirimió con una guerra civil (la carlista, 1833-1840), durante la cual se restablecieron las instituciones del liberalismo, en un proceso rápido pero, no por eso, menos conflictivo. Durante aquellos años la sociedad española vivió en una situación de permanente conflicto, no sólo por la guerra sino también por la diversidad de planteamientos e intereses entre los partidarios del régimen liberal: nobleza terrateniente y campesinos, diversos sectores de la burguesía, clases altas y clases bajas urbanas, etc.. En ese ambiente se llevó a cabo la revolución liberal-burguesa en España; pero la debilidad de los grupos sociopolíticos dirigentes se manifestaría no sólo durante los primeros años sino a lo largo de las décadas siguientes. Eso explica el uso frecuente de la violencia en los cambios de gobierno –los pronunciamientos militares–, la intervención de la alta jerarquía militar en la política, las rebeliones populares y las posiciones irreconciliables de los dos partidos –moderados y progresistas–, que, incluso, acuden en sus distintas fases de gobierno a constituciones distintas. A lo largo de esas tres décadas en Alicante se dió una importante actividad sociopolítica, porque el recuerdo del trienio estaba muy vivo y las convicciones liberales eran muy fuertes, además, se protagonizaron algunas acciones de gran trascendencia política y, finalmente, el crecimiento económico y demográfico de la ciudad, en las décadas centrales del siglo, influyó sobre la vida política.

Alicante en los años treinta. El triunfo de la revolución burguesa

La esperanza creada por la reina regente, a finales de 1832, con el decreto de amnistía, se afianzó a la muerte de Fernando VII, y con la publicación del Estatuto Real, en 1834, se

entró en un proceso de transición que debía terminar inexorablemente en el restablecimiento del liberalismo. Por otro lado, Alicante, a finales de noviembre de 1833, dos meses después de la muerte del rey, se convertía de nuevo en la capital de la provincia de su nombre; por lo que el proceso de transición en la ciudad presentaría la doble faceta de la transformación de las instituciones y de los organismos municipales y la creación de la administración provincial. La permanencia, además, en el ayuntamiento de personas de un liberalismo templado, como señalé más arriba, garantizaba el interés de la ciudad por la reinstauración del nuevo régimen; sin embargo, el proceso de reforma que se iniciaba necesitaba también de organizaciones que lo defendieran ya que, una vez muerto Fernando VII, había estallado la guerra civil; pues bien, a ello responde la creación de la milicia urbana, en febrero 1834, que se transformará en milicia nacional en 1836, y que actuará tanto en campo abierto, apoyando o sustituyendo al ejército regular, como en misiones de control y de mantenimiento del orden en el interior de la ciudad; de ahí que la milicia nacional de Alicante, junto a la de otras poblaciones, efectuara durante la guerra misiones de vigilancia o de persecución contra los rebeldes y participara en otros acontecimientos posteriores.

Tanto en el ayuntamiento que se constituyó en 1834, como en la diputación provincial, en 1836, ocuparon las regidurías personas de conocido talante liberal, que procedían de la burguesía comercial o agraria de la provincia, y que no sólo ejercieron el poder sino que fueron también los principales beneficiarios de las medidas de política económica dictadas por el régimen liberal, como se puso de manifiesto, en primer lugar, con la lista de compradores de bienes desamortizados. En la sesión inaugural de la diputación provincial, el 11 de enero de 1836, su presidente, el jefe político de la provincia –gobernador civil–, hacía referencia en su discurso a tres de los principales problemas a los que la nueva provincia debía hallar rápida solución: el de las comunicaciones, no tanto con otras provincias y con la capital de la monarquía sino entre los distintos pueblos de la provincia y de éstos con la capital, ya que era preciso construir la red territorial de la provincia, y por lo tanto, una parte importante del presu-

puesto provincial debía destinarse a ese capítulo; el de la enseñanza, la primaria, que se hallaba en estado de gran abandono, para que toda la población tuviera acceso a las primeras letras, y la secundaria, objetivo en el que la diputación estuvo asistida por una institución local de gran importancia, la Sociedad Económica de Amigos del País; y el de la sanidad, en el doble aspecto de la prevención y de la asistencia, problema mucho más grave aún por los recientes efectos sobre la población de la invasión del cólera de 1834 y por los permanentes de las enfermedades endémicas. Relacionado con el anterior se hallaba el problema de la beneficencia; de ahí el interés de las autoridades municipales y provinciales por recoger y asistir a las personas más necesitadas, para cuyo objetivo el gobierno concedió el edificio del desamortizado convento de los capuchinos, como ya se había realizado en el trienio liberal.

La guerra carlista fue un problema que la ciudad de Alicante vivió con gran intensidad, no tanto por el peligro que ella pudiera correr como por los males que temía de un nuevo triunfo del absolutismo; de ahí que la milicia nacional actuara, como medida de precaución contra los carlistas y contra los bandoleros, con quienes, a veces, aquellos se confundían, sobre todo en los límites de la provincia, en la comarca de la Marina Alta, a lo largo del valle del Vinalopó desde Villena hasta Crevillente, y especialmente en torno a la ciudad de Orihuela, en donde se produjeron diversas actuaciones de los rebeldes desde 1834, pero la más grave de todas ellas tuvo lugar a finales de marzo de 1837, cuando una partida carlista dirigida por Forcadell, lugarteniente de Cabrera, entró en esa última ciudad. La noticia de esos hechos causó tal impacto en la capital de la provincia que, en parte, se reprodujeron los acontecimientos del verano de 1822, pero las autoridades locales y provinciales respondieron con rapidez y enviaron contra los rebeldes fuerzas del ejército y de la milicia nacional; sin embargo, no se produjo ningún choque porque Forcadell, abandonando Orihuela, evitó a los liberales y éstos se conformaron con perseguir a los carlistas a distancia. En 1838, en Alicante, se produjo un tumulto popular, por lo que se declaró el estado de guerra, al tener noticia del fusilamiento de 96 sargentos isabelinos, ordenado por Cabrera, y por lo que, en repre-

salía, la autoridad militar ordenó asimismo el fusilamiento de 19 sargentos carlistas presos en la isla de Tabarca.

Pero, a la vez, Alicante estuvo muy atenta al desarrollo de los acontecimientos nacionales, participando e incorporándose a los movimientos liberales del verano de 1835, por los que se intentaba presionar a las autoridades para que aceleraran el proceso de liberalización del país y tomaran medidas efectivas contra los carlistas, y de 1836, que condujeron a la proclamación de la constitución de 1812. En este último, según palabras de V. Ramos, “en evitación de desórdenes, se pusieron al frente del movimiento popular los comandantes de la guardia nacional y algunas personas de representación, como lo eran D. Pascual Cuenca, nombrado jefe superior político de la provincia, antes secretario del gobierno civil; D. Andrés Vicedo, diputado a Cortes, y otros que se adelantaron a la multitud para prevenir al comandante general de la provincia”. Juan Bautista Lafora, destacado miembro del comercio alicantino, fue nombrado secretario de la junta auxiliar gubernativa. Es decir, que la burguesía local impulsa decididamente el liberalismo pero, a la vez, controla los movimientos populares para evitar que el radicalismo se convierta en su primer enemigo. Sin embargo, la actitud de esta burguesía será muy distinta en los movimientos de septiembre y octubre de 1840, producidos a causa de la oposición general creada por la ley de ayuntamientos, según la cual no sólo la designación de los alcaldes se efectuaría por el gobierno, sino que los acuerdos municipales debían ser aprobados por los jefes políticos de las provincias, aparte de reducir los censos electorales y las competencias de los ayuntamientos. En este caso, representantes de la misma burguesía serán miembros de la junta provisional de gobierno de la provincia de Alicante, que presidía D. Rafael Bernabeu, comandante de la milicia nacional, estando entre sus vocales D. Manuel Carreras y D. Miguel España. Lógicamente, en el verano de 1840, la coyuntura política había cambiado y los liberales, una vez terminada la guerra carlista, podían ocupar con seguridad el poder; por consiguiente, entonces habría que vigilar el funcionamiento del régimen.

Juzgo que es también de interés tratar de la proyección a escala nacional de algún liberal formado en Alicante; tal es el

caso de Joaquín María López o de Melchor Astiz, sobre todo del primero, que desde el ayuntamiento de la ciudad saltaron a la representación parlamentaria. Joaquín M. López, elegido en 1834, desempeñó un importante papel en aquel parlamento, particularmente colaborando en la redacción y participando en la defensa de la *tabla de derechos*, auténtica declaración de derechos, en el sentido liberal del término, que, una vez aprobada, desbordaba los límites del Estatuto Real; siendo sucesivamente elegido, participó en las Cortes constituyentes de 1836-1837, fue alcalde de Madrid en 1840 y presidió dos fugaces ministerios en mayo y julio de 1843.

El liberalismo alicantino en los años cuarenta. La rebelión de Boné

Durante los años de la regencia de Espartero (1841-1843) el régimen liberal se afianzó en España, funcionaron las instituciones y se aplicaron las leyes dictadas por los anteriores gobiernos; sin embargo, el liberalismo evolucionaba también y se escindía, al surgir entre los progresistas una rama radical que se enfrentaría a los proyectos del regente, quien, al contar con la oposición de los moderados, se encontraría emparedado por un doble frente político. Las cuestiones por las que se luchaba no eran sólo políticas, sino también económicas; y en ese contexto hay que situar la rebelión de la ciudad de Barcelona contra la política de Espartero y el duro castigo que éste le impuso, el bombardeo en los primeros días de diciembre de 1842. Esa actitud del regente concitó a todos los grupos de la oposición contra él, produciéndose, en el verano de 1843, una rebelión generalizada. Alicante se adhirió a ese movimiento y, el 12 de junio, se formó una *junta provisional local de salvación*, que publicó un manifiesto firmado por los miembros del ayuntamiento, los oficiales del ejército, de la milicia nacional y los altos funcionarios de la provincia, en el que podía leerse: “la necesidad de salvar el país y asegurar el trono de la reina Isabel y la constitución de 1837 han creado una situación que sólo podía superarse por un movimiento salvador de unidad, de heroísmo y de lealtad espa-

ñola”. Esta junta local se convertiría en *provincial* con la incorporación de los diputados que representarían a los partidos judiciales. Una vez derrocado Espartero, después de unos meses de gobierno encabezado por los progresistas y proclamada la mayoría de edad de Isabel II, los moderados se hicieron dueños del poder, a primeros de diciembre del mismo año, con el gobierno formado por González Bravo, adoptando inmediatamente medidas inaceptables para los progresistas y que rompían el anterior movimiento de unidad, la reducción de funciones de la milicia nacional y la nueva publicación de la ley de ayuntamientos de 1840.

Ante la nueva coyuntura política, en la ciudad de Alicante los progresistas protagonizaron otros importantes acontecimientos en defensa del régimen liberal, a principios de 1844, la rebelión de Boné. Esta rebelión progresista había sido diseñada para un ámbito mayor, pero únicamente triunfó en las ciudades de Alicante y Cartagena, sin que pudieran imponerlas en las respectivas provincias. En Alicante la dirección la asumió el coronel de carabineros, Pantaleón Boné, quien había llegado a la ciudad, el 26 de enero, procedente de Valencia, al frente de 150 carabineros de infantería y 50 de caballería y una compañía del batallón de infantería de Saboya, con la misión de perseguir el contrabando que se realizaba en la costa. Estando previamente en contacto con los progresistas de la ciudad, empleó los días 27 y 28 para poner a su favor a algunos oficiales de la guarnición de la ciudad y del castillo de Santa Bárbara, del que se apoderó en la tarde de ese último día, consumándose el pronunciamiento por la noche con la detención de las primeras autoridades civiles y militares de la ciudad, para lo que se aprovechó del ambiente festivo y de la confusión que existía por ser domingo de carnaval. Inmediatamente se formó una *junta provisional de gobierno de la provincia* y se publicó un manifiesto para explicar el significado y los objetivos del movimiento, que debía extenderse hasta conseguir la “caída del ministerio rebelde”; junto a la firma del presidente, Pantaleón Boné, aparecían, entre otros, las de los conocidos progresistas alicantinos, Manuel Carreras y Miguel España. El pronunciamiento solo halló alguna resistencia en el regimiento de guarnición en la ciudad que no tardó en rendirse, en la mañana

del día 29; en esa operación ya colaboró con los rebeldes la milicia nacional.

Pero el pronunciamiento de Alicante había que extenderlo y, en su caso, defenderlo; de ahí que, en primer lugar, Boné decretara la movilización de la milicia nacional de la provincia, que “al mando de sus comandantes y socorridas por quince días” se incorporarían a la de la capital, y se creara la *junta de armamento y defensa*; con el mismo objetivo se ofrecía a los sargentos del ejército que se adherieran “a la causa de la libertad” el ascenso a subtenientes, y si se presentaban con una compañía serían nombrados sus capitanes. Sin embargo, el gobierno, una vez conocidos los acontecimientos de Alicante, tomó medidas en un doble sentido, de represión contra los principales jefes progresistas, y militares contra los rebeldes. Respecto a las primeras, el diario madrileño, *El Eco del Comercio*, el 1 de febrero, publicaba una carta de Pascual Madoz en la que denunciaba haber sido conducido a la cárcel “bastante enfermo” y proclamaba no haber tenido nunca “más orgullo”; y el diario, además, comunicaba la detención de otros jefes progresistas, para continuar comentando: “el golpe de estado que temíamos acaba de darse...”. Respecto a las segundas, como ha puesto recientemente de manifiesto V. Ramos, el ministro de la guerra se comunicaba con Roncali, capitán general de Valencia, ordenándole que se dirigiera a Alicante, que recuperara la ciudad y castigara severamente a los rebeldes: “Deberá V.E. obrar, por tanto, con toda la energía que el caso reclama y que permite la omnímoda autoridad que se resume por la declaración en estado excepcional de todo el distrito de su mando”; al mismo tiempo, le comunica el envío de refuerzos militares para terminar con la rebelión. También el ministro de marina, Portillo, se ponía en contacto con el comandante de las fuerzas navales de Cataluña, ordenándole que varias unidades de la armada navegaran hacia Alicante y que “llegados a la vista de dicho puerto, impedirán, con él, toda comunicación, estableciendo el más riguroso bloqueo sobre la plaza”. Las anteriores medidas se completaban con la imposición del estado de excepción y de la censura de prensa en todo el país, para impedir que las noticias de la rebelión fomenten “la desobediencia a las leyes”. Ante estas circunstancias, Boné intentaría, primero,

extender la rebelión a la provincia, dirigiéndose, el 1 de febrero a Alcoy, en donde, el 29 de enero, había fracasado un intento de rebelión progresista, amenazando con asaltar la ciudad al día siguiente; sin embargo, tuvo que abandonar ese proyecto, dado el peligro próximo de enfrentarse a los dos ejércitos que iban contra él, el de Roncali desde Valencia y el de Pardo, comandante general de Murcia; de ahí que saliera al encuentro del segundo, dejando en las proximidades de Alcoy la milicia nacional de algunos pueblos vecinos. En la madrugada del día 5, entre Elda y Petrel, se produjo el encuentro con el ejército de Pardo, siendo derrotado Boné, que había mandado parar el ataque, cuando el combate le era favorable, al simular el enemigo que se rendía y aprovechar, después, la confusión existente para atacar de nuevo y conseguir la victoria; y ese mismo día, por la noche, Roncali entraba en Alcoy. Boné se refugió dentro de los muros de Alicante, dispuesto a resistir, esperando todavía que triunfara la rebelión, y desde el día 7 Alicante estuvo sitiada por tierra y por mar; Roncali situó su cuartel general en Muchamiel y Pardo en San Vicente del Raspeig.

Con la ciudad sitiada y con escasas posibilidades de que triunfara la rebelión, a pesar del levantamiento de Cartagena, Boné debía cuidar de la defensa y del abastecimiento de la plaza. De esa última cuestión ya se había ocupado Boné inmediatamente después del triunfo de la rebelión, cuando había dispuesto la reducción de los impuestos sobre aquellos productos alimenticios que entraran en la ciudad y se creaba una comisión municipal encargada de controlar los pesos y los precios de las mercancías que se vendían al público; de la misma forma, otra medida que debería tener repercusiones muy favorables para la ciudad era la libre importación de algodón, con sólo el 25% de arancel, y que además permitiría destinar a los carabineros de vigilancia en el puerto a funciones defensivas; sin embargo, dichas medidas apenas tendrían efecto, una vez impuesto el cerco de la ciudad. De ahí que los dirigentes de la ciudad decretaran el control, primero, y la requisa, después, de todas las subsistencias existentes, y vigilaran su distribución y los precios a los que se expendían. Estas medidas abrirían una fuerte brecha entre los dirigentes de la rebelión y los comerciantes y almacenistas de la ciudad, por

una parte, y, por otra, entre éstos y las clases populares, que, ante la escasez, veían en aquellos acaparadores y colaboracionistas del ejército sitiador. Tanto Pastor de la Roca como N.C. Jover, en sus respectivas obras, recogen algunos ejemplos de las exacciones que Boné realizó sobre los comerciantes y personas pudientes de la ciudad; así la petición de cantidades considerables de dinero a algunos particulares, en concepto de anticipo, o la exigencia de efectuar fuertes depósitos de subsistencias, como alubias, tocino y, sobre todo, bacalao en el castillo de Santa Bárbara o en los almacenes de la ciudad. Desde los primeros días de la rebelión se notó la escasez de harina y pan, debido al alto número de milicianos y civiles que se habían refugiado en la ciudad, y aunque se tomaron medidas inmediatamente, según Jover, “el pueblo llegó a carecer de pan de una manera alarmante”. Los almacenes de tejidos también se vieron afectados por las requisas y los sastres obligados a trabajar para “uniformar una compañía de guías”, de cincuenta hombres, según el testimonio del mismo autor.

Por otra parte, desde el día 7 de febrero Roncali comenzó a presionar sobre la ciudad sitiada, exigiendo, primero, la rendición a cambio de la vida de los oficiales y suboficiales hechos prisioneros en Elda, el día 5, a lo que los rebeldes contestan, el día 9, calificando tal amenaza de “bárbara” y amenazando, a su vez, si dicho acto se realizara, con fusilar “al comandante general que fue de esta provincia, al jefe político D. Ramón Ceruti, a los oficiales no pronunciados del provincial de Valencia...: fusilaremos a todos los que no profesan principios liberales, y sus cuerpos mutilados caerán rodando hasta los pies de V.E.” Roncali, presionado también por el gobierno de Madrid, cumplió su amenaza el día 14, pero Boné no se atrevió a ejecutar la suya. El impacto de estos hechos sobre la población fue muy fuerte; de ahí que el ambiente de la ciudad estuviera cada vez más enrarecido; Jover lo describe de la siguiente manera: “Muchas familias huyeron en los primeros momentos, las calles quedaron desiertas; las puertas de las casas permanecieron cerradas y solo transitaban por la ciudad nacionales armados y algunos retenes que se trasladaban de unos fuertes a otros“. A medida que el cerco se prolongaba y estrechaba, aumentaba el deterioro del ambiente de

la ciudad, transformándose en indignación a partir del día 25, cuando Boné, sin juicio previo, ordenó ejecutar a un paisano, a quien se creyó espía por habersele detenido con una carta escrita en Villafranqueza; el estado de ánimo de la población se agravó más aún, el 1 de marzo, al dar la orden del reclutamiento general de todos los varones, solteros y viudos, de 18 a 50 años.

La situación de la ciudad y la presión ejercida por la junta de gobierno eran tales que parte del ejército, de la milicia nacional y del pueblo se rebelaron contra Boné; primero fue la guarnición del castillo de Santa Bárbara, mandada por el capitán de carabineros Juan Martín “el Empecinado”, quien, a través de las autoridades detenidas en el castillo, entró en contacto con Roncali, llegando a un acuerdo para la entrega de la ciudad, de lo que se tuvo conocimiento el día 2, y a partir del día siguiente estuvieron cortadas las comunicaciones entre el castillo y la ciudad; después, los extranjeros residentes en la ciudad se refugiaron en los barcos de su nacionalidad llegados para protegerlos, ante la inminencia del ataque de Roncali; finalmente, representantes de todos los grupos sociales y de la milicia solicitaron la entrega de la ciudad. Ante esta situación, dice Jover que la junta “desconcertada y sin tener un centro de acción, se había disuelto casi totalmente”; más aún, continúa, el ayuntamiento, el tribunal de comercio, el cabildo eclesiástico y otras personas notables de la ciudad acordaron el nombramiento de una comisión para que se trasladara al cuartel general de Roncali para ofrecerle la entrega de la plaza. Por fin, en la noche del día 5, Boné sería abiertamente desobedecido y abandonado por sus hombres, algunos, incluso, pensaron atentar contra él; varios miembros de la junta se refugiaron en los barcos extranjeros anclados en el puerto, entre ellos Manuel Carreras, y el jefe rebelde, acompañado de un reducido grupo de fieles, a primeras horas del día 6, salía por una de las puertas de la ciudad. Ese mismo día Roncali entraba en Alicante y Boné, horas más tarde, era detenido en las proximidades de Sella, siendo trasladado a Alicante al día siguiente.

Las primeras órdenes dadas por el capitán general tuvieron por objeto la disolución de la milicia nacional y el desarme de los milicianos y paisanos; todos los que pertenecieran a alguna institución armada deberían permanecer en los respectivos

cuarteles hasta nueva orden y quienes no acataran estas normas serían pasados por las armas; del mismo modo Roncali mandaba reponer al ayuntamiento constitucional y nombraba a un coronel del ejército para que se hiciera cargo de las detenciones de los miembros de la junta y de aquellos que se habían adherido a la rebelión y que se hallaban ocultos, encargando al ayuntamiento y al jefe político de que hicieran las investigaciones pertinentes. Finalmente, el día 8 de marzo, por la mañana, en el malecón de Alicante, fueron fusilados veinticuatro de los dirigentes más activos de la rebelión, entre ellos D. Pantaleón Boné. El día 12 eran fusilados otros dos en Cocentaina y el 13 dos más, uno en Monforte y otro en Alicante.

Sin embargo, a pesar de la dura experiencia por la que había pasado la ciudad y del abandono al que fueron dejados los rebeldes, en Alicante no solo no disminuyeron los sentimientos liberales sino que se elevó a los ejecutados a la categoría de “mártires de la libertad”, celebrándose todos los años, el día 8 de marzo, desde el primer aniversario, “cuando, en expresión de Jover, todavía el gobierno que la había decretado (la muerte) ejercía su recelosa vigilancia” un acto cívico en el Malecón y un solemne funeral en la iglesia de San Nicolás en su memoria. Más tarde, cuando se urbanizó la línea de costa desde la entrada del muelle de levante hasta el baluarte de San Carlos, se rotuló la avenida resultante como Paseo de los Mártires. Los dirigentes de la rebelión que lograron huir, a la entrada de Roncali, pudieron regresar a Alicante en octubre de 1846 a causa de la amnistía general decretada con motivo del matrimonio de Isabel II.

El retorno a la normalidad, después de la rebelión, fue muy duro; por una parte, las autoridades municipales extremaron la vigilancia y todas aquellas personas sospechosas o abiertamente declaradas partidarias de los progresistas eran intensamente controladas, y por otra, la ciudad se encontró de nuevo con los problemas tradicionales del abastecimiento y del déficit crónico, aunque, a mediados de los años cuarenta, aparecían signos bastante alentadores de un próximo cambio de la coyuntura, tal como sucedía con los primeros intentos de la construcción del ferrocarril de Madrid a Alicante y la formación de la *Compañía alicantina de fomento*, con un capital social de seis millones de

reales, en seis mil acciones de 1.000 reales cada una; en el consejo de administración se hallaban miembros de la nobleza local terrateniente y de los comerciantes, que, a la vez, estaban interesados en el proyecto ferroviario. Los objetivos de la sociedad eran fomentar, en toda la provincia, la seguridad personal y el ahorro y abrir una vía de crédito a la agricultura, el comercio, la navegación y la industria, para lo que establecieron representantes en los principales pueblos.

A finales de 1844, el ayuntamiento de la ciudad enviaba un escrito a los parlamentarios alicantinos —diputados y senadores—, que constituye un memorial sobre las necesidades más urgentes que se sentían en aquellos momentos, “confiando a su patriotismo emplear todos los medios posibles para conseguir que queden satisfechas”. En el se trataba, en relación con la agricultura, de la conveniencia de crear “tribunales de aguas”, que entendieran de todos los problemas del riego, respetando la tradición pero atendiendo también a las necesidades presentes, y del proyectado “canal del Júcar”, que debía conducir las aguas sobrantes de ese río hacia Alicante, no tanto para obtener un inmediato “éxito feliz” como para mantener una reivindicación, que Valencia se había negado rotundamente a conceder, en 1841, en la reunión celebrada en Almansa entre representantes de Albacete, Alicante y Valencia. Respecto a la industria se refiere a la protección que debía darse a las manufacturas de esparto, a las metalúrgicas y a la entrada del carbón de piedra, mediante la elevación de los aranceles a la exportación de las materias primas de las dos primeras y la reducción a la importación del tercero. El capítulo mayor es el referido al comercio; así se pide la desaparición de los “derechos de puertas”, la fuerte reducción del arancel sobre el bacalao y los frutos coloniales y los lienzos de Irlanda, a cuyo blanqueo se destinaba la barrilla, sobre la que debía aumentarse el arancel de salida; asimismo solicitaban la simplificación de los trámites que había que realizar en la aduana y en el registro de los buques que entraban y salían del puerto; piden en nombre de “la libertad de trabajo” que desaparezca el “gremio de mareantes” que ha sido abolido ya en otras plazas, que se prohíba la venta en la aduana de “géneros decomisados” y que se cierre el puerto de Santa Pola al tráfico mercantil porque

“disfruta de un injusto privilegio” en perjuicio del de Alicante; finalmente, se solicita para Alicante el ser considerado puerto de exportación de cereales por ser más lucrativo este negocio que el de importación. También se trata en el memorial de las comunicaciones de la ciudad con la provincia y con el resto del país; de ahí la referencia al proyecto del ferrocarril de Madrid a Alicante, a las carreteras de Alcoy y de la Marina y a la necesidad de un puente sobre el “Barranco de las Ovejas” en la carretera de Madrid. Por fin, el ayuntamiento de Alicante se quejaba de las contribuciones que tenía que pagar, mucho más altas comparativamente que las de Valencia.

En 1844 comenzaba una década a lo largo de la cual los moderados estarían permanentemente en el poder; el instrumento de su gobierno fue la constitución de 1845, establecieron un fuerte centralismo administrativo, completando la ley de ayuntamientos con la de *Organización y atribuciones de los consejos provinciales* –diputaciones provinciales–, convertidos en “cuerpos consultivos” del jefe político de la provincia, que era su presidente, y ejercieron un fuerte control político de la población, para lo que disolvieron la milicia nacional en todo el país, organizaron los cuerpos policiales y crearon la guardia civil. Sin embargo, a pesar de lo anterior y del fracaso de la rebelión de 1844, en Alicante, en 1848, se dejó sentir otra vez la marea revolucionaria, que afectó a la capital y a varias localidades del norte de la provincia. Concretamente ese año, debido a los acontecimientos revolucionarios que habían tenido lugar en Europa, particularmente en Francia, el gobierno de Narváez había tomado unas medidas policiales extremas, mandando detener e, incluso, desterrar, en el mes de marzo, a muchas personas sospechosas de conspirar contra el régimen. Pues bien, en esas circunstancias, a primeros de mayo, a la vez que se producía un levantamiento carlista en Pego, bastando para diluirlo que el comandante general de la provincia proclamara el estado de sitio y enviara algunas tropas contra ellos, se descubría una conspiración “republicana” en Alicante, dirigida por el histórico progresista Manuel Carreras, con el que colaboraban algunos suboficiales del ejército y otros paisanos. Descubiertos, fueron juzgados en un consejo de guerra, pronunciándose varias sentencias de muerte, entre

ellas la de Manuel Carreras; sin embargo, no se cumplió ninguna; a los militares les fue conmutada por iniciativa del capitán general y a los paisanos por petición popular. Manuel Carreras fue desterrado a Filipinas, de donde regresó en 1852, beneficiándose de nuevo de una amnistía real. Unos meses más tarde, a finales de octubre, se producía una sublevación “republicana” en Guadalest, en donde un grupo de 35 personas habían asaltado y ocupado el castillo; la represión de este movimiento se llevó a cabo por fuerzas del ejército rápidamente y con gran dureza. En el informe del comandante general de la provincia al capitán general se decía: “... La operación se ha hecho con admirable valor y el resultado ha sido coger 20, incluso el cabecilla, que están pasándoles por las armas, y el resto muertos en combate”. No dejan de ser significativas esas conspiraciones y sublevaciones de la provincia de Alicante y el calificativo de “republicanas” que les daban las autoridades porque indican la evolución que seguía el progresismo radical, semejante al del resto del país, que, vencido en 1844 y desesperanzado por la larga permanencia en el poder de los moderados, pasaba a posiciones más extremas.

Los movimientos populares de 1854 y la evolución sociopolítica hasta 1868

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que durante esos años, y con una coyuntura económica en alza que favorecía a las relaciones con el exterior, en Alicante se dió un importante crecimiento económico y una notable expansión de la ciudad, lo que debía influir sobre los comportamientos políticos. No ha de extrañarnos, por lo tanto, que, dado el carácter de la llamada “revolución de 1854”, Alicante fuera sorprendida y que en ella los acontecimientos se desarrollaran con moderación, colaborando en el movimiento liberales de las distintas tendencias.

El exclusivismo con el que habían gobernado los moderados durante una década, la tendencia al autoritarismo, particularmente en el gobierno de Bravo Murillo, y los métodos policiales del conde de San Luis pusieron en su contra no sólo a los progresistas sino también algunos sectores de los moderados; de ahí

que el pronunciamiento de O'Donnell fuera algo más que un signo, ya que él pretendía establecer un puente entre moderados y progresistas para formar así un partido liberal de centro —la Unión Liberal—; sin embargo, mientras el movimiento fue exclusivamente militar no despertó interés en las organizaciones progresistas ni en las capas populares; de ahí que el general rebelde, rememorando las hazañas de Riego, iniciara una marcha con su ejército hacia Andalucía; pero la publicación del *manifiesto de Manzanares*, el 7 de julio, en el que se prometía el restablecimiento de la milicia nacional y la convocatoria de cortes constituyentes se convirtió en el acicate de los movimientos populares, que estallaron el día 17 en Madrid y que dos días más tarde, previo nombramiento de la reina, llevarían a Espartero a la presidencia del gobierno. El 30 de junio, el capitán general de Valencia, a la vez que publicaba el decreto del estado de sitio promulgado para todo el país, decía que “felizmente en todo el distrito de esta capitanía general se disfruta de completa tranquilidad y sin la menor sospecha de que pueda alterarse...”, con todo, el 7 de julio, prohibía “circular noticias alarmantes sobre las actuales circunstancias”, amenazando a quien lo hiciera con aplicarle la justicia militar.

En Alicante se produjo el movimiento popular también el 17 de julio, cuando llegó la noticia del levantamiento de todas las ciudades del Mediterráneo desde Gerona a Valencia. Pastor de la Roca, escritor romántico y cronista de la ciudad, expresa los sentimientos del momento de la siguiente manera: “Alicante abrazó con sincero entusiasmo esa bandera regeneradora que venía a restituir las franquicias y derechos que una dominación odiosa le arrebatara”; y a través del estudio de R. Zurita se desprende que, como ya sucediera en 1836, las autoridades municipales y provinciales se pusieron a la cabeza y dirigieron el movimiento popular. Primero fue el ayuntamiento que, en sesión extraordinaria, acordó adherirse al pronunciamiento y, después, el gobernador militar no sólo lo apoyó “con el orden que es debido”, como se le pedía, sino que presidió también la *junta de gobierno*; en cambio, el gobernador civil huyó de Alicante, con lo que seguía la suerte del derrocado gobierno moderado. Con el anterior comandante militar de la plaza, general Camilo Moreno,

componían la junta de gobierno otras 23 personas, la mayor parte de las cuales, según R. Zurita, eran miembros de la burguesía local, comerciantes, propietarios, o ambas cosas a la vez, y casi todos habían pertenecido en anteriores etapas a la milicia nacional; en la junta existía también un importante componente militar, siete miembros, casi una tercera parte. Esta junta formada por burqueses y militares no pretendía otra cosa que el mantenimiento del orden y la aplicación de las leyes de liberalización política que dictaran las altas instituciones del Estado. La junta de Alicante, a diferencia de las de otras ciudades, el 19 de julio nombró un nuevo ayuntamiento compuesto también por miembros de la burguesía, entre los que había varios dedicados a profesiones liberales; el alcalde era el activo progresista Manuel Carreras y fueron designados concejales algunos miembros de la junta de gobierno. En el ayuntamiento, a juicio del autor citado más arriba, había un ligero predominio de los progresistas, pero también eran concejales destacados miembros del partido moderado y el que después sería el jefe provincial de la unión liberal, Luis Campos Domenech. Por otra parte, la de Alicante, a pesar de que existían juntas en otros pueblos de la provincia, ejercía funciones directivas sobre ellas y actuó como órgano político supremo hasta que se nombró al nuevo jefe político.

Pero, ante la situación descrita, debemos preguntarnos por la actitud de las clases populares, ya que, por otra parte, éstas eran las principales partidarias de los progresistas y que tampoco en el bienio alcanzaron el derecho al voto por el mantenimiento del sufragio censitario, aunque los progresistas redujeron a la mitad la renta exigida por la ley electoral de los moderados. La junta de gobierno de Alicante, en aplicación del manifiesto de Manzanares y ante la demanda popular, tomó dos decisiones de gran importancia, el 22 de julio, la organización de la milicia nacional y la abolición de los impuestos de puertas y de consumos. Por la primera, se incorporaban las clases populares a la defensa de las reformas políticas que se llevarían a cabo siempre que, según decía la ley de 1822, tuvieran “propiedad, rentas, industria u otro modo conocido de subsistir”, pero los oficiales de los que se conoce la profesión pertenecían a la burguesía local o eran funcionarios; y por la segunda, se retiraban unas cargas

fiscales que gravaban duramente la economía de dichos grupos sociales. Sin embargo, pocos días más tarde, el uno de agosto, una vez constituido el gobierno de Espartero-O'Donnell, éste dictaría dos decretos, uno restableciendo los anteriores impuestos abolidos, y otro transformando las juntas de gobierno de las provincias en “auxiliares y consultivas”, lo que equivalía a su práctica desaparición; de hecho, la de Alicante dejó de existir, el día 22, cuando llegó a la ciudad el nuevo gobernador civil, D. Trino González de Quijano. La milicia nacional, organismo en el que el pueblo se hallaba representando según sus afinidades políticas, ante estas medidas, particularmente las fiscales, y a causa de la escasez de subsistencias y la subida de los precios de 1855 y 1856, presentó sus reivindicaciones al gobierno, por lo que éste procuró reducir progresivamente sus facultades; de ahí que en esos años, en las principales ciudades del país se dieron numerosos motines populares; en la provincia de Alicante alcanzaron gran intensidad los de Alcoy, en enero y mayo de 1856.

Ese enfrentamiento entre las clases populares y las autoridades abrió no sólo una gran brecha entre ellas sino también entre las primeras y el partido progresista; de ahí que en los años siguientes miembros destacados de esos grupos adopten otras posiciones políticas, primero demócratas y después republicanas. Entre la caída de Espartero, el 17 de julio, y la vuelta de Narvaez, el de 10 de octubre, O'Donnell desmontó la política del bienio, disolvió la milicia nacional y restableció la constitución de 1845. En Alicante, conocida la noticia del cese de Espartero, el gobernador civil y el ayuntamiento dimitieron, siendo designada una nueva corporación, cuyos componentes eran de clara tendencia moderada.

La frustrada reforma política del “bienio progresista” había aportado algunas experiencias importantes a la historia política española: la confluencia de los dos partidos liberales hacia un centro —la unión liberal— que podría haber modificado la evolución política posterior, pero la irreconciliabilidad de los moderados y los progresistas arruinó el proyecto, y las medidas de política económica, que no sólo recuperaban y profundizaban en otras del primer liberalismo, como la desamortización, sino que regulaban e impulsaban actividades económicas nuevas, como

las financieras y bancarias y la construcción del ferrocarril, que se mantuvieron a lo largo de la década siguiente. La burguesía alicantina, lógicamente, aprovechó las nuevas oportunidades: invirtió en la compra de tierras desamortizadas, sobre todo en las del clero secular, participó en la financiación del tramo ferroviario de Alicante a Almansa, y se proyectó la creación en la ciudad de un banco de emisión, en marzo de 1856, con la ayuda de capital extranjero; con todo, el interés económico de la plaza queda de manifiesto con el establecimiento, en 1858, al mismo tiempo que en Valencia, de una sucursal del Banco de España, que ocupó un local en el edificio del Pórtico de Ansaldo, recientemente construido sobre el solar del antiguo convento de los dominicos.

Sin embargo, la ciudad de Alicante, como la mayor parte del país, en los meses de agosto y septiembre de 1854, hubo de pasar por una dura prueba como consecuencia de la invasión del cólera, durante la cual se dió la aparición de uno de los personajes históricos a quien mayor respeto y admiración ha rendido la ciudad. D. Trino González de Quijano, gobernador civil que, pocas semanas después de su llegada a Alicante, falleció víctima del cólera, que había contraído visitando y socorriendo a los enfermos más necesitados. En el informe que el ministro de Hacienda presentó en torno a la erección de un monumento en Alicante a la memoria de Trino González de Quijano, y la concesión de una pensión a su viuda, decía que, siendo ministro de la Gobernación en 1854, al tener que nombrar gobernador civil de una provincia invadida por el cólera, pensó en una persona que no sólo pudiera cumplir con su deber sino que tuviera una gran humanidad; de ahí que en sus informes, según ha recogido V. Ramos, “no respiraba más que amor a la humanidad y deseo ardiente de sacrificarse en obsequio de la provincia, cuya mando le había encomendado el gobierno”. Pero la obra de Trino González de Quijano no fue sólo humanitaria sino que pretendió por todas las maneras recuperar la normalidad, instando a funcionarios y a las autoridades locales a permanecer o a regresar a sus puestos, ya que el desconcierto administrativo acentuaba aún más el caos y las repercusiones de la enfermedad. Incluso escribió una carta al obispo de Orihuela para que no sólo el clero

cumpliera con sus deberes pastorales sino para que el propio prelado diera ejemplo de abnegación y de caridad cristiana y acompañara al gobernador en las visitas de asistencia domiciliaria a los enfermos.

Unos años más tarde, a finales de mayo de 1858, Alicante celebraba, con la presencia de la reina, su entrada en una nueva época, la caracterizada por la revolución de los transportes. Isabel II realizó el viaje en ferrocarril y, con su llegada a Alicante, la línea que había comenzado a explotarse en el mes de marzo, quedaba oficialmente inaugurada. La reina en la ciudad presidió actos religiosos y militares, recibió a las autoridades y notables en un "besamanos", asistió a una función de teatro y visitó los conventos de monjas, actos en los que el pueblo estuvo presente, unos movidos por la curiosidad y otros por la adulación. El poeta Vila Blanco, en una obra escrita con estilo épico y una retórica que hoy resulta sofocante, hizo la crónica de ese viaje.

Durante la década que siguió a la caída del gobierno de Espartero, Alicante conoció un importante crecimiento económico y urbano, y reprodujo, a nivel político, el ensayo del turno de partidos en las instituciones provinciales y locales, igual que se realizaba en el gobierno del Estado. Alicante se había convertido en una sucursal del poder central; de ahí que también en esos años se dieran varios conflictos entre los candidatos gubernamentales y los locales en las confrontaciones electorales; y Alicante había quedado también al margen de los centros de la oposición política. Durante esa década se habían ido desarrollando las ideas y el programa del partido democrático y se habían dado los primeros pasos de su organización; entre las ideas fundamentales estaban el sufragio universal, la libertad de imprenta, la separación de la iglesia y del estado y la república como forma de gobierno —la mayoría del partido se confesaba partidaria de la república federal para poner coto al centralismo del Estado—; también estaban elaborando los demócratas un amplio programa de reformas sociales y económicas. Con todo ello los demócratas pretendían ofrecer un conjunto de soluciones a los problemas del país y captar el interés y la voluntad de las clases populares que hasta entonces habían dejado marginadas los programas liberales de los moderados y de los progresistas.

Así pues, creo interesante tratar de la difusión de las ideas y programas de los demócratas en Alicante. Aunque puedan tomarse como antecedentes, no deja de ser prematuro el calificar como republicanos los movimientos populares anteriores a 1860. Vicente Ramos habla de la fundación del partido demócrata en Alicante entre 1863 y 1865, en sendas reuniones celebradas en Novelda, a la segunda de las cuales asistieron, además de otros, Eleuterio Maisonnave y Aureliano Ibarra, personas de gran peso posterior en el republicanismo y que se habían introducido en el partido demócrata en Madrid y Barcelona, respectivamente, durante sus etapas de estudiantes. En la difusión de las ideas demócratas y republicanas en Alicante influyó notablemente el *Círculo de Artesanos*, creado en 1864, siguiendo el modelo del Fomento de las Artes de Madrid, con el que estuvo relacionado Maisonnave y que fue uno de los fundadores de aquél y secretario de la primera junta directiva, en la que también se hallaba el grupo de demócratas más activo de la ciudad. El *Círculo de Artesanos* tenía por objeto elevar el nivel cultural, educativo y profesional de las clases populares y trabajadoras. En octubre del primer año comenzaron a funcionar cuatro aulas: primera enseñanza, francés, teneduría de libros y dibujo, y en el mes de diciembre era ya 408 los socios; así pues, la transmisión de la cultura, la capacitación profesional y la categoría de los profesores se convertían en un excelente vehículo para la difusión de las ideas políticas y sociales. A pesar de ello, los intentos de rebelión contra el gobierno y la reina, que se produjeron en junio de 1866, cuyo acto más significativo fue la rebelión del cuartel de San Gil de Madrid, y en agosto de 1867, apenas tuvieron transcendencia en Alicante; en el primero, se cerraron los centros y los periódicos demócratas, y en el segundo, se declaró el estado de guerra en la región militar de Valencia y algunos dirigentes históricos, como Tomás España y Aureliano Ibarra, entre otros, estuvieron detenidos durante una temporada. La represión desencadenada a partir de la rebelión de 1866 contra los progresistas y los demócratas hizo que los principales jefes de éstos se exiliaran y que en el extranjero –Pacto de Ostende– prepararan la revolución que estallaría en septiembre de 1868. En ese momento, las

clases populares alicantinas, con amplia información sobre las ideas y programas democráticos y nuevamente castigadas por la crisis económica, apoyaron y secundaron la revolución.



LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y EL SEXENIO DEMOCRÁTICO EN ALICANTE

ROSA ANA GUTIÉRREZ LLORET
Universidad de Alicante

E

L pronunciamiento militar de septiembre de 1868 se sitúa en un contexto de crisis en el que confluyen la descomposición del sistema político isabelino y una grave recesión económica. La combinación de ambos factores da lugar a una coyuntura revolucionaria que desmarcará los objetivos meramente reformistas previstos inicialmente y traerá consigo el destronamiento de la reina Isabel II.

En julio de 1843 el fin de la Regencia de Espartero supuso el triunfo político del moderantismo y el inicio de la que se ha denominado *década moderada*. Se afirmaba así el régimen isabelino que, vertebrado en torno a la Constitución de 1845 y un sistema electoral muy restrictivo, estaba dirigido por la vertiente más conservadora de liberalismo burgués y expresaba el compromiso de la burguesía dominante con ciertas supervivencias del Antiguo Régimen. El breve paréntesis revolucionario del Bienio progresista no supuso modificaciones fundamentales en el funcionamiento del sistema, si bien, como ha puesto de relieve Joaquín Azagra, contribuyó a la articulación de un marco económico más favorable para el desarrollo del capitalismo español y consolidó las conquistas liberales anteriores.

A mediados de la década de los sesenta es evidente la crisis del sistema político isabelino, que muestra claros síntomas de agotamiento por su incapacidad para dar cabida a fuerzas que, como el progresismo, eran la expresión política de sectores económicos y sociales ligados a las nuevas realidades de la expansión capitalista de los años cincuenta y cuya integración era necesaria para el mantenimiento del sistema político. Los partidos excluidos de la escena política, progresistas y demócratas, comenzarán desde esas fechas a colaborar más estrechamente y a reorganizarse para preparar la oposición al régimen moderado. En 1864 se constituirán en la ciudad unos círculos que con el nombre de la *Tertulia de Alicante* –progresista– y el *Círculo de Artesanos* –demócrata– se convertirán en los centros donde se articulaba la conspiración y la trama civil que derrocará al régimen isabelino.

De forma paralela, estos partidos configuraban su organización en Alicante con la creación de los Comités locales y de los periódicos *El Eco de Alicante* y *Fígaro*. Mientras el primero, de filiación progresista, presentaba las características de un diario político, la revista *Fígaro* adoptó las formulaciones humorísticas que Iris M. Zavala ha tipificado como propias del periodismo “disidente”, representativo del liberalismo radical y demócrata-republicano y que más tarde serían frecuentemente utilizadas por la prensa aparecida tras la revolución de septiembre. En otro orden de cosas, la adopción del retraimiento de la escena política y las declaraciones antidinásticas efectuadas por algunos líderes progresistas y demócratas no podían suponer más que el paso a la lucha armada, una vez comprobada la ineficacia de la oposición legal y parlamentaria. En ese sentido, es claramente significativo el párrafo inicial de la circular del Comité Democrático de Alicante fechada el 19 de diciembre de 1864: “cuando oigáis que esos amigos de la opresión y la tiranía os llaman ilusos, temerarios, decidles que los principios puros, que lleváis escritos en vuestros corazones, los llevareis algún día, aunque sean escritos con sangre, en una carta constitucional”. Se preparaba, pues, el camino hacia la resistencia activa a la monarquía isabelina que, por su parte, tomaba un carácter cada vez más represivo y veía disminuir sus apoyos sociales.

Desde el punto de vista político, los tres años anteriores a la revolución se desarrollaron en un clima de gran agitación y crispación. La vuelta de O'Donnell y el Gobierno de la Unión Liberal no pudieron frenar la revolución antidinástica que se preparaba y sus primeras manifestaciones serán el acuerdo firmado en Ostende por los partidos de oposición y las intentonas de pronunciamiento militar de los años 1866 y 1867. En esos momentos en el panorama político de la oposición alicantina comenzaba a destacar las que habrían de ser después las principales figuras de la revolución del 68: Francisco Javier Carratalá, director del diario progresista *El Eco de Alicante*, y Eleuterio Maisonnave, fundador de la revista demócrata *Fígaro*.

Si el desgaste político de la monarquía isabelina fue determinante a la hora de explicar las causas de la revolución del 68, no podemos olvidar que la crisis económica fue también un fac-

tor desencadenante que motivó a determinados sectores sociales a participar activamente en el movimiento de septiembre. En Alicante la crisis económica de 1866-1868 también dejó sentir sus efectos y en ese sentido coadyuvó al triunfo revolucionario.

Alicante se había configurado desde el siglo XVIII como una ciudad eminentemente comercial y portuaria. Contaba además con una consolidada producción agraria en la huerta que rodeaba el perímetro urbano, mientras que el sector industrial, que mantenía unos rasgos específicamente artesanales, mostraba un crecimiento muy lento y una escasa incidencia en la estructura económica local. La expansión económica sin precedentes que conoció el capitalismo español en la década de los cincuenta al calor de las reformas en la legislación comercial y financiera y la construcción de las principales líneas del tendido ferroviario afectó a la ciudad, que inició una etapa de gran prosperidad marcada por la declaración en 1855 de puerto de interés general y en 1858 por la inauguración del ferrocarril Madrid-Alicante y la instalación de una sucursal del Banco de España.

La crisis de 1866 vino a cortar bruscamente esa etapa expansionista que se había traducido en un crecimiento de la población y de movimiento comercial y portuario. En 1863 una exposición de algunos accionistas de la *Sociedad General Española de Descuentos* en la capital nos indica las dificultades por las que atravesaba la sociedad, que quebraría en octubre de 1864 y evidencia las primeras manifestaciones de la crisis, que afectaría en primer término a determinados núcleos de pequeños comerciantes y ahorristas. En los años siguientes la prensa hará continuas referencias a la paralización comercial y a la crisis agraria, que será la otra vertiente en la que se manifiesta la coyuntura recesiva en la que se inserta la revolución del 68.

Los trabajos de N. Sánchez Albornoz han puesto de relieve la coincidencia de la revolución con una crisis de subsistencias que demuestra que la agricultura española seguía contando con problemas estructurales y que no se había superado una economía agraria tradicional frente a las nuevas formas emergentes resultado del desarrollo capitalista en la primera mitad del siglo XIX. En Alicante, al igual que en otras zonas del litoral mediterráneo, la crisis agraria tendrá una mayor incidencia por la defi-

citaria producción cerealista, según reflejaba en 1867 el Ayuntamiento en su contestación a una encuesta del Gobernador Civil: “en este distrito municipal no se cosecha más que cebada y ésta no abastece a cubrir el consumo del mismo ningún año, siendo destinada al pienso de las caballerías [...] El consumo de trigo y cebada en este distrito está sujeto a importación de otros puntos”, La carestía de trigos y harinas, a la que se unía la contracción comercial y la sequía, sólo podía paliarse con la importación de grano extranjero, que ya había sido planteada en abril de 1866 por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante y que sería reconocida por el Gobierno en agosto de 1867 al levantar el arancel prohibicionista.

La escasez cerealista alcanzó su máxima cota en el año 1868 en el que se manifestará con toda virulencia la crisis de subsistencias y el hambre. Con el doble objetivo de mitigar los efectos de la crisis y preservar el orden público evitando que la carestía alentase el malestar popular y la conspiración revolucionaria, las autoridades locales acordaron, tras negociaciones con los panaderos y tratantes de harinas, fijar el precio del pan a fin de contener el alza y poner en marcha un plan de obras locales para dar trabajo a los jornaleros parados pues, según se reconocía en las Actas de Cabildo, era éste el medio “mejor y más inmediatamente beneficiosos de atender a las necesidades de las clases menos acomodadas”.

En la coyuntura revolucionaria abierta en septiembre de 1868 es necesario tener presente la articulación de unos factores políticos y económico-sociales y la actuación de estos sobre los sectores sociales que participaron en el movimiento septembrino, pues, como señaló el profesor Fontana, esos sectores, aunque coincidieran en el objetivo común de derrocar a Isabel II, respondieron a motivaciones diversas. La revolución del 68 fue el resultado de la acción de un bloque social y político heterogeneo y de la articulación de los grupos dirigentes de la conspiración de extracción burguesa con un potente movimiento popular, que sería la causa de que lo que en sus inicios se esbozaba como un pronunciamiento militar y un mero cambio político tuviese un mayor alcance social.

La ciudad de Alicante se adhirió masivamente a la revolución de septiembre. Tenemos, en primer lugar, a una burguesía portuaria que se siente incómoda en el marco político isabelino y que se opone a la política económica de signo proteccionista que perjudica sus intereses comerciales. La actitud tradicionalmente librecambista de los comerciantes alicantinos había cristalizado unos años antes en la creación de la sección local de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas* y la paralización comercial a consecuencia de la recesión económica de 1866 les dará nuevos argumentos en pro de las tesis librecambistas y la eliminación de aquellas trabas que constreñían el desarrollo económico. La pasividad del Gobierno ante esta cuestión reforzará la actitud crítica y el compromiso de buena parte de su burguesía con la revolución y su programa económico.

La participación de las clases populares —artesanos, campesinos, asalariados urbanos— en la revolución de septiembre vino motivada fundamentalmente por la crisis económica y ello la configura como un fenómeno de transcendencia social más amplia de lo que había previsto la burguesía en oposición a Isabel II. De hecho sus reivindicaciones se concretan en la supresión del sistema de reclutamiento militar —quintas y matrículas de mar— y en la abolición de los consumos —impuestos indirectos que gravaban los artículos de consumo—. Por su parte, la pequeña burguesía urbana, que se encuentra representada fundamentalmente por un comercio minorista muy extendido en el Alicante ochocentista, comparte esas reivindicaciones, pues se ha visto también afectada por la crisis económica y por las crecientes medidas impositivas de los últimos Gobiernos de la monarquía.

Anatomía de la Revolución de Septiembre de 1868

Del pronunciamiento a la insurrección popular

En los meses anteriores a la revolución, la oposición al régimen isabelino partía cada vez de mayores frentes, a la par que se intensificaba la propaganda revolucionaria desde los círculos progresista y demócrata. Ante esa situación, la respuesta

gubernamental fue la represión, como reflejan las comunicaciones que con *carácter reservado* envía el Gobierno Civil al Alcalde de Alicante entre abril y julio de 1868 con instrucciones precisas para reprimir cualquier conato insurreccional.

Pero la conspiración difícilmente podía ser atajada. El 18 de septiembre la armada surta en la bahía de Cádiz se pronunciaba contra la monarquía isabelina al grito de “Viva España con honra”. Comenzaba la revolución y desde primeras horas de la mañana del día 21, grupos de manifestantes recorrieron las calles de Alicante para concentrarse, tras asaltar varias armerías, en el Teatro Principal, donde se construyeron barricadas. Abortado este primer conato insurreccional por fuerzas combinadas de la guardia civil y del regimiento “Princesa Mercedes”, los implicados huyen de la población y alguno de ellos se unirá a las partidas revolucionarias que se estaban formando en diversos puntos de la provincia con el fin de hostigar a las tropas gubernamentales.

El segundo acto de los sucesos revolucionarios en la capital tiene lugar en la tarde del 29 de septiembre al conocerse la derrota de las tropas isabelinas en la batalla de Alcolea. Mientras las fuerzas militares allí destacadas y el Gobernador Civil abandonan la ciudad para dirigirse a Almansa, el estallido popular es incontenible. Un gran número de personas se congrega ante el Ayuntamiento y la última Corporación isabelina traspasa sus poderes a la Junta Revolucionaria que acaba de constituirse con carácter provisional.

La recomposición del poder local: la Junta Revolucionaria y el Ayuntamiento popular

La Junta revolucionaria encarna a nivel local el primer poder de la revolución. Compuesta por miembros de los partidos integrantes del bloque revolucionario –progresistas, demócratas y unionistas– la Junta surge de forma espontánea para ocupar el vacío de poder producido por la huída de las autoridades civiles y militares y sus primeras actuaciones se encaminaron a dar publicidad al movimiento revolucionario.

El día 4 de octubre se celebraban las elecciones para la constitución de la Junta Revolucionaria definitiva. A efectos electorales la ciudad se divide en cuatro distritos: Casas Consistoriales, Santa María, San Francisco y Teatro, y podían ejercer el derecho a voto todos los varones mayores de veinte años, que no estuviesen procesados por delitos comunes. Tomaron parte en las elecciones 3.727 electores y los resultados fueron favorables a los republicanos con el 53'2% de los votos emitidos frente al 46'7% que obtuvieron los candidatos monárquicos. Entre estos últimos el más votado fue Tomás España y Sotelo que sería elegido presidente, seguido por los republicanos Francisco García López, Eleuterio Maisonnave y Anacleto Rodríguez. Desde el punto de vista sociológico la composición de la Junta refleja una clara hegemonía burguesa, predominando los comerciantes, las profesiones liberales y los propietarios agrarios de la Huerta.

La labor de la Junta se centró en la reorganización de la vida local. Buscando la normalidad en la convivencia ciudadana y la preservación del orden público, se constituyeron patrullas de vigilancia nocturna y se acordó la disolución de las partidas revolucionarias, a lo que éstas se negaron. El bloque revolucionario comenzaba a presentar fisuras y la Junta, con una línea de actuación muy moderada, se desligaba de esa gavilla rural de componente proletario y pequeño-burgués que representaba el radicalismo republicano muy alejado del moderantismo preconizado por los sectores de la burguesía capitalina.

Esa actitud moderada de la Junta tuvo también su expresión en los textos programáticos que elaboró y en la legislación que dictó. La Declaración de Derechos del 9 de octubre es un exponente claro, pues, junto a una exposición de derechos propia del liberalismo democrático –sufragio universal, libertades políticas, establecimiento del jurado, abolición de la pena de muerte, libertad de enseñanza–, algunas manifestaciones de carácter anticlerical –libertad de cultos y de excomunión, reducción de las diócesis y supresión del clero colegial– y el reconocimiento de varias reivindicaciones populares como la abolición de las quintas y consumos, se recoge una referencia expresa a dar “sólidas garantías para la seguridad individual y el derecho de propiedad”. Muy interesante es el capítulo económico de esta Declara-

ción, pues en él se resumen los intereses de la burguesía comercial alicantina con la supresión de los derechos de arancel en el comercio exterior, de las aduanas interiores, del estanco de la sal y del tabaco y de los portazgos, pontazgos y barcajes y el establecimiento de una única contribución de aduanas para todo tipo de mercancías. Alguna de estas peticiones se concretarán en las disposiciones dictadas el 8 de octubre por la Junta para suprimir los portazgos y reducir en un 33% los derechos del arancel de importación a todos los artículos procedentes del extranjero y ultramar.

Al producirse en el plano nacional el enfrentamiento entre los poderes paralelos que representaban las Juntas Revolucionarias y el Gobierno Provisional, la moderación de la de Alicante volvía a dejarse sentir ya que fue de las primeras en autodisolverse, cediendo sus funciones en el ámbito local al Ayuntamiento provisional, cuya principal misión fue la organización de los Voluntarios de la Libertad, milicia cívica de componente fundamentalmente popular y dirigida por progresistas y republicanos.

Con la disolución de la Junta Revolucionaria, el Ayuntamiento designado por ella ocupó el poder local de forma interina hasta la constitución de la primera Corporación elegida democráticamente por los ciudadanos alicantinos. Para las elecciones municipales que se celebraron en diciembre de 1868, se crearán dos nuevos distritos: Carmen y San Antón, con lo que el término municipal quedó dividido en seis distritos, que incluyen también las partidas rurales. Por un escaso margen, el triunfo en los comicios fue para la candidatura republicana encabezada por Eleuterio Maisonnave que, al presentar un programa muy moderado en sus aspectos sociales, restó votos a la coalición monárquica. Los republicanos triunfaron en todos los distritos, excepto en el de Casa Consistoriales, que mostró una preferencia muy acusada hacia el voto monárquico y el sistema electoral de mayorías otorgó veinticinco concejalías a los republicanos frente a cinco para los monárquicos.

El 1 de enero tomaba posesión el primer Ayuntamiento republicano que presidía Maisonnave; se iniciaba así un período de seis años en que el Partido Republicano controlaría totalmente la administración municipal. La labor del primer Ayuntamien-

to de Alicante elegido por sufragio universal masculino discurrió por los mismos cauces que había marcado el Ayuntamiento provisional. Se completó la organización de la milicia cívica y se empezaron a plantear los principales puntos propuestos en el programa de gestión municipal elaborado por los republicanos, principalmente la reestructuración de la hacienda municipal a consecuencia de la abolición de los consumos y el acuciante problema del abastecimiento de agua potable a la ciudad. De la resolución de la primera dependía el resto de las propuestas republicanas y en concreto la ampliación de los servicios municipales a los ciudadanos de Alicante.

La constitución democrática de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya

Las elecciones legislativas y las Constituyentes de 1869

Para legitimizar la nueva situación política, el Gobierno Provisional, instituido tras el derrocamiento de la monarquía isabelina convocará elecciones constituyentes en enero de 1869. Dentro de la división electoral propuesta, la ciudad de Alicante quedó adscrita a la circunscripción de Alicante que, junto a la de Alcoy, cubría todo el espacio territorial y administrativo correspondiente a la provincia.

La campaña electoral fue muy animada. La propaganda se centró en la elección de la forma de gobierno y la opinión pública se polarizó entre monárquicos y republicanos, aunque el clima preelectoral en la ciudad fue menos tenso que en otros lugares de la geografía española pues los monárquicos apenas realizaron campaña y se limitaron a dar publicidad a un manifiesto programático defendiendo la monarquía constitucional y la candidatura de Espartero al trono español. Los republicanos, por su parte, desarrollaron una intensa campaña y capitalizaron a amplios sectores sociales que, gracias al sufragio universal, participaban por vez primera en la escena política.

Las elecciones, que se celebraron en perfecto orden, fueron favorables a los monárquicos que consiguieron en la circuns-

cripción de Alicante tres diputados –Francisco J. Carratalá, Luis Santonja y Tomás Capdepón– frente a dos republicanos –Eleuterio Maisonnave y Emigdio Santamaría–. En la práctica parlamentaria de las Constituyentes destacaría con claro protagonismo la figura de Eleuterio Maisonnave, que iniciaba así una carrera política que le llevaría a convertirse en el jefe local del Partido Republicano y en uno de los hombres de confianza de Emilio Castelar, el líder republicano conservador.

El período constituyente que culminó en la Constitución de 1869 fue vivido en Alicante en un clima de gran animación política. A escala local se reproducían los debates sobre el tema más polémico del momento: la forma de gobierno. La aparición de nuevos periódicos políticos al amparo de la libertad de prensa y sus animadas editoriales son indicadores claros de la efervescencia política y de la consolidación de los nuevos partidos que iban a hegemonizar la escena política local. Al decidirse las Cortes por la fórmula monárquica, los republicanos más moderados impusieron sus opiniones y se decidieron a acatar la nueva constitución, aunque otros sectores más radicales del partido expresaron su disconformidad preludivando su posterior activismo en el proceso de pactos federales y en la insurrección republicana de octubre de 1869.

Monárquicos y republicanos. Partidos y actitudes políticas en Alicante tras la revolución del 68

Del mismo modo que en el ámbito nacional, la escena política alicantina estará dominada durante todo el sexenio por dos grandes formaciones políticas que se asimilan a las dos fórmulas de organización política del liberalismo español puestas en práctica en esos años: la monarquía constitucional y la república. Tras la revolución, la dinámica política estará marcada por dos procesos: la constitución de la coalición liberal-monárquica y el nacimiento del Partido Republicano. Frente a ellos se sitúan otras fuerzas cuya influencia en la vida pública local en el transcurso de este período es prácticamente inexistente como los carlistas, isabelinos y canovistas.

La crisis económica y el desagaste del sistema político isabelino habían forzado la oposición de amplios sectores del progresismo y la Unión Liberal y su integración en el bloque revolucionario, conformando el ala más moderada del movimiento septembrino. Estos sectores, representados a nivel local por Tomás España, Francisco J. Carratalá, Tomás Capdepón, Manuel Escalambre, José y Federico Bas, integrarán la coalición monárquica y actuarán unidos desde octubre de 1868 defendiendo la monarquía constitucional frente al proyecto republicano.

En Alicante, la coalición monárquica estará liderada desde el principio por el Partido Progresista que, reorganizado durante los meses de octubre y noviembre, dió paso al Partido Monárquico Constitucional o Liberal, que se apoya socialmente en un sector de la gran burguesía comercial, financiera y de negocios alicantina. A mediados del año 1869 el nuevo partido monárquico estaba plenamente configurado y contaba como órgano de prensa con el que había sido el diario progresista *El Eco de Alicante*, al que se fusiona en abril de ese mismo año el diario *El Comercio* que, dirigido por Blas de Loma y Corradi, era portavoz de un influyente sector del comercio local vinculado políticamente a la Unión Liberal. En octubre de 1871 *El Eco de Alicante* dejará paso en la esfera de la prensa monárquica al diario *El Constitucional*, que abarcará todo el sexenio y que se convertirá en el portavoz del Partido Liberal de Sagasta en los primeros años de la Restauración. El nuevo periódico se mantendrá, como señalaba en su primer editorial, en una línea de defensa de la Constitución del 69 y de oposición al Partido Republicano e irá evolucionando a lo largo de estos años hacia posturas más conservadoras.

Tras el asesinato del general Prim el 30 de diciembre de 1870 y el advenimiento al trono español de Amadeo de Saboya, el Gobierno presidido por Serrano se apresura a convocar las primeras elecciones a Cortes ordinarias de la monarquía, que venían a ser como la ratificación plebiscitaria de la nueva dinastía. Las elecciones de marzo de 1871 presentan como novedad el hecho de ser convocadas bajo una nueva ley electoral —enero de 1871— que imponía el modelo de distritos uninominales. La ciudad y término de Alicante pasaba a constituir un distrito electoral que elegía a un único diputado, lo que fomentaba en opinión de

los republicanos los manejos caciquiles y fraudulentos. La convocatoria electoral coincidió con los preparativos del viaje de Amadeo I que visitaba la ciudad para recibir a su esposa, la reina María Victoria, que llegaba por el puerto alicantino procedente de Italia. Tal acontecimiento fue aprovechado por el Comité Monárquico-Liberal para hacer campaña en favor de la monarquía y los resultados no defraudaron sus esperanzas, ya que salió elegido por la capital el candidato monárquico Antonio del Rivero Cidraque, aunque la candidatura republicana quedó a escasa distancia.

Pero lo verdaderamente significativo en la escena política local es la aparición del Partido Republicano, a partir de la fusión a finales de octubre de 1868 del *Círculo de Artesanos* y la sociedad denominada *Amigos de la Libertad*. Con el triunfo de la revolución, las ideas republicanas se programaron rápidamente gracias a la labor que en ese sentido realizó el *Comité Electoral Republicano* y el 6 de diciembre de 1868 transcurría por las calles de la ciudad la primera manifestación republicana que, de acuerdo con las cifras facilitadas por los organizadores, llegó a congregarse entre siete y ocho mil manifestantes al grito de “¡Viva la República Federal!”.

La base de la organización del nuevo partido eran los clubs, que pronto se diseminaron por toda la ciudad. Como decía el diario *La Revolución* los clubs eran centros que reúnen a ciudadanos de toda clase y condición para discutir de los problemas políticos, económicos y sociales. Tenían evidentemente una finalidad propagandística y desarrollaron una intensa actividad de carácter cultural, en particular entre las clases populares, pues en sus locales se discutía de política, se organizaban conferencias y tertulias y, en ocasiones, clases de instrucción primaria. Además, los asistentes contaban con biblioteca, hemeroteca y gabinete de lectura.

El primero en constituirse fue el club *Republicano Federal* que, dirigido por Froilán Carvajal y José Marcili, pasó a llamarse más tarde de *Los Radicales*. A él siguieron otros como *El Federalista* del barrio del Carmen dirigido por Bartolomé Pons y *El Propagandista* que, presidido por Vicente López, estaba enclavado en el barrio de San Antón. De menor importancia y

actividad eran otros clubs republicanos como los denominados *Círculo Republicano*, *Club Marítimo Republicano Federal*, *La Propaganda Republicana*, y *Club Igualdad, Libertad y Fraternidad*. La mayoría de ellos estaban dirigidos por los líderes más representativos del republicanismo radical y del naciente obrerismo, convirtiéndose en los centros de reunión de los sectores más combativos del federalismo radical alicantino.

Muestra de la preocupación republicana por penetrar en el tejido social alicantino y movilizar a aquellos sectores tradicionalmente marginados de la vida política fue la creación del *Club Republicano Femenino* que, presidido por Rita Bataller, intentaba organizar políticamente a las cigarreras de la Fábrica de Tabacos, y del club juvenil. Este último, a cuyo frente se encontraba Juan Ramos, desarrolló una intensa movilización para solicitar el derecho a voto a los veinte años.

Completando la organización del Partido Republicano y en un nivel superior al de los clubs, encontramos al Comité local. El primero, que presidía Manuel Ausó Monzó, se constituyó en enero de 1870, ya que hasta ese momento el Comité Electoral Republicano, que pasará más tarde a ser el Comité Provincial, venía encargándose de las tareas de coordinación del partido en la localidad. La prensa es también un instrumento de organización y consolidación para los republicanos, pues a través de ella se canaliza su propaganda. A lo largo del sexenio se publicarán en Alicante varios periódicos, entre los que cabe destacar *La Revolución*, *El Derecho y el Deber*, *la República Española*, *El Municipio*, *El Nuevo Municipio* y *El Independiente*.

El crecimiento del partido en la ciudad fue espectacular; podemos hablar de una auténtica eclosión republicana, ya que en septiembre de 1870 la militancia republicana en Alicante rondaba los novecientos afiliados. La composición social de esa militancia nos indica que el Partido Republicano tuvo su soporte social en sectores de la mediana y pequeña burguesía local y de las clases populares —artesanos, jornaleros, obreros—, pero que también supo atraer a un sector de la alta burguesía comercial y de negocios cuyos representantes serán Román Bono, Juan Leach o la familia Maisonnave. Ellos serán precisamente los que

defienden las actitudes sociales y políticas más moderadas, que terminarán imponiéndose en el republicanismo alicantino.

Moderados y federales. La trayectoria política del republicanismo alicantino

El Partido Republicano en Alicante no es una fuerza política homogénea. A las claras diferencias sociales que existen entre los grupos y sectores que constituyen el soporte del republicanismo alicantino se superponen divergencias entre los proyectos políticos que patrocinan, por una parte, la burguesía que apoya al republicanismo más moderado y de corte unitario y, por otra, la pequeña burguesía que se inclina hacia una ideología federal, reformista e impregnada de grandes dosis de socialismo utópico. Estas diferencias están en el origen del proceso de división interna que afrontará el partido y que culminará en los albores de la Restauración con su fraccionamiento en varias organizaciones políticas. La trayectoria del republicanismo en Alicante es la muestra de este proceso que tendrá sus hitos más destacados en la insurrección de octubre de 1869 y en la Declaración de la Prensa del año 1870.

Entre los meses de mayo a julio de 1869 los federales de provincia tomarán la iniciativa de la organización del partido, desplazando a la dirección central y parlamentaria y firmando los pactos federales por toda la geografía española. Alicante quedará integrada en el Pacto Federal de Tortosa, que fue suscrito por representantes de las regiones que habían constituido la antigua Corona de Aragón. Poco después, el Comité provincial de Alicante hizo suyos los acuerdos de Tortosa en un manifiesto que firmaban también los representantes de la capital: Francisco Valero, Antonio Galdó, Rafael Nogueras, Pedro Bauzá, Juan Más Dols y José Rizo.

Los diputados de las provincias integradas en el Pacto de Tortosa que habían quedado al margen del proceso se apresuraron a suscribir el Pacto federal, aunque hicieron público un escrito en el que incitaban a conservar la calma y el orden. Entre los firmantes figuraba Eleuterio Maisonnave, cuya postura contraria

a las bases expresadas en el pacto y especialmente al artículo cuarto, que apelaba al derecho de insurrección, comenzaba a ser conocida.

La frustración que en las filas republicanas producía la hegemonía monárquica y la aprobación de una Constitución que, si bien era la más amplia en su exposición de derechos y libertades, consagraba la monarquía como forma de gobierno fue generando un clima favorable a la insurrección armada. Esta se producirá en el mes de octubre y en Alicante la cabeza visible será Froilán Carvajal, director de *La Revolución*. Pero la insurrección federal, aunque apoyada por las bases populares del partido y los clubs más radicales, fracasó en la ciudad por la negativa del sector republicano más moderado a participar en ella. En su *Historia del partido republicano* Rodríguez Solís nos relata los infructuosos intentos de Carvajal por conseguir que se sumasen a la sublevación los dirigentes republicanos locales y la oposición de Eleuterio Maisonnave, convertido ya en jefe indiscutible de esa fracción moderada que condenaba las tesis federales y radicales de *La Revolución* a través del diario *El Derecho y el Deber*. Maisonnave no sólo se opuso a la insurrección, sino que como Alcalde de la ciudad ofreció al Gobernador garantías de que los Voluntarios de la Libertad actuarían en defensa del orden, preludiviendo así un talante conservador que expresaría más nítidamente con ocasión de la Declaración de la Prensa.

La represión que siguió al fracaso de la insurrección y el fusilamiento de Froilán Carvajal en Ibi produjeron un momentáneo desconcierto en las filas republicanas, pero inmediatamente la atención se centró en la Asamblea Federal que se celebraría en el mes de marzo de 1870. El reconocimiento del federalismo como doctrina oficial del partido que quedó expresado en la resolución primera de la Asamblea puso al descubierto la división del partido. en este marco general, varios periódicos republicanos realizaban una declaración antifederalista y de condena del pensamiento "socializante" de Francisco Pi y Margall. Entre los promotres de esta iniciativa encontramos al diputado Eleuterio Maisonnave, que en una carta a sus electores señalaba: "Cuando leía la Declaración de la prensa ví en ella escrito mi pensamiento". Su actitud fue causa de disensiones en el seno de

la organización alicantina y fue criticada duramente por los sectores federalistas representados por el diario *La Revolución*, mientras el Comité local se manifestaba en favor de las tesis moderadas y unitaristas tras la explicación en el Círculo Republicano del diputado alicantino, que se justificó en los siguientes términos: “hoy nuestro partido se encuentra dividido en dos bandos, en uno el verdadero partido republicano, amigo de la integridad nacional, y en otro, los republicanos confederados, separatistas, socialistas”.

La división del partido fue agravándose en los meses siguientes y se tradujo en un eclipsamiento momentáneo de la organización republicana, sólo superado a partir de la aparición de un nuevo órgano de prensa titulado *El Municipio*. La reorganización del partido se realiza a lo largo del año 1872 y será controlada por la fracción moderada dirigida por Maisonnave. Los núcleos federales más radicales se verán marginados de la dirección local del partido, aunque seguirán teniendo una cierta influencia en los clubs y en la militancia de base. El enfrentamiento entre ambas corrientes se verá alentado por la declaración de *benevolencia* al Gobierno radical de Ruiz Zorrilla que realizan los sectores republicanos más moderados, actitud que es rechazada por los federales llamados *intransigentes*. A medida que se aproxima el fin de la monarquía y ante la posibilidad de una república, el Partido Republicano de Alicante inicia una campaña de propaganda centrada en la unidad del partido. Emilio Castelar en septiembre de 1872 aludía a esta cuestión en un discurso pronunciado el día 18 en el Teatro de Alicante: “dividirse ahora, fraccionarse ahora en la oposición, en el combate, eso no es más que la demencia, eso es irremediable suicidio”.

Los republicanos y la gestión local. El problema del déficit municipal

En todas las elecciones municipales celebradas a lo largo del sexenio democrático van a resultar vencedores los republicanos, que se convertirán, por tanto, en la fuerza hegemónica local y en el partido que controla el Ayuntamiento de la ciudad, con la

excepción del breve período que comprende los tres últimos meses de 1869. En el transcurso de la insurrección republicana de octubre de ese año, las autoridades militares tomaron varias medidas para limitar la influencia republicana en la capital como el cierre de los club, la disolución de los Voluntarios de la Libertad y del Ayuntamiento de mayoría republicana. El 8 de octubre fuerzas de carabineros penetraban en la Casa Consistorial y el Cabildo dimitía, siendo reemplazado por una Corporación monárquica presidida por el constitucional Miguel Colomer.

En los primeros días de enero de 1870 se convocaron elecciones que nuevamente dan el triunfo al Partido Republicano y, tras los frustados intentos de la Diputación para anular los resultados, se forma un Ayuntamiento republicano del que sería elegido Alcalde otra vez E. Maisonnave. Las siguientes elecciones municipales tendrán lugar en diciembre de 1871 y los republicanos vuelven a obtener mayoría frente a sus oponentes monárquicos, aunque la diferencia entre ambas opciones es más corta que en ocasiones anteriores. En los dos años siguientes se realizarán frecuentes cambios en la titularidad de la Alcaldía, sucediéndose al frente de la misma Francisco García López, Eduardo Carratalá Cernuda, Eleuterio Maisonnave, Anacleto Rodríguez, Francisco Heredia y finalmente Juan Leach, que presidirá el Ayuntamiento que con carácter de excepción se formó en 1873 ante la posibilidad de un ataque de las fragatas cantonales.

Cuando los republicanos acceden como partido mayoritario al Ayuntamiento de Alicante esbozaron un programa de gestión que, básicamente, se centraba en dos aspectos diferenciados: la eficacia y corrección en la práctica de la propia administración municipal y los fines que debía cumplir esa administración, es decir, la resolución de los problemas y demandas de la ciudadanía. Se trata, en definitiva, de un planteamiento moderno e inseparable del papel de defensor de los intereses y reivindicaciones populares que el republicanismo se había atribuido. Los Ayuntamientos republicanos tratarán de ampliar y mejorar los servicios públicos —beneficiencia, alumbrado, bomberos, policía urbana, abastecimiento de agua potable— y de aportar soluciones a espinosas cuestiones como la abolición de los consumos o la redención de quintos. Especial esfuerzo dedicaron a la cuestión del

abastecimiento de agua potable, que era uno de los problemas más acuciantes de la población por la merma de caudal de los manantiales públicos de Casa Blanca y Valladolid. Entre las medidas que se tomaron debemos destacar el acuerdo con la sociedad *La Regeneradora* para la compra de agua a precios asequibles por la municipalidad y el apoyo institucional a la inversión de la burguesía local en sociedades de exploración de aguas como *El Canal de Alicante*.

Pero el programa y la gestión municipal republicana se verán limitados por los problemas hacendísticos y el déficit presupuestario que se arrastraba desde la reforma monetaria de Mon en 1845, agravados con la abolición de los consumos tras la revolución de 1868. El constante incremento de la deuda municipal en los años siguientes pone de manifiesto el fracaso de las sucesivas Corporaciones republicanas por encontrar sustitutos al impuesto de consumos. El cobro del impuesto personal o de “capitación” no fue satisfactorio por las reticencias de los contribuyentes a abonarlo y las otras soluciones que se barajaron —reparto vecinal, derecho módico sobre el comercio de exportación e importación y un proyecto de emisión de billetes para la regulación de la deuda— no llegaron a aplicarse con efectividad. La penuria de la economía local determinó en junio de 1872 la reimplantación del impuesto de consumos. La oposición popular y de parte del partido a esta resolución colocó en una difícil posición a los ediles republicanos, que tuvieron que reconsiderar su decisión. Aunque finalmente los consumos se reimplantaron, el déficit no pudo ser corregido y siguió agravándose en los años siguientes, hasta que en octubre de 1874 el Cabildo presidido por Francisco Mingot presentó su dimisión por no contar con recursos suficientes para poder desarrollar su gestión.

Republicanism y clase obrera. Los orígenes del asociacionismo obrero

En la historia del movimiento obrero español la revolución de 1868 es un momento clave porque el reconocimiento de las libertades de reunión y asociación permite la organización del

primer asociacionismo obrero. En ese contexto, el primer obrerismo es indesligable del republicanismo, que no olvidó la cuestión social ya que el grueso de su militancia se nutría fundamentalmente de sectores populares, artesanos y obreros. La primera vinculación entre los núcleos artesanales y obreros y las sociedades obreras —en concreto, la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barcelona— se realizó a través del diario federal *La Revolución*, que dió amplia cobertura a las noticias y circulares relativas a esa sociedad. Por otra parte, los clubs republicanos jugaron un papel importante en el desarrollo del asociacionismo y se interesaron por la educación popular y obrera, como ya había hecho anteriormente el *Círculo de Artesanos*. Para el republicanismo, la emancipación social del proletariado sólo podría obtenerse a partir de su emancipación política y de su educación bajo la tutela del partido.

En abril de 1870 un grupo de militantes republicanos próximos a las posiciones federales protagonizaron la primera iniciativa de fundación de una sociedad cooperativa en Alicante. La “Sociedad Cooperativa y de Protección al Arte”, cuyo objetivo, como reconocía su promotor Bartolomé Pons, era fundamentalmente la protección de sus asociados en casos de enfermedad o desempleo y establecer una tienda de comestibles donde se pudiese encontrar “un beneficio en los precios y calidad de los géneros”, se insertaba en la línea de pensamiento social republicano que consideraba el asociacionismo mutualista y cooperativista como uno de los principales instrumentos para la emancipación obrera. Dos meses después la sociedad contaba ya con 198 afiliados que representaban las 730 acciones emitidas hasta ese momento. La iniciativa tuvo, pues, una buena acogida y sociológicamente interesó a sectores de la pequeña burguesía local, artesanos y jornaleros, aunque también participaron en ella algunos representantes de la burguesía local de adscripción republicana como Juan Mas Dols, presidente del Consejo de Administración y Amando Alberola, vicedirector. Esta fue la primera realización práctica del reformismo republicano y la primera experiencia cooperativista de la que tenemos noticia en Alicante.

Junto a esta iniciativa republicana, comienza a germinar el asociacionismo obrero de signo internacionalista, si bien la debi-

lidad industrial y la pervivencia de las formas artesanales de producción retrasaron este proceso y reforzaron la vinculación del movimiento obrero al republicanismo. Por la correspondencia del Consejo Federal de la Región Española de la Internacional conocemos la existencia de un Consejo local internacionalista, pero su actividad en la ciudad fue prácticamente nula y no puede compararse al desarrollo alcanzado por esta asociación en la vecina ciudad de Alcoy.

Constitucionales y radicales. La división del Partido Monárquico Liberal y la crisis de la monarquía amadeísta

La desaparición de Prim, líder indiscutible de los grupos monárquicos, desató una profunda crisis en el seno del progresismo, partido aglutinador de la coalición monárquica-liberal. A mediados del año 1871, el Partido Progresista y la coalición se escinden en dos fracciones, dirigidas cada una de ellas por los dos aspirantes a la sucesión en el liderazgo monárquico: Sagasta y Ruiz Zorrilla.

Los constitucionales sagastinos, tendencia mayoritaria en el progresismo alicantino, inician desde esas fechas un proceso de reorganización centrado en la creación del *Círculo Progresista*, que dirigirán Rafael Terol y Luis Campos Domenech, y la aparición del diario *El Constitucional*, que presenta en el plano ideológico una evolución hacia posturas más conservadoras y de aproximación a los unionistas, sintomáticas del desplazamiento conservadurista de un amplio sector de los revolucionarios del 68. Por su parte, los sectores liderados por Ruiz Zorrilla se configuran como el ala izquierda del progresismo dando origen al nuevo Partido Radical que en Alicante se denominará la *Tertulia del Progreso Democrático*, cuya comisión directora preside Miguel Colomer. Contarán con un nuevo órgano de prensa titulado *La Tertulia*, que en su editorial del 6 de febrero de 1872 expresaba su deseo de llevar a la práctica en su totalidad el proyecto revolucionario del 68: “un partido que represente ese espíritu saludable de reforma, que aspire a realizarla como continuidad lógica del desenvolvimiento revolucionario”.

Sagasta es el primero en asumir el Gobierno de la nación y con el objeto de obtener una amplia mayoría en las Cortes su primera medida es la convocatoria de nuevas elecciones. Los comicios tendrán lugar en abril de 1872 y en el distrito de Alicante la victoria será para el candidato sagastino José Bas Moró por sólo 287 votos de diferencia respecto a su oponente, el republicano Eleuterio Maisonnave, que era apoyado por una coalición integrada por republicanos y radicales.

Poco meses después, la crisis del Gabinete Sagasta y la separación de los unionistas provoca la desintegración del proyecto de monarquía democrática que habían patrocinado los sectores más moderados del ámbito septembrino, pues el acceso de los radicales de Ruiz Zorrilla y la convocatoria de las terceras elecciones a Cortes de la monarquía no podrán evitar la caída del régimen.

En estos comicios generales, que se celebraron en agosto de 1872, la abstención de los constitucionales y el apoyo radical favorecieron al republicano Maisonnave, que obtuvo el escaño correspondiente a la capital. El programa "reformista" del Gobierno radical fue respaldado por los republicanos *benévolos*, pero la falta de apoyos políticos amplios, el incumplimiento de ciertas promesas como la abolición de las quintas y los problemas financieros desintegraron la alternativa monárquica. Ante la eventualidad de una república, los republicanos alicantinos adoptaban una actitud atemperada y desde sus periódicos hacían continuos llamamientos a la unidad interna del partido y hablaban de la República como el imperio del orden y la legalidad.

La experiencia republicana de 1873

La proclamación de la República

A finales de 1872, el panorama que presentaba la nación española no podía ser más caótico. A los graves problemas de la hacienda pública, la guerra carlista y la insurrección independentista cubana se suma, como un factor más de desestabilización, el enfrentamiento en el bloque monárquico entre radicales y sagas-

tinios. La confluencia de todos estos factores explica la crisis y derrumbe del proceso liberal moderado que había cristalizado en la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya. Con la abdicación del rey, ante los revolucionarios del 68 sólo se perfilaba como factible la alternativa republicana. Por ello, el 11 de febrero de 1873 era proclamada la República por el Congreso y el Senado reunidos en Asamblea Nacional.

El advenimiento del nuevo régimen se verificó en la ciudad en un clima de total normalidad. No se produjeron manifestaciones o algaradas ni se constituyó una Junta revolucionaria como en otros lugares de la provincia o del territorio nacional. El único aspecto reseñable fue el relevo de cargos en el Ayuntamiento y la Diputación, en donde se sustituyeron algunos concejales y diputados monárquicos, que en la mayoría de los casos presentaron ellos mismos la dimisión como expresión de su disconformidad con la proclamación de la República. Así el control republicano sobre las instituciones locales quedaba suficientemente garantizado.

La tranquilidad que presidió el acontecer político de aquellos días respondía en gran medida a las atemperadas posiciones de que hacían gala los dirigentes republicanos en Alicante y que tendrán su reflejo en editoriales como éste, publicado por el diario *El Municipio* el 16 de septiembre de 1873: “La República es el orden, la República es la paz, la República es la justicia (...) la República garantiza los derechos a todos”. Con estas actitudes moderadas se trata de dar garantías a los sectores sociales y políticos monárquicos y a ello va a responder perfectamente el sector monárquico sagastino, que a través de *El Constitucional* dará a conocer su aceptación de la República, siempre que ésta se apoye en la burguesía conservadora y sea controlada por el sector más moderado del Partido Republicano.

En Alicante, este sector que lidera Maisonnave es hegemónico dentro de la formación republicana, que en estas fechas iniciará un proceso de reorganización con la creación de cinco subcomités de distrito: San Francisco, Teatro, San Antón, Carmen y Centro-Santa María. Esta nueva figura pretende suplir en el organigrama del partido a los antiguos clubs y responde al

deseo del republicanismo más moderado de controlar a los grupos más radicales que tienen su punto de encuentro en los clubs.

La colaboración con los radicales y la creación del Batallón de los Voluntarios de la República

La colaboración con los radicales se hizo necesaria al nacer la República de una Asamblea de mayoría radical y se materializó a nivel estatal en un Gobierno de coalición republicana-radical que se mantuvo hasta el fallido intento de golpe de Estado radical del 23 de abril. En Alicante, los radicales, a iniciativa de Rafael Sevilla y Miguel Colomer, decidieron disolver su partido y pasar en bloque al Partido Republicano. Su diario dejará de publicarse y su agrupación, la *Tertulia del Progreso-Democrático*, se convertirá en un nuevo círculo republicano. La decisión de los radicales fue bien acogida por los republicanos, que criticaron las maniobras de desprestigio que protagonizaban los liberales sagastinos al augurar fricciones entre “viejos” y “nuevos” republicanos.

Con la desaparición del Partido Radical se simplifica el espectro político local, configurándose dos grandes formaciones políticas: el Partido Constitucional, que intenta atraer a los sectores más conservadores de la burguesía alicantina, y el Partido Republicano que, dirigido por la fracción más moderada, presenta un talante reformista pero alejado del federalismo radical intransigente. Esta actitud atemperada coincidía con la línea política de Castelar, que preconizaba la configuración de la República como un sistema abierto, capaz de integrar a todos los partidos, incluso a los constitucionales de Sagasta.

Junto a la reorganización del partido y el apoyo radical, otro mecanismo de consolidación de la República fue la reorganización de la Milicia nacional. Los republicanos habían formado parte de este cuerpo creado por la burguesía en cada coyuntura revolucionaria desde los inicios del proceso de revolución liberal burguesa. A finales de 1868 se constituyó el Batallón de los Voluntarios de la Libertad dirigido por Eleuterio Maisonnave, lo que confirma la destacada presencia republicana en la milicia.

El 18 de febrero de 1873, el Alcalde de Alicante convocaba el alistamiento del cuerpo denominado Voluntarios de la República con el objetivo de contar con una fuerza armada organizada y dispuesta a defender la República, aunque en la convocatoria se aludía a su papel en la lucha contra las partidas carlistas que en ocasiones protagonizaban escaramuzas muy cerca de la capital. El Batallón estaba formado por una cifra próxima a los 900 voluntarios, que se distribuían en nueve compañías que, a su vez, tenían asignado como radio de acción un distrito municipal, y tendrá una composición social mayoritariamente popular; artesanos, jornaleros, carpinteros y albañiles son los grupos más numerosos, aunque existe también una nutrida representación de comerciantes. Las compañías se estructuraban militarmente y la oficialidad de cada una de ellas se componía de un capitán, dos tenientes y dos subtenientes. Al mando del Batallón se encontraban dos comandantes y dos ayudantes; cargos que tras las elecciones celebradas a mediados de marzo recayeron en Gaspar Beltrán, Juan Más Dols, Antonio del Espino y Eduardo Oarricheña, respectivamente.

Las funciones que se asignaron a la Milicia republicana se centraron en la labor de policía urbana y de prevención del orden público. Se encargaban de la detención de alborotadores y custodia de edificios públicos como el Hospital de San Juan de Dios, el Ayuntamiento y el Teatro Principal. Este último contaba a finales del mes de agosto de 1873 con un retén de vigilancia de la 6.^a compañía que, mandado por Antonio Cerdá, era conocido como la "Guardia del Principal".

La milicia republicana dependía directamente del Alcalde de la ciudad y las dificultades más graves por las que atravesó el cuerpo fueron de orden financiero. La deficitaria situación económica del Ayuntamiento dificultó la organización y funcionamiento del Batallón y el cobro de los Voluntarios por los servicios que prestaban a la comunidad. Para hacer frente a estos gastos, la Corporación tuvo que recurrir a la suscripción particular, a la organización de corridas de toros, y a peticiones de fondos al Ministerio de la Gobernación.

El retraimiento monárquico-liberal y las elecciones a Cortes Constituyentes

Con la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes se inicia una nueva etapa en la latente conflictividad entre republicanos y constitucionales sagastinos. Estos últimos, conscientes de la fragilidad de la República y del peligro que suponían el movimiento obrero influido por las corrientes internacionalistas y la pequeña burguesía radical defensora del federalismo intransigente, habían condicionado su apoyo al nuevo régimen a que los republicanos moderados –los que ellos denominaban “la parte sensata del partido”– garantizaran el orden y la estabilidad política. Tras la ruptura a nivel estatal de la coalición republicana-radical, los sagastinos pasarán de esa primera actitud de resignada aceptación a una firme oposición, que se materializará en la asunción del retraimiento en las elecciones, lo que suponía negar legitimidad a la República.

En el período pre-electoral, la prensa monárquica-liberal intensificará su propaganda, proyectando una imagen “catastrofista” de la situación del país. El problema del orden público y la cuestión antillana centran toda su campaña. Las reformas políticas y sociales en las colonias españolas de ultramar –autonomía dentro de un proyecto de Estado federal y abolición de la esclavitud– parecían preocupar considerablemente a la burguesía local más conservadora y esa preocupación había cristalizado en la constitución en febrero de 1873 del *Centro Hispano-Ultramarino* de Alicante que, en defensa del status colonial y de la integridad del territorio nacional, agrupaba a sectores muy próximos políticamente al Partido Constitucional. En torno a este centro se articulará la oposición a la República y algunos de sus miembros que, como José G. Amérigo, Leopoldo Laussat o Manuel Escalambre, comienzan a inclinarse hacia la solución alfonsina, serán más tarde destacados protagonistas de la Restauración, bien en el conservadurismo canovista, bien en el liberalismo sagastino.

Las elecciones se celebraron a mediados del mes de mayo y el triunfo fue para los republicanos por un amplio margen. En el distrito de Alicante, Eleuterio Maisonnave obtuvo 5.501 votos frente a los 3 conseguidos por el federalista intransigente José

Marcili Oliver y 1 voto simbólico a Garibaldi. Los resultados reflejan el control absoluto que el sector moderado del Partido republicano ejerce en la capital y el carisma de su líder Maisonnave, aunque estas valoraciones deben de matizarse pues la abstención se aproximó al 50% del censo electoral. Por mucho que se intentasen justificar las tesis abstencionistas aludiendo a la falta de garantías y transparencia del proceso electoral, el retraimiento protagonizado por los constitucionales suponía la ruptura del precario consenso que hizo posible la República y el paso a una activa oposición que meses después desembocaría en la República conservadora de Serrano y finalmente en la Restauración.

Esta actitud de los constitucionales traerá consigo una polarización de las posturas enfrentadas en el seno del republicanismo alicantino. Los elementos federales cada vez más diezmados serán capaces, no obstante, de reunir más de setecientas firmas en una exposición que solicitaba del Gobierno la proclamación inmediata de la “República democrática-federal con todas sus consecuencias, con toda su pureza” y que constituye la expresión clara de las posiciones *intransigentes*, mientras el sector republicano moderado camina aceleradamente por la senda del más acentuado conservadurismo, como pone de relieve la abstención de Maisonnave en la votación de la República federal en las Cortes.

El impacto de la insurrección internacionalista de Alcoy y el movimiento cantonalista en Alicante. Los últimos momentos de la República

En el transcurso de la breve experiencia republicana, la conflictividad social y política alcanzó su más alta cota en los meses de verano con la revolución internacionalista alcoyana y el estallido de la insurrección cantonalista en distintos puntos del país. En los primeros días de julio, la convocatoria de una huelga general se convirtió en el comienzo de una revuelta obrera en la ciudad de Alcoy, que era la sede de la Comisión Federal de la Sección Española de la Internacional proletaria. La importancia

de este suceso radica en su contenido social, al ser la primera confrontación directa entre burguesía y proletariado, y en que puso al descubierto las contradicciones de la República.

La insurrección alcoyana, que lleva a los obreros a enfrentarse no sólo con los empresarios que los mantenían en condiciones de sobreexplotación sino también con el Ayuntamiento presidido por el republicano moderado Agustín Albors, pone de manifiesto la ruptura entre el republicanismo y un sector del proletariado y a la vez acentúa la inclinación conservadora de una fracción republicana, como reflejan las declaraciones de condena que partirán del Ayuntamiento y de la Diputación provincial, que enviaron a la vecina ciudad destacamentos armados de Voluntarios para sofocar la revuelta. De particular importancia será la intervención de Maisonnave que, como ministro de Estado, acusó en las Cortes de debilidad al Gobierno del que formaba parte, provocando una crisis ministerial que se saldaría finalmente con la marginación de Pi y Margall y la formación de un nuevo Gabinete de orientación más conservadora presidido por Salmerón.

Coincidiendo con estos sucesos, los federales intransigentes, molestos por el procedimiento y lentitud con que se estaba organizando la constitución federal del Estado español, preparan una insurrección cantonalista que tendrá su epicentro en Cartagena. En Alicante los federales intransigentes, partidarios de la organización federal de cantones independientes, eran minoritarios, aunque tenían alguna presencia en la militancia de base del partido y en algunas compañías de la milicia nacional. La única posibilidad de que la ciudad se uniese al movimiento cantonal radicaba en que los republicanos procantonalistas lograsen apoyo del exterior, lo que facilitaba la proximidad del cantón cartagenero. A finales del mes de julio se produce la llegada de la fragata cantonal "Victoria" mandada por el diputado *intransigente* Antonio Gálvez y, ante la retirada de los Gobernadores Civil y Militar y de las fuerzas militares destacadas en la ciudad, el Alcalde, Manuel Santandreu; los comandantes del Batallón de Voluntarios de la República, Juan Mas Dols y Gaspar Beltrán; y los capitanes de las compañías de la milicia deciden constituirse en Junta de Salud Pública con el objetivo de garantizar el orden y cubrir el

vacio de poder. A instancias de Gálvez, la Junta envió a Maisonnave, ministro de la Gobernación en el Gabinete Salmerón, un telegrama comunicándole la proclamación del cantón de Alicante.

Tras la salida de las fuerzas cantonales, los capitanes de la milicia —la mayor parte afines a la línea moderada del partido— constituyen una nueva Junta que hace público un manifiesto exhortando al pueblo alicantino a restablecer la calma y volver al trabajo, pero los Voluntarios se encontraban divididos ante la cuestión cantonal y los republicanos moderados comenzaban a temer su componente popular y proletario y la atracción que sobre estos sectores ejercía la ideología federal. Maisonnave, a pesar de las garantías que en las Cortes había dado al respecto, era consciente de estos problemas y por ello envió a un delegado con instrucciones concretas para depurar de la milicia a aquellos elementos sospechosos de simpatías cantonalistas. El 2 de agosto de 1873 el delegado del Gobierno, Lorenzo Abizanda, dictaba un bando por el que se reorganizaba el Batallón de Voluntarios de la República, separando a alguno de sus miembros y disolviendo algunas compañías. Como medida complementaria, se incrementaban los destacamentos militares y de la Guardia Civil en la ciudad.

A finales de septiembre tendrá lugar la segunda parte de los sucesos cantonales en Alicante. En esta ocasión, la llegada de los buques cantonales se considera una agresión exterior y los insurrectos no contarán con ningún apoyo en el interior de la ciudad. En previsión de un posible ataque cantonal, el propio Maisonnave se encargó de preparar la defensa militar, fortificando la ciudad y distribuyendo los efectivos militares desplazados desde Villena y el regimiento de Africa. En el plano político, designó un Ayuntamiento provisional presidido por su amigo Juan Leach, mantuvo reuniones con las fuerzas sociales y políticas locales y ordenó la prisión preventiva en el Castillo de Santa Bárbara de José Marcili, el más destacado *intransigente* y cabecilla local de la conspiración cantonal.

Confirmada la aproximación de los buques cantonales y su intención de bombardear la ciudad si no se satisfacían sus exigencias de rendición y pago de un tributo, el pánico se extendió

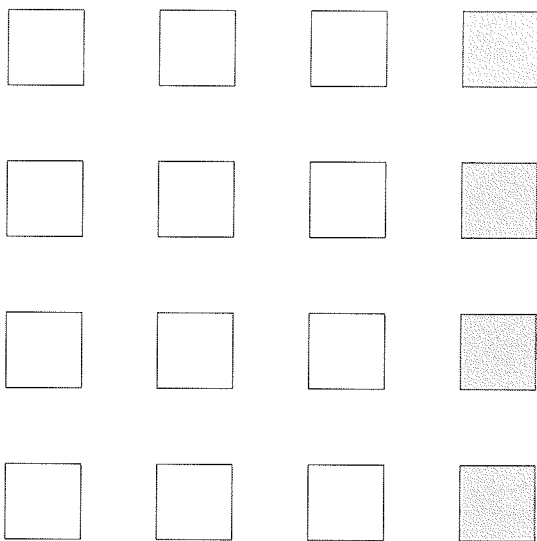
por la población. Familias enteras salían de la ciudad y se refugiaban en los pueblos colindantes, mientras los comerciantes, que veían peligrar sus mercancías, exigían de las autoridades locales que negociasen con los insurrectos. Maisonnave y el Ayuntamiento eran partidarios también de una soución negociada, pero el general Martínez Campos, encargado de la defensa de la plaza, se opuso y presentó su dimisión, siendo sustituido por el general Ceballos. Tras el fracaso de las conversaciones, en las que mediaron los cónsules extranjeros, el 27 de septiembre se producía el bombardeo de Alicante ante la pasividad de varios barcos de guerra pertenecientes a las escuadras francesa, alemana y británica, que habían recibido órdenes de sus respectivos Gobiernos de mantenerse neutrales. En octubre se cerraba este episodio de la historia de Alicante con la organización de una suscripción popular a beneficio de las víctimas del bombardeo que encabezó el propio Maisonnave con un donativo de 1.000 reales y la aparición de un decreto firmado por Castelar en el que felicitaba al pueblo alicantino por su heroica resistencia.

En los últimos meses de la República federal, el deterioro del orden público y la agitación social provocarán un ambiente proclive a una reacción conservadora que conlleva un claro protagonismo de los sectores más reaccionarios de la burguesía alicantina en la vida política local. Con la insurrección antillana, la guerra carlista, los sucesos de Alcoy y el cantonalismo, estos sectores de la burguesía local ven cuestionados los principios fundamentales de autoridad, integridad nacional y propiedad; se sienten molestos por las dificultades que sufre el tráfico comercial y portuario a consecuencia de la libre actuación de partidas carlistas y buques cantonales y también por la creciente presión fiscal de la administración central y local. Aunque apoyarán al Gabinete “enérgico” de Castelar frente a los sectores más izquierdistas del republicanismo, en su horizonte la restauración borbónica comienza a esbozarse como la salida más tranquilizadora para la salvaguarda de sus intereses. En este clima de permanente inestabilidad e inseguridad el movimiento alfonsino encontrará un campo de cultivo abonado para su propagación.

Tampoco el Partido Republicano será ajeno a esa reacción conservadora que marca el final del sexenio democrático. Su

manifestación más patente en el plano nacional será la formación del Gobierno de Emilio Castelar en el que Eleuterio Maisonnave desempeña el cargo de ministro de la Gobernación. Su actuación ministerial ejemplifica el giro conservador de ciertos sectores republicanos, pues él será el encargado de dirigir con inflexibilidad la represión de cantonalistas e internacionalistas y de reorganizar a los Voluntarios de la República restableciendo la Ordenanza de 1822, lo que constituirá un paso importante para la abolición definitiva de la Milicia nacional. En Alicante también se puede percibir con claridad el deslizamiento republicano hacia posturas más conservadoras en la aparición de dos nuevos periódicos: *El Nuevo Municipio*, que viene a sustituir a *El Municipio*, y *El Independiente*, que representa a los antiguos radicales convertidos ahora al republicanismo.

El 2 de enero de 1874 se reunieron las Cortes con la misión de ratificar su confianza en la gestión de Castelar, que desde mediados del mes de septiembre venía gobernando por decreto para evitar la oposición de los sectores más radicales de su partido. Como era previsible, Castelar fue derrotado y el general Pavía ocupó militarmente el Congreso con el beneplácito de aquellos sectores que eran partidarios de una salida de fuerza antes de que se produjera un desplazamiento del poder hacia la izquierda republicana. Con el golpe de Estado de Pavía se iniciaba un período de transición que bajo la presidencia de Serrano y la cobertura de unas instituciones nominalmente republicanas preparaba el advenimiento de la Restauración. Del mismo modo, en el plano local se verifica el relevo en las instituciones políticas. El último Ayuntamiento republicano presidido por Juan Leach es disuelto por el Gobernador Civil, formándose otro nuevo de carácter interino, que cederá finalmente el poder a una Corporación monárquica en la que figuran destacados constitucionales como Francisco Mingot, Carlos Chorro, Manuel Escalambre o José Verano. El tránsito a la restauración borbónica se había iniciado.



LA ÉPOCA DE LA RESTAURACIÓN

ROSA ANA GUTIÉRREZ LLORET
Universidad de Alicante

El advenimiento de la Monarquía Alfonsina

E

L período de la historia contemporánea española que abarca el régimen nacido del golpe de Estado del general Pavía —la “República que no se atrevía a confesar su nombre”, como acertadamente la ha llamado Varela Ortega— no fue más que un compás de espera en el que la conspiración alfonsina cobró fuerza mientras que, para gran parte de la burguesía española —incluso amplios sectores de la que había protagonizado la revolución del 68—, la Restauración borbónica comenzaba a ser la solución factible y de “orden” frente al caos republicano. Aunque Cánovas del Castillo, artífice de la Restauración, era partidario de crear un estado de opinión favorable al regreso de la monarquía, el general Martínez Campos se le adelantó, pronunciándose en Sagunto por el príncipe Alfonso el 29 de diciembre de 1874.

El hecho restaurador no sorprendió excesivamente a la opinión pública alicantina, pues desde el otoño los observadores políticos de la prensa local lo consideraban inminente. En un primer momento las autoridades alicantinas rechazaron el pronunciamiento pero, una vez superado el desconcierto inicial y al conocerse la noticia de que el movimiento había triunfado, se produce la renuncia del Gobernador Civil, Enrique Fernández, ante el brigadier García Tomás, que asume el poder civil y militar. La nueva situación provocará diversas reacciones en las principales formaciones políticas de la ciudad pues, mientras los republicanos la rechazaron aunque no opusieron ninguna resistencia efectiva dada la acusada desmovilización popular, los constitucionales sagastinos la aceptaron de buen grado al confirmarse las intenciones conciliadoras del Ministerio-Regencia presidido por Cánovas.

Días antes del golpe militar, los sagastinos alicantinos habían expresado en *El Constitucional* sus temores de que la Restauración alfonsina significase el retroceso a las pautas políticas de la era isabelina, pero ellos mismos venían apoyando desde hacía tiempo una reconducción conservadora de la situación

política. Ahora aceptarán la monarquía alfonsina como la única garantía de las tan deseadas estabilidad política y pacificación del país y a este respecto es sintomático que poco después un antiguo revolucionario del 68, José Pastor de la Roca, celebre el espíritu de reconciliación del nuevo reinado: “Sea, pues, Alfonso XII Rey de todos los españoles, accesibles por su parte a la obra de reconstrucción política, dentro de la concordia, de la prudencia y del orden”. La aceptación de la restauración por los constitucionales de Sagasta era indispensable para llevar a la práctica el sistema político canovista pues debían ser el núcleo embrionario del nuevo Partido Liberal que constituirá la alternativa al Partido Conservador de Cánovas. La integración de estos grupos septembrinos en el sistema daba una imagen de continuidad que legitimaba la Restauración y que contribuía a borrar su origen golpista. Sin embargo, los constitucionales deberán sacrificar parte de su liberalismo, asumiendo plenamente la Constitución de 1876 y los fundamentos jurídicos del sistema restauracionista.

El sistema político de la Restauración

El sistema político de la Restauración se basaba en un modelo bipartidista que, como no correspondía a la realidad social y política del país, tuvo que construirse a partir de una desnaturalización sistemática del sufragio y del proceso electoral. La burguesía conservadora que controla los resortes del poder organizaba un sistema que defendiera sus intereses oligárquicos y que alejase el peligro del protagonismo popular en la vida política. En 1875 se abandonaban los presupuestos democráticos del sexenio en favor de lo que Costa denominará un sistema de *oligarquía y caciquismo*.

La médula central del sistema debía ser un nuevo texto constitucional, ya que Cánovas rechazó la posibilidad de reimplantar tanto el elaborado en 1845 como el de 1869. Y la primera medida, por tanto, será la convocatoria a Cortes Constituyentes que, como única excepción hasta 1890, se hará bajo la fórmula del sufragio universal para reforzar la impresión de continuidad y legalidad que debía presidir todo el proceso de configuración

del régimen. Las elecciones convocadas para finales de enero de 1876 suponen la recuperación de las modalidades políticas usuales en la época isabelina y anticiparon lo que habría de ser en el futuro la práctica política electoral. La presión gubernamental y las medidas restrictivas impidieron de hecho cualquier participación de la oposición y en el distrito de Alicante forzaron la retirada de Eleuterio Maisonnave, que en principio pensaba presentarse. En este clima los resultados fueron los esperados: un triunfo absoluto para los ministeriales que en la capital representaba el antiguo progresista y ahora militante canovista Ramón Campos. Con una mayoría casi absoluta en las Cortes, Cánovas tenía todas las garantías para elaborar una Constitución –1876– y una Ley electoral –1878– a la medida del sistema de dominación oligárquica que estaba diseñando.

Los partidos políticos

El sistema canovista se articuló como un sistema bipartidista que se basaba en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos: conservadores y liberales. Los partidos del turno presentan unas características comunes en su organización y funcionamiento ya que ambos se configuran, en consonancia con el marco del sistema electoral y político que les es propio, como partidos de notables y de cuadros. Están constituidos por grupos clientelares o facciones que tienen poco que ver con la maquinaria centralizada de un partido moderno; son más bien partidos de notables que se mueven en el estrecho marco parlamentario y que son considerados fundamentalmente una fuente de promoción y movilidad social. Por ello, su organización y actividad a nivel local es débil o inexistente excepto en las capitales de provincia o ciudades de una cierta importancia e incluso en estos casos aquella quedaba limitada claramente al período electoral. Su estructura clientelar se comprueba en los frecuentes enfrentamientos y disidencias internas que no se producen por divergencias ideológicas o programáticas, sino por el control de las diversas instancias de poder y en los también frecuentes trasvases de políticos de uno a otro partido. Ejemplos de

esa práctica habitual encontramos en Alicante varios, aunque los más notorios serán el de Enrique Bushell, que siendo diputado liberal durante la legislatura que comprende el *Gobierno Largo* de Sagasta lo será en la siguiente por el Partido Conservador y el de Florentino de Elizaicin, que en el transcurso del mismo año –1886– fue miembro del Comité conservador y del Comité liberal.

El Partido Conservador canovista estaba formado por antiguos moderados y unionistas isabelinos, a los que se unieron algunos personajes del ámbito conservador de la revolución septembrina y los nuevos alfonsinos. En Alicante se configuró en torno al *Círculo Alfonsino* que presidía en 1875 Juan Bonanza Roca, Alcalde del primer Ayuntamiento de la Restauración.

Su composición no difería básicamente de la del resto del país pues agrupaba a representantes de la burguesía agraria y de la pequeña nobleza local, que poseían propiedades en la provincia pero que residían generalmente en la capital y a ciertos sectores de la burguesía comercial y de negocios de la ciudad. Entre los primeros, podemos destacar a José de Rojas Galiano, Marqués del Bosch; Rafael de Rojas, Marqués de Algorfa; Arturo Pardo de Inchausti, Conde de Vía-Manuel; José María Santonja, Conde de Buñol y Alfonso Sandoval Bassencourt, Barón de Finestrat. Entre los segundos, encontramos a Antonio Campos Domenech, José Gabriel Américo, Arturo Salvetti, Alejandro Vilá y Juan José Carratalá. En los momentos iniciales de la Restauración se unió al conservadurismo canovista un sector de los antiguos constitucionales representado por Federico Bas, Leopoldo Laussat y Adrián Viudes que lo abandonarían al formarse el Partido Liberal.

El liderazgo local conservador lo ejerce desde 1877 Antonio Campos Domenech, antiguo unionista y constitucional en el sexenio. A su muerte en 1886, tras un período interino en que presidirá el Comité local Julián Ugarte, la dirección del partido pasará al Marqués del Bosch, representante del sector integrista neocatólico que en su origen recoge ciertas influencias carlistas. En 1879 con la formación del *Círculo Liberal-Conservador* el partido está plenamente configurado en la ciudad y sus órganos de expresión serán los diarios *La Provincia*, *El Eco de la Provin-*

cia y *La Monarquía*, a los que se suma en 1889 el *Boletín del Círculo Liberal-Conservador*. Los periódicos *Diario de Alicante* y *La Patria* serán fundados por fracciones conservadoras disidentes en los años 1886 y 1891 respectivamente.

El Partido Liberal-Fusionista representa la continuidad con el sexenio democrático pues tiene su origen en los constitucionales de Sagasta. Los inicios de la Restauración y el paso de alguno de sus líderes más representativos al bando canovista provocaron en este partido una cierta desorganización. En mayo de 1877 se reconstituía en la capital el *Comité Constitucional*, a cuyo frente encontramos a viejos liberales como Rafael Terol, José Carlos Bellido, Francisco Mingot, José Mauricio y Eduardo Orts. Los constitucionales irán integrándose de forma progresiva en el sistema hasta formar en 1880 el Partido Liberal-Fusionista, que en 1885 absorberá también a la formación de la Izquierda Dinástica que en Alicante se había organizado en 1882 alrededor del periódico *El Consecuente* y que reunía a un sector de ex-constitucionales encabezados por José Poveda Escribano, Francisco de Asís Pacheco y Blás Loma Corradi.

El liberalismo dinástico, aunque no presenta diferencias radicales en su composición social respecto a los conservadores canovistas, sí parece gozar de mayor aceptación en los núcleos de la burguesía agraria y comercial dedicada preferentemente a la producción y exportación de vinos y en los sectores profesionales alicantinos. La jefatura local del partido no fue única pues, si bien destaca con evidente protagonismo Rafael Terol, el liderazgo liberal será compartido a lo largo de la Restauración por otros significados personajes como Leopoldo Laussat, Adrián Viudes, Enrique Arroyo, José Gadea y José Carlos Aguilera y Aguilera, Marqués de Benalúa. Esa falta de jefatura única provocó con frecuencia divisiones internas que enfrentan a las diversas fracciones del partido por el control de la representación parlamentaria y el poder local, de manera más acusada en la coyuntura de los años ochenta. Superadas esas crisis, el Partido Liberal se presenta como una formación sólida y más potente que el conservadurismo canovista bajo el liderazgo compartido de Terol y Arroyo —ambos serán diputados por la circunscripción en 1893, 1898 y 1901—, que se mantendrá hasta los primeros años del

nuevo siglo, aunque en esas fechas comienzan a destacar otros políticos liberales como José Canalejas. Los liberales contarán con diversos periódicos en la capital durante este período destacándose, entre ellos, *El Constitucional* y *El Liberal*.

Entre las principales fuerzas de oposición al sistema de la Restauración se encuentran los republicanos. Las características que definen al republicanismo alicantino en esta etapa son la fragmentación y una cierta debilidad organizativa que, sin embargo, no impide que siga gozando de una destacada implantación en la ciudad. La experiencia gubernamental de 1873 dejó a los republicanos divididos por cuestiones ideológicas —federales y unitarios; moderados y reformistas— y tácticas —legalistas (electoralistas) y revolucionarios— y en la Restauración su división se traducirá en la formación de diversas organizaciones. Durante los primeros años su capacidad de acción y participación será muy limitada por la política restrictiva del régimen y sólo a partir de 1881 con el advenimiento de un Gobierno liberal pudieron reorganizarse bajo la denominación de *demócratas*.

En sus comienzos, el republicanismo alicantino se agrupará en torno a la figura de Eleuterio Maisonnave dando origen a la formación más importante: el posibilismo. Olvidando los planteamientos federales y de reforma social de otra época, esta tendencia se identifica plenamente con la línea de Emilio Castelar, del que Maisonnave será el colaborador más próximo y, en consonancia con un extremado conservadurismo ideológico y político que se traduce en una cada vez más débil defensa de la república, el posibilismo seguirá agrupando a un destacado sector de la alta burguesía comercial y de negocios alicantina que representan hombres como Juan Leach, Amando Alberola, Adolfo Faes o los propios hermanos Maisonnave. Los posibilistas serán la agrupación republicana más sólidamente implantada en el ámbito capitalino y se integrarán en cierta medida en el sistema político de la Restauración. Su órgano de prensa será *El Graduador*.

Los republicanos progresistas, que se identifican con la línea política de Ruiz Zorrilla, se organizaron en 1879 a partir de la creación del periódico *La Unión Democrática*, reuniendo al grueso de aquellos antiguos radicales que, dirigidos por Rafael

Sevilla, habían pasado al bando republicano en 1873 y a algún republicano como Román Bono, que ocupará la presidencia del Comité provincial durante varios años. Doctrinalmente, ocupan una posición de “centro” en el espectro político republicano; son unitaristas pero, fieles a la vieja tradición progresista, defienden el pronunciamiento militar y la vía insurreccional para proclamar la República. Partidarios también de la *unión republicana*, se convertirán a finales de la década de los ochenta en los máximos defensores de las coaliciones republicanas.

La reorganización federal fue más lenta y coincidió con el turno liberal iniciado en 1881. El 25 de junio de ese año llegaba a la ciudad de Alicante Francisco Pi y Margall para dar un mítin en el Teatro Español que congregó a un numeroso auditorio e impulsar la reconstitución del Partidal Federal. Dentro de este proceso destaca la fundación de la revista *Las Germanías* que, dirigida por Vicente E. Miquel, haría propaganda del pensamiento federal basado en las teorías pimargallianas de *pacto, autonomía y federación*. Los republicanos federales siguieron teniendo una cierta influencia en la sociedad alicantina finisecular, fundamentalmente en los medios obreros y populares y contaron en este período con varios periódicos como *El Porvenir* y *la Federación*.

En los años finales del siglo XIX, tras el fracaso de las uniones republicanas de 1886 y 1891, el republicanismo alicantino entrará en un progresivo proceso de decadencia que conducirá irreversiblemente a la crisis y descomposición de las viejas organizaciones decimonónicas. En esa coyuntura aún se configura otra formación republicana: el Partido Centralista, que agrupará a los salmeronianos y que presentará un relativo crecimiento por la atracción de antiguos republicanos procedentes en su mayor parte del posibilismo. A partir de esta agrupación, en 1897 surgirá el denominado Partido Republicano Unico, órgano de la Fusión Republicana, que estará representado por el periódico *El Republicano* que dirige José Guardiola Ortiz.

Completando el panorama político alicantino, encontramos al integrismo católico, que entroncará finalmente con el tradicionalismo carlista. En la ciudad de Alicante, a diferencia de otras comarcas de la provincia, el carlismo no fue una fuerza

política destacada en la primera mitad del siglo XIX, pero el reaccionarismo que había abanderado siguió latente en ciertos grupúsculos de la sociedad alicantina y será canalizado a través de periódicos estrechamente vinculados a las altas jerarquías eclesiásticas católicas como el *Semanario Católico* de Antonio Campos Carreras y *El Alicantino* que, fundado en 1888, se convirtió en el portavoz de esos sectores integristas confesionales y baluarte del ataque al liberalismo y a las manifestaciones espirituales o intelectuales de carácter heterodoxo como el librepensamiento, la masonería o el espiritismo. A finales de siglo, el tradicionalismo carlista comienza a organizarse políticamente con la aparición del periódico *La Libertad Regional* y del *Círculo Tradicionalista* presidido por Vicente Calatayud Bonmatí y, aunque prepararon una insurrección en 1900, su significación política fue prácticamente nula.

Las elecciones organizadas y el funcionamiento del turno en Alicante

Como se ha señalado anteriormente, el sistema político de la Restauración se cimentaba en la alternancia en el poder de los dos partidos dinásticos y ello implicaba necesariamente la utilización de una compleja maquinaria electoral dominada por el fraude y el caciquismo, de la que no quedaría al margen la circunscripción de Alicante. Durante este período, la aparente normalidad electoral escondía una sistemática manipulación fraudulenta —en ocasiones no exenta de la coacción violenta— en la que intervenían el ministro de la Gobernación, el Gobernador Civil y los caciques y políticos locales. Las prácticas fraudulentas más usuales eran el *encasillado* —designación de candidaturas apoyadas por el Gobierno—, adulteración del censo electoral, control de la constitución de las mesas electorales y de la designación de interventores y el *pucherazo* —falsificación del escrutinio—. De la propia ley electoral nacía ya una forma de manipulación que limitaba la movilización de las oposiciones, pues el antiguo distrito electoral de Alicante, que comprendía la ciudad y su término municipal, quedaba anexionado a los de Elche y Monóvar,

que eran mucho más manejables desde el punto de vista caciquil y ahogaban el voto urbano favoreciendo a las candidaturas gubernamentales. Asimismo, el sufragio censitario, vigente hasta 1890, era una garantía más de que los resultados electorales confirmaran los designios del Gobierno.

El fraude será la tónica general de los procesos electorales de estos años y perdurará hasta bien entrado el siglo XX, como han puesto de manifiesto los trabajos del profesor Forner. Durante este período el turno entre los dos grandes partidos funcionó a la perfección en la circunscripción de Alicante en correspondencia con la alternancia en el poder entre conservadores y liberales, pues de forma invariable y respondiendo evidentemente al encaillado ministerial el partido del turno ocupó dos de los tres escaños correspondientes, siendo el tercero para el otro partido dinástico o para las oposiciones más moderadas. A este respecto, interesa destacar la elección del republicano posibilista Eleuterio Maisonnave en varias legislaturas de la primera etapa de la Restauración por el apoyo recibido de alguno de los partidos dinásticos —en 1879 de los conservadores y en 1881 y 1886 de los liberales—, que se cimentaba en el carisma del político alicantino, la influencia del posibilismo y su considerable respaldo electoral en las mesas urbanas de la capital. Además, la elección como diputado de un republicano contribuía a dar a la práctica electoral una imagen de transparencia y legalidad.

La nueva Ley electoral del 26 de junio de 1890 no modificó en absoluto los presupuestos que sustentaban el régimen de la Restauración y el turno entre los partidos dinásticos siguió cumpliéndose de forma rigurosa hasta finales del siglo. La aplicación del sufragio universal en las elecciones de 1891 creó ciertas expectativas que se frustraron ante el triunfo de los candidatos dinásticos —dos conservadores y un liberal—, pues la nueva normativa electoral no alteró los límites territoriales de la circunscripción de Alicante ni la maquinaria caciquil. De nada sirvieron, pues, los esfuerzos por romper el monopolio dinástico de la oposición republicana unida en coalición. Los posibilistas se encontraban en crisis tras la desaparición un año antes de su líder carismático, Eleuterio Maisonnave, y su hermano Juan, que encabezaba la candidatura republicana unitaria junto al federal

Vicente E. Miquel, fracasará, pese a obtener una rotunda mayoría de votos en el casco urbano de la ciudad.

Con el inicio del turno liberal y la convocatoria de elecciones en 1893, los republicanos volverán a concebir esperanzas, aunque en esta ocasión no irán coaligados. Juan Maisonnave intenta aproximarse al Partido Liberal pero no logra emular en este aspecto a su hermano. Su fracaso, aún siendo el candidato más votado en la ciudad, determina su retirada de la política. A partir de este momento, la descomposición del posibilismo es patente y la crisis atenaza a los restantes partidos republicanos, lo que consolida todavía más el turnismo dinástico. Esa tendencia se mantendrá inalterable en las elecciones siguientes, pese al desgaste de los partidos del turno, especialmente de los conservadores, y a la creciente agitación social y política que enmarca la crisis de fin de siglo.

El sistema turnista municipal: el Ayuntamiento de Alicante

Si en la circunscripción la elección de la representación parlamentaria se caracterizó por el pacto y el turnismo, a nivel local el poder político también se asentó sobre esas bases y no fue ajeno a las prácticas fraudulentas y de manipulación con el objeto de afirmar el monopolio dinástico, excluyendo a los republicanos que habían controlado el municipio durante el sexenio democrático y seguían gozando de un amplio apoyo popular. Durante los años 1875-1880, que comprenden el período de configuración del régimen restauracionista, la política municipal estuvo en manos de los conservadores y sólo a partir de las elecciones de 1881 y la formación de un Consistorio de mayoría liberal comienza el turnismo local. Desde esa fecha, del mismo modo que los partidos dinásticos se turnaban en el ejercicio del poder a nivel estatal, el Ayuntamiento estuvo controlado alternativamente por conservadores y liberales, partidos que monopolizaron totalmente la representación municipal. En 1889 la situación comenzó a variar pues en las elecciones municipales los republicanos unidos en coalición lograron quebrar el monopolio dinástico obteniendo tres concejales: Amando Alberola, Luis

Penalva y Gregorio Carratalá. Las siguientes elecciones municipales revalidaron el triunfo de la coalición republicana que, gracias al sufragio universal, logró diez concejales que, sumados a los anteriores, representaban una amplia mayoría, aunque ello no supuso, al contrario de lo señalado por otros autores, que pudiesen controlar el municipio pues el Alcalde designado en 1891, Manuel Gomis Orts, pertenecía al Partido Conservador y el conjunto de los ediles monárquicos les superaba en número. La representación municipal republicana no pudo consolidarse en los años venideros por la crisis de sus formaciones políticas y la falta de entendimiento entre ellas.

La labor municipal de estos años en que la ciudad va a conocer importantes transformaciones socio-económicas va a estar limitada por los que venían siendo los problemas crónicos del municipio alicantino: el déficit presupuestario y el endeudamiento consiguiente. Las arcas municipales se encontraban exhaustas y los ingresos, derivados en su mayor parte de la contribución de consumos, eran insuficientes para cubrir los gastos de la gestión local y para la amortización de la abultada deuda. En 1890 el Alcalde Rafael Terol, tras realizar un balance global del penoso estado económico del municipio, hacía público un estado de la deuda municipal que ascendía a 1.267.890 pesetas, encontrándose entre los principales acreedores la Hacienda Pública, la Diputación provincial y la *Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción* por gas, propietaria de la fábrica de gas de Alicante. A lo largo de estos años, las sucesivas Corporaciones municipales intentaron diversas soluciones a esta espionosa cuestión como la iniciativa de Blas de Loma Corradi en 1884-1885 de contraer un empréstito de 600.000 pesetas con el Banco Hipotecario que se frustraría finalmente por la oposición de la Diputación o el acuerdo suscrito en 1889 con la compañía de gas para amortizar en un plazo total de treinta años los débitos contraídos por concepto de suministro divididos en mensualidades con un 5% de interés desde el ejercicio de 1880-1881. Con todo, la deuda seguiría aumentando y en el mes de enero de 1893 ascendía a 1.372.812 pesetas, según las estimaciones realizadas por encargo del Alcalde Manuel Gomis.

La precaria situación financiera del Ayuntamiento repercutió negativamente en la gestión municipal. La falta de servicios públicos y de una infraestructura adecuada en una ciudad en expansión era denunciada con insistencia desde diversos sectores de la población alicantina. No es infrecuente encontrar en la prensa de esos años denuncias como ésta que en mayo de 1886 publicaba el diario *El Porvenir*: "el abandono en que por todos los conceptos se encuentra nuestra ciudad, es lamentable en sumo grado. Montones de basura en unos puntos, charcas de cieno en otras partes, el polvo cegando siempre a los transeúntes, abandonada la higiene de la población...". No obstante, en la última década del siglo, al compás de la dinámica de desarrollo creciente de la ciudad, se daría una mayor preocupación por la infraestructura y la urbanización –ordenación urbana, extensión del alcantarillado, prolongación y adoquinado de calles, abastecimiento de aguas, servicio de bomberos–, en especial durante los mandatos de los Alcaldes Manuel Gomis y José Gadea.

Transformaciones socioeconómicas y burguesía portuaria en el Alicante de la Restauración.

Crecimiento demográfico y expansión urbana: Alicante, ciudad administrativa y de servicios

En el transcurso de la segunda mitad del ochocientos, como han demostrado las investigaciones de Vicente Gozávez, la población alicantina experimentó un crecimiento lento pero sostenido que al final de la centuria se tradujo en un total de 50.142 habitantes, una cifra que doblaba los 27.550 correspondientes a 1857.

El arranque del incremento demográfico corresponde al final de los años cincuenta y tiene su origen en la etapa de expansión económica que se inaugura con la construcción del ferrocarril que enlazaba a la capital con Madrid y el desarrollo comercial del puerto, declarado de interés general en 1855. El aumento poblacional quebrará en las décadas siguientes a consecuencia de los baches demográficos de la epidemia colérica de

1865 y, en especial, la de fiebre amarilla de 1870 que, además de las 1.497 víctimas que produjo, tuvo unas consecuencias socio-económicas negativas por la paralización comercial a consecuencia de la declaración de puerto “sucio”. En los años setenta el crecimiento demográfico se contiene por la recesión económica y el factor añadido de la crisis agrícola por la prolongada sequía que se alargará hasta el final de la década. A partir de 1880 se produce una leve recuperación del crecimiento de la población alentada por la excepcional coyuntura que la firma del tratado franco-español en 1882 abre para la producción y exportación de vinos, aunque en 1885 se registra una nueva epidemia de cólera.

El desarrollo de la capital en los últimos decenios del XIX y su configuración como ciudad administrativa y de servicios la convirtieron en foco de atracción para una población inmigrante procedente del resto de la provincia y en menor medida de las provincias limítrofes, pero paralelamente se puede observar una tendencia contraria en la fuerte emigración a Argelia. Esta corriente emigratoria al norte de Africa de jornaleros –en su mayor parte de la zona de la Huerta y de partidas rurales colindantes a la capital– se había convertido en una constante del campo alicantino; era la tradicional solución de los jornaleros ante las situaciones de paro, carestía y hambre.

Al tiempo que Alicante iba adquiriendo sus funciones urbanas y se producían las transformaciones socio-económicas propias de la segunda mitad del XIX, la ciudad remodelará progresivamente su fisonomía, sentando las bases de lo que será el proceso de urbanización moderna en la centuria actual. Como ha señalado Antonio Ramos, la demolición de las murallas, una vez conseguida la autorización del ministerio de la Guerra en 1858, hará que Alicante pase de una concepción de plaza militar a la de “ciudad abierta”, con lo que iniciará la expansión urbana y el proceso de reformas.

En los años que distan hasta el fin de siglo, la apertura y ampliación de calles, alcantarillado, pavimentación y colocación de aceras fueron tareas importantes desde el punto de vista urbanístico, sin olvidar la edificación particular que se intensificará gracias al florecimiento económico y comercial que trajo consigo la expansión vinícola. Debemos señalar también otros tra-

bajos complementarios de embellecimiento de la ciudad, entre los que cabría destacar el proyecto del arquitecto Guardiola Picó de conversión del malecón en paseo ciudadano que, tras el derribo del baluarte de San Carlos, se extendió hacia el varadero dando origen a la Explanada y al Parque de Canalejas. La transformación urbana conlleva la aparición de nuevos barrios y la remodelación de antiguos arrabales. En 1868 se aprobará la urbanización del Arrabal de San Antón, que se convertirá en una zona de expansión de la ciudad por su proximidad a la Plaza de Toros, la Fabrica de Tabacos, el paseo de Campoamor y los jardines de Quijano. En 1883 se construirá a iniciativa del filántropo José María Muñoz el denominado *Barrio de la Caridad* y en ese mismo año se constituirá la sociedad *Los Diez Amigos* que impulsó la construcción del Barrio de Benalúa, uno de los exponentes más claros de la concepción burguesa de vida urbana y de los criterios higienistas de la época.

Sin embargo, la planificación y ordenación urbanística municipal tardaría en aplicarse, pese a los planos geométricos realizados en 1853 y 1856 –éste último diseñado por el arquitecto Francisco Morell– y ello dará lugar a una expansión anárquica y sin condiciones en algunas zonas de la ciudad como denunciaba el diario *El Graduador* en 1882: “Si Alicante hubiera tenido (...) un plano geométrico de ensanche (...) no hubiera dado lugar a que en la falda misma del castillo se levantaran sin orden ni concierto, multitud de viviendas de aspecto raquíptico que carecen por su situación de la salubridad apetecible”. Estas viviendas correspondían en general a los barrios de tradicional asentamiento obrero –Villavieja, Santa Cruz, San Roque, Carmen y Arrabal Roig– y su deficiente construcción y habitabilidad será objeto de las críticas de arquitectos e higienistas como Guardiola Picó y Sánchez Santana.

En 1886 comenzaba el estudio del ensanche de la población, aunque los primeros planos de su anteproyecto datan del sexenio democrático. Tras vicisitudes de diversa índole y la presentación de dos proyectos firmados respectivamente por Guardiola Picó y González Altés, sería aprobado este último en abril de 1893, si bien nuevas dificultades retrasarían su puesta en práctica hasta agosto de 1896. De acuerdo con este proyecto, el

ensanche se extiende al oeste y norte de la ciudad y su viario lo constituyen calles ortogonales entre sí que delimitan manzanas cuadrangulares. En cuanto a sus inconvenientes –falta de dotaciones urbanas de uso público, inadecuación a la topografía del terreno, y su limitada extensión– ya fueron puestos de manifiesto en su época. En 1897 Guardiola Picó llamaba la atención sobre una masa de edificaciones que quedaba al margen del plan de ensanche y que con el tiempo dará origen a nuevas barriadas: Carolinas, Plá del Bon Repós, Los Angeles, Santo Domingo y San Blas. Cabe destacar, por último, que la alta burguesía local, al contrario de lo ocurrido con el ensanche de otros núcleos urbanos españoles, prefirió fijar su residencia en espacios ganados al mar y al margen, por tanto, de la nueva zona de expansión.

La ciudad de Alicante irá desarrollando a lo largo de este período sus características funciones administrativa y de servicios, que se unirán a la que tradicionalmente venía siendo su principal función: la comercial. Como apunta A. Ramos, la creación de la provincia y la designación de Alicante como su capital dotará a la ciudad de una red de relaciones administrativas novedosas y de mayor complejidad que dará lugar a la instalación de edificios para ubicar la administración provincial y central como el Gobierno político, la Diputación Provincial, dependencias de Hacienda, Aduanas, Juzgados, etc. Paralelamente la urbe se irá dotado de esa serie de instituciones y asociaciones de carácter cultural, benéfico y recreativo propias de una capital de provincia y con la aparición de las primeras ordenanzas reguladoras de baños de mar en 1818 se acrecentó la importancia balnearia de la playa del Postiguet originando la instalación de numerosos balnearios como La Alhambra, Diana, La Alianza, La Estrella. Las mejoras en la playa y sus instalaciones fueron sentado las bases de la futura función turística de Alicante.

Las bases económicas: La expansión vinícola y el desarrollo comercial del último cuarto del siglo XIX

En la segunda mitad de siglo XIX el comercio portuario y la producción agraria de la Huerta seguían siendo los puntales

básicos de la estructura económica alicantina y alcanzarán en esos años una expansión acelerada.

Por lo que respecta al mundo agrario, la comarca de Alicante se verá, al igual que otras comarcas alicantinas, afectada por las transformaciones que acompañan a la penetración y el desarrollo del capitalismo y que suponen la aparición de una agricultura especializada y comercializada. Siguiendo las investigaciones de Antonio López Gómez, la huerta alicantina y su entorno sufrirán a lo largo de la centuria decimonónica modificaciones en su fisonomía y paisaje agrario, bien patentes en la expansión de algunos cultivos y el declive de otros tradicionales. En este proceso ocupa un lugar hegemónico el cultivo vinícola que, aunque venía siendo uno de los principales de la huerta, alcanzará ahora su máximo esplendor y se convertirá en la muestra más clara de esa agricultura moderna y comercializada.

La expansión vinícola tuvo su origen en el aumento de la demanda por parte de Francia, que había visto arruinada su producción por las plagas del oidium y la filoxera y que acudió a la producción alicantina en busca de los denominados vinos de “pasto” (comunes) que con el correspondiente *coupage* serán comercializados como vinos franceses —como ha puesto de relieve la investigación de Enrique Giménez, esta práctica era usual desde el siglo XVIII—. La gran demanda francesa de vinos originó una coyuntura excepcionalmente favorable para el desarrollo de la producción vinícola y la huerta alicantina, que producía el afamado vino de *fondillón*, no permanecerá al margen de este proceso. En muchos casos, la extensión del cultivo vinícola produjo nuevas roturaciones en los terrenos marginales a la huerta y no fue infrecuente que se hiciese a costa de otras producciones huertanas tradicionales como los cereales, el olivo, el algarrobo y el almendro, aunque estos cultivos siguieron manteniendo unos niveles de producción importantes, como demuestran las fuentes documentales de la época.

La firma de los convenios comerciales con Francia, en especial el tratado de 1882, potenció aún más el desarrollo vinícola e incrementó la exportación de caldos iniciando una “época dorada” para la viticultura, que generó amplios beneficios y expectativas económicas. En un primer momento la pro-

ducción y comercialización del vino estuvo fiscalizada por agencias comerciales francesas, pero la burguesía autóctona con su ya larga tradición mercantil irá organizando una red propia que le reportará una acumulación de cierta envergadura. En muchos casos es difícil distinguir entre cosecheros y comerciantes, ya que la intensa comercialización del vino tiende a reunir ambas facetas en una misma persona y asimismo es frecuente que simultáneamente actúen como intermediarios comerciales para firmas extranjeras. Genuinos representantes de esa burguesía comercial y vinatera serán Gregorio Carratalá, Carlos Faes, Juan Leach, Juan y Francisco Maisonnave y Luis Penalva. Ellos, junto a agentes comerciales extranjeros como Lefebre y Cía, Luis Mallié y M. Issanjou, controlarán la producción y los circuitos comerciales del vino, que se exporta desde Alicante a los puertos de Cete, Rouen, Marsella, Bordeaux y Liverpool.

La gran rentabilidad del negocio vinícola impulsará a los vinateros y comerciantes de vino, que se configuran como la fracción más dinámica de la burguesía alicantina, a una amplia actividad inversora en la mejora de los rendimientos del cultivo y fabricación del vino, en las dotaciones de infraestructura –bodegas y almacenes– y en industrias afines –tonelerías, boterías y prensas–. También participaron activamente estos sectores en las instituciones de defensa de sus intereses como la *Asociación Vitícola Regional* en 1884 o la *Sociedad Vinícola y Enológica* en 1886 –de la que sería presidente Juan Maisonnave–; en congresos como el de la filoxera en 1878 o el de viticultores en 1886 y en exposiciones de carácter nacional o internacional para presentar sus producciones. No es ajeno al dinamismo de esta burguesía la aparición de revistas especializadas como *La Vini-cultura* o *La Correspondencia Vinícola*.

La expansión vinícola vino acompañada del declinar progresivo de otras producciones que en 1848 Joaquín Roca de Togores consideraba propias de Alicante en su *Memoria sobre el estado de la agricultura...*, como la barrilla y el esparto, que se encuentran en franco retroceso. La barrilla, que servía para la obtención de vidrio y jabón y que había sufrido en la centuria anterior un intenso proceso de comercialización para abastecer los mercados europeos, no pudo competir con los modernos pro-

cedimientos químicos de fabricación de la sosa y desaparecerá al reducirse la demanda. La producción de esparto que, recogida en los montes cercanos a la huerta y convertida en el hilete *-filet-*, servía de base para los trabajos de esterería, soguería y alpargatería, declinará en esos años con penosas consecuencias para la economía campesina, ya que se trataba de una industria doméstica que utilizaba mano de obra femenina e infantil y un ingreso complementario para el presupuesto familiar. Las causas de su decadencia radican, según Rafael Altamira, en la privatización de los comunales y la competencia del esparto argelino y otras fibras vegetales como la pita; a ello habría que añadir la intensa expoliación de los atochales por la preferencia a exportar el esparto en bruto que facilitaría la instalación en 1868 de una fábrica inglesa para el prensado de la fibra.

Durante el último cuarto del siglo XIX, la burguesía alicantina se mantuvo ligada a la que venía siendo su secular fuente de ingresos: el comercio portuario. A comienzos de la Restauración, el comercio alicantino atravesó una cierta contracción, en la que confluían los últimos vestigios de la crisis de 1866 y las transformaciones profundas que se estaban operado en el mercado nacional. La finalización de las líneas que configuraban el esquema ferroviario español decinómico origina cambios significativos en la estructura del comercio alicantino, viéndose especialmente afectados dos de las principales mercancías que centraban el intenso comercio de cabotaje por el puerto de la capital: los cereales procedentes de Castilla hacia el exterior y la redistribución de los productos coloniales de Cádiz hacia el interior. En este contexto, no es extraño que la prensa local publicara artículos preñados de lamentos y añoranzas como éste publicado en junio de 1880 por *La Unión Democrática*, del que reproducimos un fragmento: “Aún recordamos el gran comercio que se hacía por nuestra plaza (...) ese muelle lleno materialmente de buques mercantes que venían a cargar la barrilla de nuestro suelo; el trigo de la Mancha, cuyo puerto natural es Alicante”, y que las instituciones económicas y políticas reclamaran ciertas medidas de protección como la reducción de las tarifas ferroviarias, petición que se reiteraría a lo largo de todos esos años.

La coincidencia con una grave sequía que se prolongaría hasta 1879 dió una mayor dimensión a la crisis económica y a sus consecuencias, especialmente al paro de jornaleros agrícolas y asalariados urbanos que impulsaría a Eleuterio Maisonnave a conseguir trabajo para ellos en las obras del ferrocarril de Cáceres a Plasencia. Otras consecuencias de la coyuntura depresiva serán la quiebra de dos de las firmas mercantiles más importantes de la ciudad: *Cristóbal Pacheco e Hijo* y *José Bás y Hnos*, y el abandono definitivo del viejo proyecto de construcción del ferrocarril Alicante-Alcoy a partir de la iniciativa autóctona.

Desde los primeros años de la década de los ochenta, superada la recesión económica, el comercio portuario alicantino conocería una etapa de gran esplendor que sólo remitirá a comienzos del siglo XX. El vino se convertirá en el principal artículo de exportación, desbancando a otros productos tradicionales como el esparto y la barrilla. En este capítulo de la exportación aliantina, incrementarán sus salidas otras producciones como la almendra, el regaliz y el aceite y a ellas se unirán nuevos artículos como los plomos de Linares, que comenzarán a exportarse desde Alicante en 1881 cuando E. Pillet, agente comercial de la M-Z-A consiga la nivelación de tarifas de esta línea con las de Sevilla y Málaga, puertos tradicionales de embarque del mineral. En las postrimerías del siglo aparecerán otros productos como el tabaco, textiles, calzado, cuero y papel.

En referencia a la importación, dos productos hegemonizarán el comercio alicantino: los cereales y los salazones. La comarca alicantina siempre había sido deficitaria en cereales y su escasez se había procurado paliar con el cereal castellano y extranjero; éste último —mucho más barato en el mercado— aflúa incluso en las épocas de prohibición por medio del contrabando. Durante la Restauración la importación de trigos y harinas fue importante, tanto la procedente del exterior como la del cabotaje. Entre los salazones destacaba el bacalao procedente de los caladeros de Terranova, Noruega, Islandia, Inglaterra y Francia; y el puerto alicantino se convertirá en el principal centro receptor de este producto después de los puertos cantábricos y Barcelona. Este comercio de salazones era ya importante desde el siglo XVIII y se realizaba a través de una red de agentes comerciales

británicos que operaban con los comerciales locales —en muchos casos de origen anglosajón— que, afincándose definitivamente en la ciudad, constituirán una fracción importante de la alta burguesía alicantina, la denominada *aristocracia del bacallá*. En estos años, junto a este comercio de importación y exportación, el cabotaje siguió representando un volumen importante en el tráfico portuario alicantino.

El puerto era el centro de las actividades e iniciativas económicas de la burguesía alicantina y durante el último tercio del siglo XIX hará que la ciudad se consolide como capital mercantil. El comercio portuario era, en palabras de Luis Más y Gil, la médula de Alicante y el puerto la clave de su desarrollo. De ahí que esta burguesía, cuyas fuentes de ingresos giraban en torno al comercio portuario, mostrase a lo largo de este período su preocupación por todo tipo de mejoras en las instalaciones portuarias. En 1873 finalizaban las obras que habían dado comienzo en 1861 y el puerto alicantino se configuraba como un recinto moderno y cerrado por ambos lados, pero con el incremento del tráfico durante estos años de la Restauración las instalaciones portuarias se mostrarían insuficientes, como denunciaba con frecuencia la prensa local. La construcción de los ramales ferroviarios del puerto, primero el de la M-Z-A y después el de Murcia, agravaron el problema al restar espacio en los muelles, donde se acumulaban las pipas de vino en gran cantidad entorpeciendo o paralizando las operaciones de carga y descarga de los buques atracados. En 1885 la acumulación de pipas y toneles de vino era de tal magnitud que se solicitó la habilitación de la Explanada para su depósito provisional. Dos años más tarde las instituciones económicas y todos los partidos políticos locales reclamaban la ampliación y prolongación del muelle de Levante para la instalación de *doks* y almacenes comerciales. A finales de 1891 el Ayuntamiento asumía tal demanda y elaborada un proyecto de ampliación de dicho muelle con terrenos ganados al mar por la playa del Postiguet que será denegado por el Ministerio de Fomento en 1894. En 1900, gracias a los esfuerzos de José Canalejas, el puerto de Alicante pasó a ser administrado por una Junta de Obras, que inmediatamente iniciaría los trabajos de reforma y ampliación que modelarán el puerto actual.

Como se ha señalado, la base económica de la ciudad de Alicante descansaba en la agricultura huertana orientada a la exportación y en las actividades comerciales y portuarias, mientras el sector industrial mostraba un marcado retroceso. En esos años en que la vecina ciudad de Alcoy se consolidaba como un núcleo industrial y comenzaban a aparecer nuevos centros industriales en la provincia, se pone de relieve la debilidad de la burguesía industrial alicantina y su incapacidad de propulsar una industrialización similar a la alcoyana o a la del Baix Vinalopó. A comienzos de la Restauración, las artesanías tradicionales ligadas al textil y, en especial, a los trabajos de transformación y elaboración del esparto se encuentran en decadencia y el único núcleo industrial de cierta envergadura sigue siendo la Fábrica de Tabacos. Fundada en 1801, daba trabajo a mujeres de la capital o partidas rurales cercanas en número, según Evaristo Manero, de cinco mil en 1883, cifra que Ferrándiz Ponzó eleva a siete mil operarias. Desde finales de los años ochenta se aprecia una ralentización en el crecimiento numérico de las cigarreras por la progresiva mecanización de la elaboración del tabaco.

Desde 1875 se fueron instalando en Alicante algunas industrias ligadas al capital extranjero como las refinerías de petróleo *La Británica* de la sociedad *Deutch y Cía*, que producía más de ochocientas cajas de combustible diarias y disponía de un muelle propio para la descarga de petróleo bruto y la de la razón *Fourcade y Provot* instalada en la playa de Babel, que sería de las primeras industrias en instalar una central eléctrica para su suministro. El sector metalúrgico, que en los años cuarenta había gozado de cierta expansión con la instalación de varias fundiciones como *La Británica Metalúrgica*, *La Lealtad*, *La Alicantina* y *Las Palmas*, se encontraba representado por la fundición de *Tomás Aznar y Hnos.*, que se especializó en la fabricación de maquinarias como bombas, generadores, puentes y ferrocarriles para minas. Existen también dos industrias cerámicas para la producción de tejas y ladrillos denominadas *La Unión* y *La Cerámica Alicantina*.

El sector industrial con más desarrollo era el de los derivados alimenticios, en el que destacaban las fábricas de conservas de frutas y legumbres, de harinas y de aceite de orujo. De

mayor importancia son las industrias de fabricación de pasta para sopa y chocolates de la sociedad *Rivera Guarnier Hnos.* y *La Industrial Alicantina*, de Román Bono, comerciante enriquecido con el negocio de coloniales.

El auge de la exportación vinícola trajo consigo el desarrollo de las industrias de tonelería y, de forma secundaria, el de las serrerías para proporcionar la madera de roble a los talleres de tonelería. Finalmente, industrias de menor consideración serán un fábrica de sacos y varias litografías.

Como vemos, el sector industrial alicantino presenta a lo largo de estos años finiseculares un escaso grado de desarrollo. La producción industrial es diversa, pero no tiene un peso determinante en la estructura económica y, pese a la importante acumulación de capital que la expansión vinícola y el comercio portuario generaron, la burguesía alicantina mostró escaso interés por la inversión industrial prefiriendo, sin duda, la reiversión en el comercio y la agricultura de exportación o la colocación de capitales en deuda pública, compañías ferroviarias o en la especulación urbana.

Élites económicas y consolidación de la oligarquía portuaria

El desarrollo económico y comercial de la ciudad en el último cuarto de siglo XIX consolidó una burguesía urbana muy potente. Desde épocas anteriores la intensa actividad comercial del puerto fue originando el asentamiento de numerosos comerciantes extranjeros que en principio actuaban como agentes de firmas comerciales foráneas y más tarde, al ir acumulando cierto volumen de capital, se afincaban definitivamente en Alicante fusionándose con la burguesía autóctana, aunque no perdían sus conexiones con las compañías comerciales o consulados de sus países de origen. Por ello, abundarán los apellidos extranjeros como Maisonnavé, Cumming, O'Connor, O'Gorman, Leach, Raggio o Bushell, entre esas élites urbanas que se configuran como una burguesía comercial y de negocios. Desde mediados del XIX estos sectores están fuertemente vinculados a la burguesía agraria que, tras las transformaciones agrarias liberales, ha

ido consolidando sus propiedades en la huerta y otras comarcas aliantinas y entre la que se encuentra una importante fracción de la pequeña nobleza local como los Roca de Togores, los Pascual del Pobil o los Pascual de Bonanza. Estos sectores conformaban la oligarquía local; un grupo reducido de familias que controlarán los resortes del poder político y económico de la ciudad a lo largo de este período y que constituyen el soporte social donde se articula el entramado restauracionista.

Esta oligarquía, que podemos calificar de burguesía comercial, financiera y de negocios, se consolidará gracias a los voluminosos beneficios adquiridos con el comercio y la exportación vinícola y desarrollará en esos años una intensa actividad inversora en el sector financiero, ferroviario y urbano. Alguna de estas iniciativas inversoras ya venían esbozándose años atrás y desde 1875 se consolidarán e iniciarán otras nuevas relacionadas con el progresivo desarrollo y urbanización de la ciudad, que iba configurando sus características de capital administrativa y de servicios. La creación de una infraestructura urbana acorde con las necesidades de una ciudad en expansión: construcción, abastecimiento de agua potable, sistema de transportes y tranvías y, más tarde, el alumbrado eléctrico, serán foco de interés por parte de la burguesía local y de atracción para sus capitales, incrementados notablemente por la favorable coyuntura económica.

Para afrontar estas iniciativas económicas, la burguesía alicantina necesitaba el respaldo de una estructura financiera. En 1875 Alicante contaba con una sucursal del Banco de España, a través de la que canalizaba gran parte de la circulación monetaria y de la inversión en operaciones mercantiles, y varias bancas particulares ligadas a las firmas comerciales más potentes. Con la crisis financiera de 1864-1866 desapareció la sucursal de la *Sociedad General Española de Descuentos* que se había establecido en 1861. Desde la frustrada experiencia de la *Compañía Alicantina de Fomento*, que desapareció al verse afectada por la ley de sociedades por acciones de 1848, no se dará otra iniciativa para crear una sociedad financiera y crediticia autóctona hasta 1877 con la fundación de la *Caja Especial de Ahorros de Alicante*. Promovida por Eleuterio Maisonnave y ligada a un importante sector de la burguesía local —entre los socios fundadores encon-

tramos, entre otros, a José Gabriel Américo, Leopoldo Laussat, Enrique Cutayar, Gregorio Carratalá Cernuda, el Marqués de Benalúa y el Barón de Finestrat— nacía la *Caja Especial de Ahorros* con un capital inicial de 25.000 pesetas y será bien acogida, como indica el primer balance realizado a la semana de la apertura que contabilizó 82 imposiciones y 2.746 pesetas de saldo de ahorro.

Dentro del capítulo de inversiones realizadas por la burguesía alicantina en la infraestructura urbana destacan aquellas iniciativas para dotar a la ciudad de un abastecimiento duradero de agua potable, resolviendo así un problema crónico que se había agravado con el agotamiento de los manantiales de la Casa Blanca y Valladolid, que surtían tradicionalmente a las fuentes públicas. A lo largo de este período se sucedieron los proyectos de búsqueda y explotación de aguas para riego agrícola y abastecimiento urbano financiados por emprendedores comerciantes locales y durante la gran sequía de 1876-1880 se llegaron a instalar por iniciativa privada máquinas depuradoras de agua salada en unos pozos perforados en la zona de la Cantera. Entre las iniciativas que se dieron en este campo destaca la creación de las sociedades *La Exploradora de Pozos Artesianos S.A.* en 1879 con un capital de 150.000 pesetas y *La Exploradora S.A.* en 1880 con un capital de 250.000 pesetas. Más modestas serán otras sociedades como *La Verdad*, *La Constante* o *La Casualidad*.

En mayo de 1881 se inauguraba la canalización de aguas de La Alcoraya promovida por el Marqués de Benalúa, José Carlos de Aguilera, quien traspasaría en 1883 sus derechos a la sociedad británica *The Alicante Water Work Limited* en una operación especulativa que fue muy criticada por ciertos sectores de la población alicantina. Ante la disminución de caudal de las fuentes públicas, el Ayuntamiento convocaba en 1891 un concurso público para la concesión del abastecimiento de agua potable, que sería adjudicada a Enrique Caucurte y Julliat, propietario de pozos artesianos en Sax. Tras una serie de dificultades, a las que no fueron ajenas la falta de capitales y el recurso interpuesto por el Marqués de Benalúa contra el proyecto, en octubre de 1898 se inauguraba el abastecimiento. Unos meses antes se había consti-

tuido la Sociedad de Aguas de Alicante (*Société des Eaux d'Alicante*) en la que participaba la sociedad belga *Compagnie Générale des Conduites d'Eau*, que obtendría el monopolio de abastecimiento.

El crecimiento de la población y de las actividades económicas trajo consigo una expansión urbanística que finalmente quedaría modelada en el Plan de Ensanche puesto en marcha en 1896, pero en los años anteriores el desarrollo urbano alentó el interés por el sector de la construcción. El exponente más claro será el barrio de Benalúa, que resume las expectativas de inversión de un sector de la burguesía urbana. Su construcción fue promovida en 1883 por la sociedad anónima *Los Diez amigos*, en la que figuraban destacados representantes de la oligarquía local como Amando Alberola, José Carratalá Cernuda, Pedro García Andreu y el Marqués de Benalúa, y el proyecto fue diseñado por el arquitecto Guardiola Picó. Algunos de los promotores de esta iniciativa lo serán también de la puesta en marcha del tranvía urbano, para lo que se creaba en diciembre de 1892 la sociedad *Los Nueve*. El negocio de los transportes urbanos, que pretendía extenderse a las comunicaciones de la capital con los pueblos de la huerta, no respondió en los primeros años a las expectativas económicas que esperaban los inversores, tomándose por ello la medida de reducir las tarifas, con lo que el tranvía se convirtió en el medio de transporte urbano usual entre la población alicantina.

La utilización de la electricidad suscitó el interés de la burguesía alicantina en los albores de la centuria actual y, especialmente, las posibilidades que ofertaba al alumbrado público. En enero de 1857 el Ayuntamiento contrató con la sociedad *Melitón Martínez y Cía* el establecimiento de un gasómetro. La iluminación por gas se inauguró en 1861 y diez años después, tras varias transferencias, se hizo cargo de ella la *Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por gas*, cuyos derechos expiraban en 1900. Ante la probable conversión eléctrica del alumbrado urbano nació en 1890 la empresa de suministros eléctricos de los comerciantes Guillermo Campos Carreras y Hugo Prytz. Más directamente relacionada con la posible electrificación de la red tranviaria se fundaba en 1900 *La Electra Alicanti-*

na S.A. por iniciativa del también comerciante Ramón Guillén López y en ella participaban algunos miembros del consejo de administración de la sociedad concesionaria del tranvía que en esas fechas preparaba el traspaso de sus derechos a la sociedad belga *Compañía General de Ferrocarriles Vecinales de España*, que construirá asimismo los tranvías de cercanías de la capital a San Vicente, San Juan y Crevillente.

La crisis finisecular

A finales de los años ochenta, la vinicultura alicantina comienza a atravesar dificultades por el descenso de los precios del vino a consecuencia del exceso de producción, como reconocía en 1887 la Cámara de Comercio de Alicante en la información recogida en *La crisis agrícola y pecuaria*. En esa coyuntura depresiva los vinateros reclamaban protección y se movilizaban en contra de los alcoholes industriales, pues pretendían desviar los excedentes vinícolas a la fabricación de alcoholes, enfrentándose con ello a los comerciantes representados en la Cámara que no compartían sus demandas protectoras y defendían posturas librecambistas en esta cuestión. En un mítin celebrado el 17 de agosto de 1887 en el Teatro Principal, la burguesía vinatera de Alicante y Murcia que lideraba Juan Maisonnave se congregó para expresar públicamente sus reivindicaciones que serían transmitidas en una exposición al ministro de Fomento.

Al exceso de producción vinícola vino a sumarse la denuncia del tratado comercial con Francia que, si bien no afectaría de forma inmediata a Alicante dado que en esos años finiseculares se lograron las cifras más elevadas de exportación, supuso el inicio del declive de la producción vinatera y un factor de crisis, como exponía el *Boletín de la Cámara de Comercio* en mayo de 1894 en referencia a la crisis obrera: “el desastre debía necesariamente producirse al expirar los tratados que permitían la extracción en gran escala de la producción siempre en aumento de esos viñedos”. La solución para la burguesía vinculada a la producción y comercialización de vinos era evidente: insistían en la necesidad de fomentar la exportación vinícola con la firma de

convenios comerciales con otras naciones y se oponían las tesis librecambistas que tradicionalmente había defendido la burguesía alicantina a la orientación proteccionista que en materia comercial se imponía en España con la puesta en vigor del arancel de 1891. Con esos objetivos se creaba en los primeros años del siglo XX el *Sindicato de Exportadores de Vino de Alicante*, pero una pronunciada sequía y la aparición de los primeros brotes filoxéricos en 1904 arruinaban las cepas y marcaban el retroceso de la vinicultura alicantina.

El impacto social de la crisis fue inmenso en una ciudad comercial como Alicante y su incidencia fue mayor por la contracción del tráfico mercantil y la coincidencia con las crisis agrícola general de fines de siglo. Las dificultades de la agricultura cerealista española y las crecientes barreras arancelarias a la entrada de grano extranjero encarecían el precio del pan y de los artículos de primera necesidad y sus efectos no tardaron en dejarse sentir con especial incidencia en los sectores populares y obreros: paro, delincuencia, mendicidad, incremento de la emigración al Norte de Africa. De la crisis obrera finisecular existen numerosos testimonios, como el recogido por Guardiola Picó en su contestación al *Cuestionario propuesto por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación* en 1895: “el obrero no consigue nunca el jornal con el que poder llevar el pan a sus hijos, mientras la miseria va extendiéndose como la mancha de aceite y tomando carta de naturaleza en esta antes rica y próspera región”. Sin embargo, la crisis económica también afectaba a los comerciantes y a la pequeña y mediana burguesía local por la contracción comercial y la creciente imposición fiscal de la Hacienda estatal por la guerra colonial y de la administración local; “la voracidad de un fisco despiadado que (...) atropella por todo para salvar al Erario público a costa de la fortuna privada”, nos dirá la Cámara de Comercio en el informe de 1894 citado anteriormente.

En una situación tan deteriorada, no es extraño que estallase con toda virulencia la conflictividad social y la chispa fue precisamente la imposición de nuevos impuestos municipales. A mediados del mes de mayo de 1896, la Corporación presidida por el Alcalde conservador José Forner Pascual del Pobil y Mar-

tos, Barón de Finestrat, aprueba un presupuesto que contempla un sustancioso incremento en virtud de la aplicación de nuevos arbitrios —alguno de los cuales gravaba preferentemente al pequeño y mediano comercio local— con el objetivo, como se reconocía después, de atender “las mejoras materiales de reforma, engrandecimiento y ornato de la población”. Este sector del comercio, organizado en la denominada Junta de Defensa del Comercio, inició en los días finales del mes de junio una movilización contra la decisión municipal que desembocaría en un motín con una importante participación popular. Al cierre casi general de comercios y a la acción de los comerciantes —más de seiscientos se dieron de baja en la contribución—, se sucedieron en los días 2 y 3 de julio algaradas callejeras con el apedreamiento de edificios públicos y casas particulares y la quema del fielato de consumos sito en el muelle. Los sucesos provocaron la concentración de tropas militares y la declaración del estado de guerra hasta que, tras las negociaciones promovidas por diversas entidades locales y los partidos políticos, se resolverá el conflicto.

Pero la depresión económica subsistía y el deterioro de la situación de las clases medias y obreras y la conflictividad social crecían. En 1898 se producía un nuevo motín con una manifestación popular que impedía la salida de un cargamento de patatas hacia la ciudad francesa de Cette y quemaba las casetas de consumo, acto que se repetiría de nuevo al año siguiente. Estas manifestaciones de descontento popular son exponentes, en suma, de la coyuntura económica recesiva y convulsiva desde el punto de vista político y social que marcaba en la ciudad de Alicante el fin de siglo y el inicio de la centuria actual.

Las clases trabajadoras y la formación del movimiento obrero

En el Alicante de la Restauración la polarización social es una realidad incuestionable. Como se ha expuesto en páginas anteriores, son éstos unos años de expansión económica y crecimiento de las actividades productivas que redundarán en volumi-

nosos beneficios para la burguesía local, pero también son años de crisis y miseria para aquellos sectores que constituían la mayoría de la población alicantina: las clases trabajadoras.

El análisis de los padrones municipales refleja que a lo largo del siglo XIX se produjeron variaciones en la estructura socio-profesional de la capital, siendo patente el incremento constante de jornaleros –trabajadores a jornal– y la creciente proletarización, de forma más acusada en el último cuarto de siglo. Las transformaciones agrarias y los procesos desamortizadores traen como consecuencia la proletarización rural, que se irá incrementando a medida que se consolide el desarrollo capitalista de la agricultura. Pero no todos los jornaleros realizan tareas agrícolas, un amplio sector de ellos son asalariados urbanos que trabajan a jornal en el ferrocarril, los muelles y almacenes comerciales; mozos de carga y descarga, peones de obras o trabajadores eventuales del Ayuntamiento en la limpieza y arreglo de calles, obras públicas, recogida de basuras. Además, hay que contar también a una numerosa población flotante que emigra desde las comarcas rurales del interior hacia la capital en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida.

En otro orden de cosas, es necesario constatar que el trabajo de las mujeres era usual en el Alicante finisecular, pues en estos años de crisis el trabajo femenino aportaba un complemento fundamental en la precaria economía de la familia campesina y obrera. Las labores del esparto, el trabajo doméstico y la Fábrica de Tabacos serán las tres actividades básicas que acogen a la mujer trabajadora alicantina.

Numerosos testimonios coetáneos dan idea de las pésimas condiciones de existencia y de trabajo de estos sectores de la población. Como apunta Francisco Moreno Sáez, salarios insuficientes –de dos a tres pesetas diarias como promedio general–, utilización muy frecuente del trabajo a destajo –Fábrica de Tabacos y conservas–, jornadas laborales muy amplias –de diez o doce horas en la industria, del sol a sol en la agricultura– y falta de previsión y de adecuadas condiciones de trabajo son las notas características del trabajo obrero en el Alicante de esos años. En noviembre de 1899 el concejal republicano Guardiola Ortiz proponía al Ayuntamiento el establecimiento de la jornada de ocho

horas con un salario mínimo de dos pesetas y cincuenta céntimos para los obreros que contratase el Ayuntamiento y como cláusula indispensable en las contrataciones de obras y servicios que dicha institución celebrase en lo sucesivo. La proposición fue aceptada por la Corporación, pero la Diputación la invalidó en atención al recurso de alzada presentado por los concejales Martínez Torrejón y Martínez Blanquer, que consideraban que “dicho acuerdo queda fuera de las atribuciones del Ayuntamiento e invade las funciones legislativas poniendo trabas a la libertad de trabajo y a la potestad individual para contratar”.

En las condiciones de trabajo, la falta de previsión, higiene y seguridad era notoria y ello favoreció la expansión del movimiento cooperativista y de las sociedades de socorros mutuos. A este respecto, Evaristo Manero en sus *Estudios sobre topografía médica de Alicante*, denuncia a las deficiencias del ámbito de trabajo habitual de las cigarrerías alicantinas: “las condiciones perniciosas del edificio que las reúne están muy distantes de lo que la higiene preceptúa. El hacinamiento tumultuario, la posición sedentaria, el abstenerse o detener ciertos actos y necesidades animales (...) hacen de aquel edificio un semillero fecundo de procesos mórbidos”.

La alimentación y adecuación de las viviendas obreras queda asimismo lejos de los mínimos indispensables. Su alimentación se reduce a pan de segunda clase —de cebada, maíz o de mezcla de harinas de distintos cereales—, arroz, verduras y pescado salado o frito. Sánchez Santana y Guardiola Picó señalan en su *Memoria Higiénica de Alicante* que “algún día mejoran algo su alimentación y comen el clásico cocido, pero esto no sucede más de ocho veces durante el año”. La carne es prácticamente inexistente en la dieta de estos sectores obreros, como sigue señalando esta memoria pues “resulta que si (la familia obrera) gana ocho o diez reales al día y necesita tres para pan, no le resta más que cinco o siete para los demás gastos de casa, vestido y alimentación”. El mismo documento nos da idea de las precarias condiciones de las viviendas obreras, destacado su escasa habitabilidad y salubridad, y del entorno de los barrios obreros en el que se observa “la falta total de agua, la poca limpieza de las calles y la miseria más completa”.

La organización del movimiento obrero. El nacimiento del socialismo

El escaso desarrollo industrial de la ciudad de Alicante y la pervivencia del sector artesanal limitó la configuración de la clase obrera y del movimiento obrero. En los primeros años de la Restauración el ambiente restrictivo no alentó el surgimiento del obrerismo y sólo a partir de 1881 con la formación del Gabinete liberal presidido por Sagasta comienzan a organizarse las primeras sociedades obreras como la cooperativa de socorros mútuos denominada *Asociación de Panaderos*. En ese contexto de mayor permisividad nació en octubre de 1881 la *Sociedad de Obreros de Alicante* dependiente del Consejo local de la Federación de Trabajadores de la Región Española y un año más tarde una sección local de la *Asociación del Arte de Imprimir*, que participaría en el I Congreso de la Federación Tipográfica Española. Estas primeras sociedades y organizaciones obreras tendrían una corta existencia, desapareciendo poco después de su fundación, aunque surgirán otras iniciativas, en muchos casos vinculadas al republicanismo.

En los años finales del ochocientos, el progresivo deterioro de la situación de las clases populares y obreras por la recesión económica, el encarecimiento de los comestibles y sus penosas condiciones de existencia, facilitarían la penetración de las doctrinas proletarias. En este proceso tiene especial relevancia la primera conmemoración del Primero de Mayo en 1890 que tendrá en la capital alicantina una cierta repercusión. A raíz de este acontecimiento, los tipógrafos Rafael Carratalá –corresponsal en Alicante del periódico *El Socialista* desde finales de la década de los ochenta– y Federico Valero fundarán el Centro Obrero de la calle Liorna, que un mes más tarde contaba ya con más de cuatrocientos socios. Ese mismo verano la Comisión que buscaba un local para el Centro Obrero se constituyó en la agrupación socialista de Alicante y comenzó a publicarse el semanario socialista *El Grito del Pueblo* bajo la dirección de Valero.

El 29 de diciembre de 1890 llegaba a la ciudad Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, con el objeto de hacer propaganda de las tesis socialistas y formalizar la

organización del socialismo en Alicante. Durante su visita, dió una charla en el Centro Obrero y un mítin en el Teatro Circo que congregó a unos mil oyentes. Finalmente, el 21 de enero de 1891 quedaba configurada la agrupación local, en la que figuraban, junto a Carratalá y Valero, otras figuras del primer del socialismo alicantino como Joaquín Adrián o Guillermo Rameta.

En las elecciones legislativas de ese mismo año, los socialistas presentarán en la circunscripción de Alicante al obrero Francisco Jaén Alfonsea, que obtendrá 257 votos y en las elecciones siguientes celebradas en 1893 los candidatos socialistas Pablo Iglesias y Joaquín Adrián obtuvieron 151 y 136 votos respectivamente. De forma paralela, la organización socialista va conformándose lentamente. En 1892 Pablo Iglesias visitará de nuevo la capital, que estará representada por José Cuartero en el III Congreso del PSOE, celebrado en Valencia ese mismo año. En el IV Congreso, el representante alicantino Federico Valero tuvo una destacada actuación en el mítin de clausura en el que participaron Iglesias, Sanchís y García Quejido. Sin embargo, a finales de siglo, el crecimiento del partido se ha ralentizado y los fracasos electorales del joven socialismo se demuestran en los resultados de las legislativas de 1896 y 1899, en las que candidatos como Jaime Vera, Miguel de Unamuno y el propio Pablo Iglesias no podrán rebasar las cifras de votos obtenidas por las candidaturas socialistas en las primeras convocatorias por sufragio universal. Tampoco en las elecciones de ámbito local lograrán los socialistas buenos resultados, aunque su presencia en algún distrito municipal como el de San Antón empezaba a consolidarse.

Así comenzaba a dar sus primeros pasos el socialismo alicantino, mientras que la presencia del anarquismo, la otra gran corriente de organización del proletariado, era prácticamente nula en la capital, a pesar de la implantación que tenía en la vecina ciudad de Alcoy.

El progresivo deterioro de la situación obrera en la coyuntura de la crisis finisecular favorecerá una creciente concienciación y conflictividad obrera puesta de manifiesto en las huelgas protagonizadas por los albañiles y canteros de las obras del barrio de Benalúa en 1892 o los obreros portuarios en 1899.

Con la configuración del socialismo en los años finales del siglo XIX, como ha señalado Francisco Moreno, el movimiento obrero alicantino iba adoptando de forma muy lenta, pero progresiva, sus propios planteamientos al compás de la creciente toma de conciencia de sus difíciles condiciones de vida y trabajo. No obstante, un amplio sector del proletariado se mantuvo estrechamente vinculado a la línea societaria, mutualista y cooperativista propia del reformismo republicano de signo pequeño burgués, vinculación que favorecía el escaso nivel de industrialización de la ciudad y la persistencia del sector artesanal.

Para el pensamiento social republicano, la asociación mutualista y cooperativa es uno de los principales mecanismos de emancipación obrera. La importancia del republicanismo en el Alicante de finales del XIX radica en gran medida en su destacada influencia en los medios obreros y populares y la concreción del tibio reformismo republicano ante la cuestión social dará lugar a la creación de varias cooperativas y ateneos populares en la ciudad. La más importante, sin duda, fue la sociedad cooperativa *La Fraternal*, vinculada al Partido Republicano Federal a través de su presidente honorario Vicente E. Miquel, presidente a su vez de la Junta provincial del partido. Fruto también del reformismo republicano fue la fundación en 1877 de la Caja Especial de Ahorros por un activo grupo de republicanos que consideraban el ahorro como un medio de corrección del conflicto social; “apagando, este lenitivo (el ahorro) los odios de casta”, decía el diario posibilista *El Graduador* alabando la iniciativa. En los años finales del XIX se nota una cierta prevención del republicanismo ante la lenta pero creciente presencia socialista, aunque la vinculación de la clase obrera alicantina a los partidos republicanos se mantendrá hasta bien entrado el nuevo siglo.

El asociacionismo obrero de carácter mutualista y cooperativista no exento en ocasiones de un fuerte gremialismo —asociacionismo en razón de la profesión u oficio— se verá impulsado también, aunque desde una óptica ideológica distinta del republicanismo, por el reformismo católico, que encuentra su formulación teórica en las encíclicas de León XIII y la doctrina social de la Iglesia y un ardiente defensor en el obispo de la diócesis, Maura Gilabert. En la ciudad de Alicante, el asociacionismo

católico no tendrá el eco que alcanzará en otros lugares de la provincia y del País Valenciano y, de hecho, su mayor realización, el *Círculo Católico de Obreros*, tendrá, según Emilio La Parra, un carácter casi exclusivamente recreativo y una breve trayectoria de 1892 a 1899. El pensamiento social católico, controlado por los sectores más integristas del ámbito local, influirá, empero, en la constitución de algunas cooperativas de consumo como la denominada *Instrucción y Trabajo*, en la que participarán también algunos representantes del republicanismo más conservador.

Cultura y educación en Alicante durante la Restauración

En estos años finales del siglo XIX la ciudad de Alicante irá consolidando la función cultural propia de su capitalidad y se mostró receptiva a las corrientes y fenómenos culturales más importantes de la época, como pone de relieve la crecida nómina de actividades, asociaciones culturales y artísticas y de periódicos y publicaciones periódicas de finalidad cultural.

En el ámbito de la literatura local, que ha sido minuciosamente estudiado por Juan Antonio Rios Carratalá en su libro *Románticos y Provincianos*, se señala una voluminosa producción que, aunque de escasa entidad literaria, es exponente del ambiente cultural de una ciudad de provincias de aquellos años. Autores como Nicasio Camilo Jover, que cultivó la novela histórica –*Las amarguras de un rey* y *El Rollo de Villalar*– y la crónica –*Reseña histórica de Alicante*–; los poetas Juan Vila Blanco, Alejandro Harmsen y Carmelo Calvo, y en la producción dramática Juan Alemany Limiñana o Rafael Carratalá Ramos son los representantes de la literatura alicantina de aquellas décadas, que no rebasó la “literatura de género” pero que fue un fiel reflejo de las coordenadas culturales e ideológicas en que se asentaba el fenómeno histórico de la Restauración. A este respecto, debemos señalar que la mayoría de estos autores fueron también activistas políticos y publicistas destacados en la prensa local. En los comienzos de la centuria actual este panorama comenzará a variar con la aparición de figuras como Rafael Altamira, Gabriel

Miró o Carlos Arniches, representantes de una nueva generación cuya significación en el mundo literario y cultural traspasa evidentemente el marco local y provincial.

Con la Restauración prolifera en Alicante una práctica literaria ligada a la actividad social de los sectores más acomodados de la población: las veladas literarias. En ellas se leían composiciones literarias –generalmente poéticas–, se representaban obras dramáticas de corta duración y se escuchaban algunas piezas musicales, sirviendo como colofón a una brillante gala social de alguno de los representantes más destacados de la burguesía local, como Alejandro Harmsen, los Ausó, los Campos Vassallo, o de algún acto político como las veladas organizadas por el Círculo Liberal-Conservador. También se celebraban certámenes literarios y juegos florales organizados por las instituciones de carácter cultural o asociativo como el Casino y la Sociedad Económica de Amigos del País.

Muestra asimismo de la actividad cultural alicantina en esta época es la multitud de asociaciones de este tipo que existen en la ciudad, entre las que podemos señalar por su proyección social el Casino, el Ateneo, la *Sociedad Literaria de Alicante*, la sociedad literaria *El Iris* y la *Asociación de Periodistas*. En ellas se reunían personalidades destacadas de la burguesía comercial y del ámbito profesional y educativo local.

Frente a este tipo de sociedades de composición preferentemente burguesa, encontramos otras que, sin perder sus contactos con los sectores más acomodados de la sociedad, tendrán una gran influencia sobre las clases obreras y populares como los ateneos republicanos, círculos librepensadores y logias masónicas, junto a las asociaciones obreras propiamente dichas –círculos, ateneos y cooperativas– que comienzan a aparecer en los años finiseculares.

El alto índice de periódicos y publicaciones periódicas que se publican en Alicante constituye un reflejo más de la actividad cultural de la capital. Como ha observado Emilio La Parra, junto a la prensa política, –*El Graduador*, *El Liberal*, *La Unión Democrática*, *La Monarquía*, etc. – encontramos otro tipo de publicaciones como las satíricas y humorísticas no exentas en ocasiones de un marcado carácter político –*El Cullerot*–; las literarias –*El*

Album Poético, La Miscelánea, La Academia—; las dedicadas a la mujer —*El Bello Sexo*— y aquellas relacionadas con colectivos económicos y profesionales —*Revista de Instrucción Pública, La Vinicultura, Boletín de la Cámara de Comercio, Boletín del Colegio de Médicos y Farmacéuticos*—. También debemos reseñar la prensa confesional católica —*El Semanario Católico*—; las revistas conectadas a determinadas corrientes ideológicas como el espiritismo, la masonería y el librepensamiento —*La Revelación, La Humanidad, El Alicantino Masón, El Crisol*— y, finalmente, la prensa obrera representada por el *Boletín de la Sociedad Cooperativa de Obreros “Instrucción y Trabajo”* y *El Grito del Pueblo*.

Al trazar el panorama cultural del Alicante ochocentista, es necesario referirse, si bien escuetamente, al amplio eco que encontraron en la sociedad alicantina determinadas corrientes ideológicas de marcado carácter heterodoxo, dado que ellas fueron en cierta medida representantes de la crítica a la cultura “oficial” de la España restauracionista. En primer lugar, destaca la masonería que alcanzó en estos años un desarrollo espectacular con la existencia, según Ferrer Benimeli, de más de catorce logias. De todas ellas las más importantes fueron la *Alona*, que contó con Eleuterio Maisonnave entre sus miembros y la *Constante Alona*, que publicaba la revista *La Humanidad*. El espiritismo alcanzó también una gran aceptación con la creación de la *Sociedad de Estudios Psicológicos*, que dirige el republicano Manuel Ausó Monzó, catedrático de Ciencias Naturales del Instituto, y de la revista *La Revelación*, que popularizó la doctrina espiritista de Allan-Kardec. Junto a la masonería y el espiritismo, en Alicante se desarrolló un importante movimiento librepensador, que tomó carta de naturaleza con la creación del grupo “Paz” y la revista *El Crisol*. Los continuos debates y enfrentamientos entre estas revistas y la prensa católica pondrán de relieve el clima de crispación ideológica de la España de finales de siglo.

Con respecto a la enseñanza, Alicante contará a lo largo de esos años con mayores dotaciones, aunque la infraestructura educativa en los inicios del nuevo siglo es todavía muy deficiente y las tasas de analfabetismo elevadas. En la ciudad existe un

Instituto de Segunda Enseñanza fundado en 1847 y varias escuelas primarias que, como ha observado Miguel Angel Esteve, siguen siendo insuficientes para la población alicantina. Uno de los principales problemas que afectan a estos centros públicos es la falta de dotación económica tanto para su mantenimiento y mejora como para el pago de los salarios de maestros y enseñantes. El penoso estado económico del Ayuntamiento y la Diputación obligaba frecuentemente a estas instituciones a incumplir sus obligaciones en el ámbito educativo, provocando las quejas del profesorado y su movilización.

En esta época se consolidarán también otros tipos de enseñanzas técnicas o especializadas, en muchos casos en estrecha relación con las características socio-económicas de Alicante, como la Escuela de Comercio fundada en 1887, la Escuela de Artes y Oficios promovida en 1886 por la Sociedad Económica de Amigos del País y la Escuela Náutica.

La enseñanza privada se vió alentada por las dificultades que limitaban el desarrollo de los centros públicos. Entre las escuelas de índole privada –en su mayoría laicas hasta que en los primeros años del siglo XX se fueron asentando las pertenecientes a las órdenes religiosas– destacará el Colegio “La Educación” que, fundado en 1872 por Antonio Segura Escolano, impartía enseñanzas de parvulario, primaria y algunas asignaturas de segunda enseñanza a alumnos externos y en régimen de internado. En el campo educativo debemos señalar también la labor realizada tanto en el ámbito de la educación de adultos como infantil por algunas asociaciones y círculos como las escuelas laicas de los centros librepensadores, masónicos y espiritistas, que representaban una opción educativa diferente frente a la tradicional basada en la moral católica y que conectarán con los presupuestos de reforma educativa y pedagógica de los que fue baluarte la Institución Libre de Enseñanza, de la que serían accionistas personajes tan destacados de la vida social y cultural alicantina como Eleuterio y Francisco Maisonnave, Manuel Ausó Arenas, Saturnino Milego Inglada y José Guardiola Picó.



LA LITERATURA (1839-1939)

JUAN ANTONIO RÍOS CARRATALÁ
Universidad de Alicante



LICANTE es la ciudad natal de algunos destacados escritores anteriores al siglo XIX, como por ejemplo el novelista dieciochesco Pedro Montegón o el polígrafo Manuel Martí. Pero hasta la llegada de la época del Romanticismo no podemos hablar de una vida literaria en la ciudad con entidad propia. Algunos nombres aislados —la mayoría de individuos que salieron de Alicante siendo adolescentes— y determinados títulos sin continuidad impiden plantear una historia de la literatura en la capital alicantina hasta el período romántico.

Sin embargo, la situación cambia sustancialmente desde finales de la década de los treinta por varias razones. El afianzamiento social y económico de la ciudad permite la aparición de un núcleo local de individuos de la clase media y la burguesía que, al igual que en otras capitales provincianas de entonces, es capaz de desarrollar una vida literaria en todas sus facetas. La todavía tímida aparición de la prensa local que tanta influencia tendrá en el ámbito literario, la implantación de determinadas asociaciones de carácter cultural —el Liceo Artístico y Literario fue fundado en 1838—, el incipiente desarrollo de la imprenta en la ciudad, la inauguración en 1847 del Teatro Principal y, sobre todo, el auge que en la mayor parte de España alcanzan la burguesía y las clases medias como sustentadoras de una vida cultural, que ya no se ciñe exclusivamente a Madrid y otras importantes ciudades, son factores que nos permiten hablar con propiedad de la literatura en Alicante desde finales de la década de los treinta.

Esta coyuntura supone que todos los factores de la actividad literaria se dan efectivamente en nuestra ciudad. La existencia del lectorado es obvia. No tenemos datos estadísticos acerca del consumo literario de los alicantinos durante el siglo XIX y la documentación que podemos manejar al respecto posee un escaso valor. No obstante, las referencias de muy diferente tipo que acerca del mismo aparecen en la prensa local nos permiten supo-

ner que estuvo en consonancia con las orientaciones básicas del lectorado español de la época.

Sabemos con seguridad que en Alicante se lee a todos los autores españoles importantes de entonces. Los periódicos locales recogen numerosas referencias a los mismos y, por otra parte, es fácil constatar su influencia en los autores alicantinos. En cuanto a los extranjeros, aparte de la difusión de traducciones publicadas en otras capitales, en Alicante se edita a partir de la citada década a muy destacados autores, sobre todo novelistas franceses de gran impacto popular como Alejandro Dumas. Es impresionante la cantidad de traducciones publicadas —y, por desgracia, perdidas— en los folletines de los periódicos locales o ya directamente en su forma de libro. Este dato, junto al interés crítico demostrado por un sector de la sociedad alicantina, supone la existencia de un lectorado que sintoniza con los gustos generales del de la España de entonces. La novela histórica y de folletín, la poesía al estilo de José Zorrilla —el Poeta para muchos alicantinos durante todo el siglo XIX—, el romanticismo apasionado a lo Víctor Hugo y, más adelante, la introducción de autores como, por ejemplo, Pérez Galdós o la novelística de aventuras de Alejandro Dumas... son datos que permiten asegurar que el lectorado alicantino del siglo XIX no fue ajeno a ninguna de las corrientes básicas de la literatura de la época.

La pujanza de ese lectorado acabó provocando la aparición de autores locales que también sintonizaron con la mayoría de dichas corrientes. El Romanticismo, un determinado tipo de Romanticismo, tuvo un importante eco en las capitales provincianas y Alicante no fue una excepción. Desde la década de los cuarenta y hasta prácticamente finales del siglo en nuestra ciudad proliferan los autores que con variable fortuna cultivaron una literatura romántica. Así se explica el éxito de géneros como la novela histórica, de la cual hay numerosas expresiones hasta finales del siglo XIX, la poesía al estilo zorrillesco —o “el zorri-llismo estético” en términos unamunianos— y otras manifestaciones de un Romanticismo poco audaz, en absoluto vinculado a nombres paradigmáticos de la rebelión romántica como Larra o Espronceda y que se convirtió en la tendencia dominante hasta finales de siglo.

De entre los autores alicantinos que podemos englobar dentro del Romanticismo, cabe destacar a Nicasio Camilo Jover (1821-1881). Formado literariamente entre Madrid y Alicante, publicó varios volúmenes de poesías y novelas históricas que responden dignamente a las directrices básicas de dichos géneros, tal y como los entendían los románticos de la época. La inevitable Edad Media, con toda su carga de caballeros y aventuras, sus encantadoras damas y los amores melancólicos y desgraciados, se convirtieron en tópicos que también se plasmaron en las novelas de este y otros autores alicantinos. En ningún momento se alcanzaron cotas de considerable brillantez literaria, pero hay algunas obras que por su corrección y cierto encanto de época convendría subrayar. Este es el caso de las dos más destacadas de Nicasio Camilo Jover, *Las amarguras de un rey* (1856) y *El Rollo de Villalar* (s.a), que constituyen el ejemplo más digno de un género que encandiló a los lectores alicantinos.

Otro autor afincado en Alicante que destacó dentro de la novela histórica es el curioso y polifacético José Pastor de la Roca (1824-1875). Lejos de la corrección y sobriedad de Jover, su grandilocuente estilo lo encontramos en novelas por entregas –fórmula editorial muy en boga por entonces– donde se desarrollan las más truculentas historias. Un ejemplo es *La llave de oro o los orientales* (1848), cuyo éxito entre los alicantinos está en consonancia con la degeneración que por entonces se da en la novela histórica, cada vez más próxima a la novela de aventuras históricas donde todo es posible para satisfacer los deseos de un lectorado mayoritario.

Pero mucho antes de que Pastor de la Roca acabara escribiendo novelas espiritistas que eran recomendadas por las revistas de la misma escuela editadas en Alicante, publicó una sorprendente novela titulada *La República Roja o los obreros de París* (1849), teóricamente ambientada en los sucesos de la revolución parisiense de 1848. Cuando la mayoría de los autores publicaban aventuras históricas o escenas costumbristas, que un joven de provincias intentara plasmar novelísticamente aquellos sucesos revolucionarios, tan sólo unos meses después de producirse, resulta sorprendente. No cabe duda de que si Pastor de la Roca hubiera conseguido trasladar a la literatura estos hechos

—que él sólo conocía a través de la prensa—, estaríamos ante un auténtico punto y aparte dentro de la novelística española. Pero la realidad es muy diferente, y tras la expectativa creada por el tema elegido llega la desilusión de encontrarnos ante un relato de aventuras folletinescas similar a los que tanto gustaban a los lectores de la época.

El tercer autor que podemos recordar dentro del Romanticismo en Alicante es el poeta Juan Vila y Blanco (1813-1886). Este pulcro creador de poesías para doncellas casaderas y damas católicas fue una verdadera institución para el resto de los vates locales, reunidos en torno a una figura y una obra que se prolongan hasta la Restauración. Sus elegantes y moralizadoras rimas están dirigidas a las mujeres acomodadas de la sociedad alicantina preocupadas por los temas propios de su condición: la religión y sus obligaciones como esposas y madres. Su lectura, relegada al interés de lo curioso, nos permite conectar con una mentalidad muy propia de determinados sectores de la sociedad alicantina de mediados del siglo XIX.

Podríamos citar otros autores de este período, la mayoría de ellos funcionarios o profesionales que colaboraban en la prensa local y participaban en los frecuentes certámenes poéticos que se celebraban en Alicante. Pero su obra apenas tiene un relieve peculiar, como tampoco lo tuvo en buena medida el romanticismo cultivado en dicha ciudad.

Los autores alicantinos se limitaron a ser un bienintencionado eco de las grandes corrientes literarias que, dentro del propio Romanticismo, circulaban por España. Algunos de ellos viajaron a Madrid y estuvieron en contacto con el mundo periodístico y literario de la capital. Todos ellos leían las obras allí publicadas, y esa era su fuente casi exclusiva. Escribieron una literatura romántica a imitación de unos modelos que les causaron fascinación; unos modelos —entre los cuales apenas figura Espronceda y Larra, ni tampoco los grandes románticos europeos a excepción de Victor Hugo— que se adecuaban perfectamente al ambiente literario de una ciudad de provincias, donde la poesía se había convertido en una manifestación propia de determinados círculos sociales y donde las novelas históricas y los folletines saciaban las escasas y convencionales ansias de aventura de

aquellos sujetos. Quizá por esa adecuación fueron tantos los alicantinos que sin conocer lo que supuso la “rebelión romántica” fueron románticos como el inolvidable Trifón Cármenes, personaje de *La Regenta* clariniana que ejemplifica al literato provinciano de la época.

En 1847 se inauguró el Teatro Principal, que tendrá a partir de entonces una gran incidencia en el desarrollo de la vida cultural alicantina. Durante las décadas siguientes apenas encontramos obras teatrales escritas por alicantinos —la única excepción notable fue Juan Alemany Limiñana—, pero es indudable la gran afición que tuvo Alicante a todo tipo de manifestación teatral. La documentación conservada nos permite conocer buena parte de la cartelera de aquellas décadas, y podemos afirmar que casi todos los autores y obras destacados dentro del panorama teatral español fueron representados en el Teatro Principal. Tal vez sobresalgan por su frecuencia los géneros musicales (óperas, zarzuelas), interpretados por famosos cantantes de la época que provocaban el entusiasmo del público, según cuentan las reseñas de las representaciones publicadas en la prensa local. Pero el Teatro Principal fue también el escenario de otros géneros y si empezó con una obra romántica como *Guzmán el bueno*, de Gil y Zárate, acogió después a clásicos como Moratín y Calderón, a autores de éxito por entonces como Echegaray y terminó el siglo con representaciones de Pérez Galdós. En definitiva, una cartelera heterogénea donde las únicas constantes son la indiscutible afición teatral de los alicantinos y su preferencia por los géneros musicales.

1875-1900

Pero la importancia del Teatro Principal —el más destacado de los teatros alicantinos de entonces— no se limita a su función puramente teatral, pues en su seno se celebraron numerosos actos culturales y sociales. Con la llegada de la Restauración empieza la gran época de los juegos florales en España, y Alicante no fue una excepción. En nuestras bibliotecas locales todavía se conservan los folletos que a veces se publicaban con moti-

vo de algún juego floral o cualquier otro tipo de certamen poético, que también tenían su eco en las páginas de la prensa alicantina. La lectura de estas reseñas o folletos nos traslada a un ambiente que nos recuerda el de la vida provinciana tan magistralmente descrita por entonces por Pérez Galdós y Leopoldo Alas. Aquí no tuvimos ningún novelista similar, pero sí una realidad social y cultural que era la materia prima que alimentaba a los citados novelistas. Tanto es así que para comprender el significado de aquellos certámenes poéticos, el ambiente de donde surgían, es preciso ser un buen lector de la novelística de los citados autores porque en ella podemos encontrar las claves precisas.

Los juegos florales eran motivo de encuentro para los sectores más acomodados de la sociedad alicantina en un teatro que, desde su reforma en 1876, se convirtió en un adecuado marco. En ellos participaban todos los poetas locales, que no eran pocos, y algunos foráneos, escribiendo poemas adecuados a las bases del concurso. Estas marcaban que los temas debían ser, por ejemplo, un canto a la belleza de la mujer alicantina, una oda elegíaca dedicada al recuerdo de algún héroe local —Quijano, muy a menudo—, un poema de exaltación patriótica, una composición escrita a imitación de Zorrilla —el poeta por excelencia— o una sentimental defensa de la mujer como madre y esposa. En estos poemas de baja calidad literaria autores como Alejandro Harmsen consideraban el Arte como un elemento de lucha para que “renazca de sus cenizas la España de Calderón” o, según Francisco Alemany, para combatir “la crisis moral, que nos consume” e intenta minar la Fe. Todos ellos ven en la poesía el mundo de lo Ideal, de la Belleza y de la Virtud. Pero lo hacen de una forma convencional y rutinaria que acaba siendo la muestra de una cerrazón absoluta ante las nuevas corrientes de la poesía española de entonces. Gaspar Núñez de Arce o el mismo Campoamor —cuya estancia en Alicante apenas dejó huellas literarias— son poetas leídos, pero no tienen demasiados imitadores entre los vates alicantinos, tan prolíficos y repetitivos en estas veladas que eran más una fiesta social que literaria.

En este ambiente resulta lógico que apareciera la “Sociedad Literaria de Alicante”, que comenzó sus actividades en

1881. Las mismas se prolongaron a lo largo de toda la década, y la publicación de unos folletos que reproducían las composiciones leídas en las sesiones y otros datos nos permiten reconstruir la trayectoria de una Sociedad que ejemplifica las limitaciones de la vida literaria en provincias durante la Restauración.

Por fortuna, los lectores alicantinos no se conformaban con leer sólo las composiciones de los vates locales. Seguían interesándose por las novelas históricas, emocionándose con Zorrilla y Campoamor y disfrutaban con los folletines que aparecían en la prensa nacional o local. Estos últimos —actualmente en proceso de catalogación— tienen una importancia decisiva para conocer los gustos de los lectores alicantinos. Junto a las truculentas historias dignas de lo más puramente “folletinesco”, encontramos en ellos algunas obras notables e incluso traducciones de destacados autores europeos, especialmente franceses. Los escritores alicantinos siempre mantuvieron una relación muy directa con la prensa y también publicaron novelas en los folletines locales. Podemos citar los nombres de Juan Pérez Aznar y Carolina Lauri, autores de novelas sentimentales que harían derramar a mares las lágrimas de un lectorado predominantemente femenino.

Un lectorado femenino al cual se le intentaba mantener alejado de las “novelas materialistas y pornográficas” de la época. Son relativamente frecuentes en la prensa local de los años 80 y 90 los ataques a la novela naturalista, muy en especial a Emilio Zola y Emilia Pardo Bazán, por su “nefasta influencia en las doncellas casaderas”. En esta línea podemos citar la delirante “novela” de Fray Canelles de tan sugerente título como *Los cazadores de fámulas y la víctima inocente* (1892), y el folleto del médico alicantino José Pons Samper titulado *Interview con un manco* (1895), donde se “entrevista” a Cervantes para, entre otras cosas, condenar lo que “no es ni naturalismo ni realismo, sino simplemente obscenismo que se indigesta y produce picores y náuseas”.

Al mismo tiempo que Rafael Altamira publicaba en Barcelona sus lúcidos comentarios acerca del Realismo y el Naturalismo, otros autores alicantinos atacaron a la novela naturalista, asociada indirectamente con la realista al estilo galdosiano,

desde posturas menos pintorescas. En Alcoy, Juan Bautista Pastor Aicart publicó una interesante y documentada obra crítica titulada *La novela moderna* (1886). Y en la prensa alicantina aparecieron los trabajos de Francisco Figueras Bushell, periodista granadino afincado en Alicante que lanzó una campaña contra Emilio Zola, Emilia Pardo Bazán y el Naturalismo en general en nombre de “los derechos del buen gusto, de la decencia y de la moral”.

Francisco Figueras Bushell militaba en el liberalismo de la época, por lo que no hay que pensar que estas posturas radicales frente al Naturalismo fueran privativas de los sectores eclesiásticos o más reaccionarios. En Alicante nadie se pronuncia a favor del Naturalismo, ni tampoco se defiende el Realismo al estilo galdosiano —recordemos que Rafael Altamira publica sus citados comentarios en Barcelona y sus obras editadas en Alicante, por el contrario, se inscriben en una ya desfasada narrativa costumbrista. Estas circunstancias no indican que los lectores alicantinos no conocieran las obras de Zola o de Pérez Galdós, pero no pueden —en un ambiente provinciano como el del Alicante de la época— manifestarse abiertamente a favor de lo que representan estos autores. Si en la prensa alicantina se elogia al novelista canario es, básicamente, por sus *Episodios Nacionales*, nunca por ser el autor de novelas como *Doña Perfecta* o *Fortunata y Jacinta*. Y si así sucedía como lectores, como autores era inimaginable que ningún alicantino osara publicar una novela al estilo galdosiano en su propia ciudad. De ahí que el realismo, en el sentido que le dio la Generación del 68, no tuviera ninguna manifestación creativa entre unos literatos alicantinos que seguían cultivando, a finales del siglo XIX, las obsoletas formas narrativas y poéticas del Romanticismo.

En una ciudad como Alicante, donde el republicanismo y los movimientos progresistas tuvieron una presencia activa, con una prensa que muestra una vitalidad significativa tanto en las épocas favorables como en otras más restrictivas, y en la que conviven grupos espiritistas —con sus propias publicaciones y en estrecho intercambio con parecidas agrupaciones tanto nacionales como extranjeras—, masones —muy ligados al republicanismo y al espiritismo— y librepensadores que tuvieron su propia pren-

sa, hubiera sido de esperar alguna voz discordante con el panorama general de la literatura de la Restauración que hemos visto.

Sin embargo, no sucede así. Podemos anotar algunas novelas de relativa calidad como *La ermita de San Antonio*, de Federico García Caballero y *El boceto de un cuadro*, de Carmelo Calvo Rodríguez, ambas de 1876. Sus autores plasman el espíritu de reconciliación que se intenta defender tras el final de las guerras carlistas, pero lo más importante es que, con sus limitaciones, inician una línea de acercamiento a la realidad inmediata por parte de la novelística alicantina que no tuvo eco. Por contra continuaron las novelas históricas y los folletines, mientras que en la lírica Blas de Loma y Corradi, Alejandro Harmsen, Carmelo Calvo y otros escriben poemas mediocres, propios de una época que todavía no ha “descubierto” a Rosalía de Castro y está muy lejos de la revolución que supondrá el Modernismo. Tal vez el único autor que merece recordarse de entre estos poetas es Salvador Sellés. Este prolífico vate cultivó una entusiasta, ingenua y bien intencionada poesía cívica y de combate al servicio de sus ideales republicanos y espiritistas, consiguiendo así un amplio reconocimiento en su ciudad que se prolongó hasta su muerte ya en la II República.

En medio de este panorama creativo un tanto desolador —que contrasta con las frecuentes referencias a destacados autores nacionales y extranjeros en la prensa local, lo cual indica que estaban presentes en la vida cultural de los alicantinos—, la novela más sorprendente de las publicadas en nuestra ciudad es *Los vencidos* (1892), de Ernesto Bark, el futuro Basilio Soulinake de la valleinclanesca *Luces de bohemia*.

El que sería cofundador del grupo Germinal y uno de los bohemios más destacados del Madrid finisecular vivió y trabajó durante dos años en Alicante. Su citada novela apareció en el folletín de *El Liberal*, periódico clave para la difusión literaria en el Alicante de finales de siglo, y —dado que se trataba de un autor al margen del ambiente provinciano, que había viajado por Europa como activista político y que había manifestado públicamente su aceptación del Naturalismo como literatura adecuada para la nueva juventud española— era de esperar que *Los vencidos* supusiera un punto y aparte dentro de la narrativa publicada en Ali-

cante. Sin embargo, no sucede así. La obra del singular Ernesto Bark es una mezcla de novela de aventuras y folletín, memorias del propio autor, divulgación filosófica, ensayo político e histórico y texto propagandístico. Todo ello teñido de un ya desfasado Romanticismo.

Y poco más de interés podemos encontrar en la creación literaria de los alicantinos del siglo XIX. No cabe duda de que en el Alicante de la Restauración se leía a los grandes novelistas nacionales y se veía representar buena parte de las novedades teatrales. También es cierto que entidades como el Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Diputación Provincial y el Casino tienen un apreciable protagonismo cultural y que la prensa alcanza un notable nivel de calidad. Prueba de ese protagonismo es el movimiento artístico que culminó en 1894 con la Exposición de Bellas Artes auspiciada por la citada Sociedad y, más en concreto, por la labor de Lorenzo Casanova y su círculo alicantino de pintores y escultores. Y, además, debemos hacer constar las inquietudes culturales de los librepensadores, masones, republicanos, espiritistas y otros grupos que desde diferentes perspectivas contribuyeron con publicaciones, actos y demás iniciativas a vitalizar la cultura en Alicante. Pero todo ello, por desgracia, queda fragmentado en un quehacer más curioso que interesante para nosotros. Nos falta, en el campo de las letras, una obra verdaderamente significativa, una aportación sustancial que nos sirva como referencia para recordar la literatura alicantina de aquellas décadas.

1900-1936

No obstante, la situación cambiará durante los últimos años del siglo XIX y el inicio del XX. Gabriel Miró (1879-1930) se está formando en contacto directo con el citado círculo de artistas, Rafael Altamira (1866-1951) ya ha cimentado su incipiente erudición en las bibliotecas particulares de Carmelo Calvo y otros alicantinos, y Carlos Arniches (1866-1943) ya empieza a ser célebre en los ambientes teatrales de Madrid. Con una vinculación muy diferente con su tierra natal, estos tres autores des-

bordarán rápidamente el ámbito local y se convertirán desde perspectivas muy distintas en figuras claves de las letras españolas de la época. Pero lo harán partiendo del mismo ambiente de donde surgirá la pintura de Emilio Varela, la escultura de los Bañuls o la música de Oscar Esplá. Nombres clave de un momento extraordinario de la aportación alicantina —que se completa en el ámbito provincial con figuras tan destacadas como Azorín, Miguel Hernández y Juan Gil-Albert— a un panorama cultural que también en el marco nacional conocía momentos brillantes.

Todavía es muy difícil hacer una historia de la literatura en Alicante durante las primeras décadas del siglo XX, siempre que no sea una simple acumulación de nombres y títulos. Hay bastantes estudios sobre los autores citados y algunos más como Eduardo Irlles, Julio Bernácer, Francisco Figueras Pacheco, o sobre la presencia en Alicante de figuras tan destacadas como el poeta modernista Salvador Rueda, los polémicos José Zahonero y Joaquín Dicenta —fallecidos ambos en nuestra ciudad— y Valery Larbaud. Pero carecemos de una verdadera historia de la literatura que sea algo más que la suma de individualidades, por muy destacadas que éstas sean.

Debemos considerar que Rafael Altamira, tras publicar algunos cuentos y relatos costumbristas de importancia secundaria dentro de su heterogénea producción —*Novelitas y cuentos* (1892), *Cuentos de Levante* (1895) y *Fantasías y recuerdos* (1910)— que guardan una relación directa con Alicante, seguirá unos derroteros que nada tienen que ver con la hipotética historia de la literatura en dicha ciudad. De hecho, la faceta del Altamira costumbrista es una de las menos conocidas.

Esta circunstancia de autores alicantinos ajenos a la historia local de la literatura todavía es más reciente en Carlos Arniches, el cual salió de su ciudad natal siendo un muchacho que sólo había publicado algún poemita en la prensa local y desarrolló toda su obra teatral en Madrid. Es cierto que ambientó algunas obras —melodramas rurales donde se intercalan elementos cómicos— en la huerta alicantina. En concreto, la popular *Dolorettes* (1901) —que fue llevada al cine en 1923 gracias a su continuado éxito—, así como *La divisa* (1902) y *El tío Quico* (1925).

Pero lo convencional y hasta falso de esa ambientación localista apenas nos permite englobar a Carlos Arniches dentro de una hipotética historia de la literatura dramática en Alicante, a pesar del amor que siempre manifestó por su ciudad natal y el interés y reconocimiento con que en la misma se seguían sus éxitos teatrales.

El caso de Gabriel Miró es relativamente diferente. Su mayor permanencia en Alicante —a pesar de las prolongadas ausencias por motivos familiares, académicos y profesionales—, la importancia de determinados círculos locales en su formación intelectual y el papel desempeñado por el ámbito de lo local en su obra novelística convierten a Gabriel Miró no en un autor propio de la historia de la literatura en Alicante, lo cual sería aplicarle una perspectiva empobrecedora para dar cuenta de su obra, pero sí en uno de los autores literariamente más vinculados con su ciudad. Una vinculación no tan fructífera como la mantenida con Orihuela —la levítica Oleza protagonista de sus más conocidas novelas, *Nuestro Padre San Daniel* (1921) y *El Obispo Leproso* (1926), que juntas forman un gran mural de la vida de una pequeña ciudad en la segunda mitad del siglo XIX—, pero capaz de aportarnos algunas sugestivas páginas en las que la ciudad —bajo el nombre de Alcera y Alminia— es observada a través del matizado tamiz de la prosa mironiana.

Ahora bien, para comprender la aportación de Gabriel Miró a la novelística española es necesario ir más allá de los límites de una historia local de la literatura. Sus antecedentes no se encuentran en los autores que hemos visto en el siglo XIX, y sin ser una figura aislada en el panorama local, tampoco creo que pueda hablarse de otros autores que formen un grupo más o menos homogéneo junto con él. Si tenemos dificultades para agrupar al retraído Gabriel Miró dentro del ámbito nacional, intentar hacerlo en el local sería absurdo. En cuanto a su influencia, es notorio que la ejerció en autores tan cercanos como Eduardo Irlés (1883-1954) y la ha seguido ejerciendo en las posteriores promociones de autores alicantinos que siempre le han tenido como figura indiscutible. Sin embargo, lo peculiar y cerrado de su mundo novelístico y las muy especiales características de su prosa apenas hacen posible hablar de influencias

directas y fructíferas en esos mismos autores. Por lo tanto, Gabriel Miró es un autor de Alicante que sólo podemos comprender desprendiéndonos de consideraciones localistas, y así lo ha entendido buena parte de la crítica reciente.

Situar a Gabriel Miró dentro de las corrientes literarias de su época es una tarea compleja. Su independencia estética, su aislamiento voluntario de los círculos literarios, su no vinculación con grupo o escuela alguna y la personalidad tan peculiar de su concepción de la novela hacen polémica la adscripción de Gabriel Miró a las citadas corrientes. Para algunos es un hombre del 98 por el corte espiritual de los individuos que crea y por el ambiente agobiante en que con frecuencia los mueve. Para otros sigue las huellas modernistas en la renovación lingüística; fundamentalmente, por la búsqueda de una expresión individualizada y libre de estructuras prefabricadas, y por poseer un lenguaje sensual al servicio de la belleza. E incluso, dentro del Modernismo o “Neomodernismo” [sic], se ha subrayado su diferenciadora personalidad, como indica Mariano Baquero Goyanes. No obstante, la tendencia en que más se ha insistido a la hora de encuadrar a Gabriel Miró es el Novecentismo. La conclusión que se deduce de esta polémica es que nos encontramos ante un autor con una personalidad literaria muy peculiar, que conecta en determinados aspectos con las corrientes básicas de la innovación literaria de la época.

Y la palabra innovación es clave, pues su novelística es uno de los mejores ejemplos del proceso de “desnovelización de la novela” o, como señala Miguel Angel Lozano, “unos de los más acabados ejemplos –tal vez el más representativo, en nuestro país– de la novela postnaturalista, y su evolución viene a llenar todo el espacio comprendido entre la crisis del naturalismo y el alumbramiento de las vanguardias”. Lo cierto es que frente a la herencia decimonónica de una novelística en donde se procede por acumulación dando cuenta de todos los detalles de la acción, Gabriel Miró busca la intensificación, sugiere, apunta suficientemente, pero no completa el cuadro en todos sus detalles. Él mismo resumió, en 1927, su concepto de novela: “decir las cosas por insinuación. No es menester –estéticamente– agotar los episodios”. Este enfoque le permite conectar con las aportaciones

de una novelística renovadora que propende a la descripción —no sólo de paisajes, sino de personajes, estados anímicos, etc.— y no a la narración; a la integridad, no a la acción; a lo inconexo y no a la concatenación.

Esta renovadora concepción de la novela le planteó serios problemas para obtener en su época el debido reconocimiento a su labor literaria. A pesar de los importantes premios literarios que obtuvo y del reconocimiento en determinados círculos literarios, la incompreensión y el aislamiento fueron relativamente frecuentes en su trayectoria. Pero Gabriel Miró es un valor en alza por lo perdurable de la calidad estética de su prosa, de período lento y poético, capaz de dar cuenta de todos los perfiles, todos los huecos, la superficie íntegra de las cosas que sensorialmente percibe el narrador. Apenas hay acción novelesca, el mundo histórico tiene sólo una relativa importancia en determinadas novelas, la ideología mironiana es secundaria..., pero queda la labor de orfebre de un autor seriamente comprometido con su prosa y que merece, por supuesto, ocupar el lugar más destacado de entre los nacidos en la ciudad de Alicante.

Dicha ciudad por aquellas décadas acogió a autores destacados como Salvador Rueda, Valery Larbaud, Joaquín Dicenta y, más tarde, José Zahonero. El primero en sus repetidas visitas se enamoró en especial de Tabarca y no dudó en expresar poéticamente su deseo de ser enterrado en la misma. Valery Larbaud, gran admirador de Gabriel Miró, es el autor de unas sensibles páginas en las que da cuenta de su estancia, entre 1917 y 1920, en un Alicante tranquilo, acogedor y provinciano. Su diario, ejemplo de sensibilidad ante lo cotidiano, es una de las mejores muestras de la captación de determinados aspectos de una ciudad que le sirvió de reposo y con la que se identificó. El polémico dramaturgo Joaquín Dicenta pasó en Alicante diferentes períodos, manteniendo con la misma una importante vinculación, puesta de manifiesto por el eco que tuvo en la prensa local su muerte en 1917. El novelista José Zahonero, protagonista de algunos de los mayores escándalos literarios de su época, también murió en nuestra ciudad en 1931 después de una polémica trayectoria iniciada en el último período del Naturalismo. Pero estas estancias, las influencias que las mismas y otras pudieran

ejercer, no las podemos valorar correctamente porque carecemos todavía de la historia de la literatura en el Alicante de aquellas décadas.

Para obtener los elementos que nos permitan elaborar la misma con unos criterios superadores de los trabajos parciales hasta ahora realizados, sería necesario llevar a cabo un conjunto de actividades complementarias de investigación que podríamos resumir en los siguientes apartados:

A) Desempolvar la esquilhada prensa local para hacer un recuento de las numerosas colaboraciones literarias y de las referencias y trabajos críticos que en ella aparecieron. Esta tarea ya se ha iniciado, y los primeros resultados nos indican que podría ser decisiva en el caso de periódicos tan influyentes como el *Diario de Alicante*, del cual se ha llegado a decir que auspició toda una generación cultural alicantina.

B) Hacer un censo de obras y autores que nos permita trabajar con, al menos, la seguridad que nos da el de Manuel Rico para el siglo XIX. Para alcanzar este objetivo sería imprescindible el anterior, ya que apenas se ha conservado otro tipo de documentación que la utilizada por el equipo que, con el auspicio del V Centenario, ha elaborado la bibliografía alicantina.

C) Registrar los fondos efectivamente conservados en nuestras bibliotecas —tarea ya iniciada— y en las nacionales, pues si las pérdidas de textos del siglo XIX son considerables, no lo son menos, y hasta algo escandalosas, las de esta época.

D) Intentar conocer, al margen de los testimonios de determinadas individualidades o élites no siempre representativas que ya conocemos, los gustos literarios y teatrales de los alicantinos. Para ello sólo contamos con unas carteleras que se conservan en buena parte y las referencias que podamos encontrar en los periódicos, pues la documentación de tipo legal y administrativo sobre las imprentas y editoriales locales apenas puede ser utilizada.

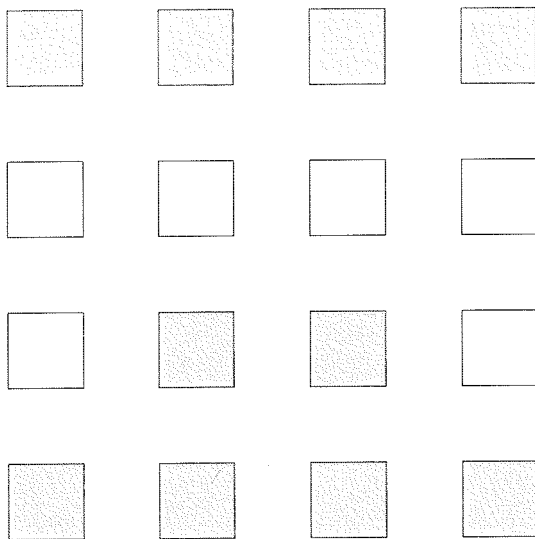
E) Examinar la intensa y heterogénea actividad de los teatros que funcionaban en la ciudad, así como la de las numerosas sociedades dramáticas no profesionales que se crearon por entonces en Alicante.

F) Conocer las múltiples facetas culturales llevadas a cabo por el Círculo de Bellas Artes (1918-1925) y otras instituciones de semejante naturaleza.

G) Examinar el papel desempeñado por la lengua vernácula, que por entonces, gracias a poetas como Eduardo Irles y algunas publicaciones periódicas, ya no se limita al teatro breve y la poesía satírica o costumbristas escrita en un extraño “lenguaje”, adquiriendo así una relativa importancia literaria que apenas había tenido durante la época decimonónica...

H) Y, finalmente, otras tareas que completen un panorama donde la creación literaria se inserte en la vida cultural de la comunidad y no sea considerada como el capricho individual de unos pocos sujetos.

Esta labor larga y compleja ya se ha iniciado para completar lo hasta ahora realizado sobre el siglo XIX. Mientras tanto, la obra de autores como Gabriel Miró, Rafael Altamira, Carlos Arniches, Francisco Figueras Pacheco, Eduardo Irles, Julio Bernácer y otros nos muestra una colectividad que, dentro de sus posibilidades, aportó nombres significativos a las letras españolas de la época. Muchos tuvieron que salir del estrecho marco local para obtener el debido reconocimiento y poder llevar a cabo satisfactoriamente su labor. Su “alicantinismo” suele ser una absurda entelequia sin apenas importancia para comprender sus textos. Pero, hasta que seamos capaces de reconstruir nuestra propia historia literaria, al menos sabemos que Alicante aportó un significativo grupo de literatos al rico panorama literario de la España de las primeras décadas del siglo.



LAS ARTES PLÁSTICAS DURANTE EL SIGLO XIX

ADRIÁN ESPÍ VALDÉS
Universidad de Alicante

E

L siglo XIX, desde sus inicios, con la primera herencia neoclásica y academicista, los movimientos románticos y neorománticos más tarde, con el naturalismo y el realismo posterior, y con los balbucesos modernos y hasta vanguardistas al finalizar la centuria, tiene en Alicante, tanto en la capital como en algunas de sus poblaciones y ciudades más consolidadas, tales como Alcoy o Elche, por citar dos ejemplos harto significativos, una importancia absoluta y total.

Habrá que adelantar que a lo largo del XIX en Alicante dos hechos fundamentales y de gran trascendencia aparecen casi al unísono: las exposiciones de artes plásticas, ligadas, al comienzo, a otra serie de manifestaciones culturales y socioeconómicas, como puede ser la industria y el comercio; y los “pensionados”, de Bellas Artes que a través de la Diputación, propician la aparición o puesta en escena de una determinada serie de artistas que permanecían un tanto silenciosos o incluso aletargados.

Siglo XVIII. El profesor Josep García

En el seno del Real Consulado Marítimo y Terrestre existe, entre otras, la llamada Escuela de Dibujo, sección que a nivel local hará las veces de una incipiente Academia de Bellas Artes, subrayando su papel, en parte, de sucursal del organismo académico de San Carlos de Valencia. La escuela de Dibujo, tarda sin embargo, más de diez años en ponerse en marcha (1795), por razones distintas y no bien sabidas. Sin embargo, en ese interín, surge la figura de un artista que ha cursado sus estudios en San Fernando de Madrid, y que ha de intervenir en el desarrollo cultural de Alicante de finales del XVIII y primeros años del siglo siguiente. Se trata de Josep García “natural de esta Ciudad, Profesor de la Nobilísima Arte de la Pintura y Dibuxo...”, quien solicita al Ayuntamiento la debida licencia para instruir “á la Juventud en el dibuxo”, por lo que ha resuelto el exponente “tomar á su cargo la dirección y la enseñanza de quantos quieran presen-

tar, o bien por el designio de seguir dicha Noble Profesión, o como aficionados...”.

Su instancia lleva fecha de 8 de noviembre de 1790, y en ella suplica al Ayuntamiento se le conceda “el expresado permiso y dar al efecto la Providencia Combeniente, y en ello recibir especial favor y merced”. El municipio da contestación al escrito y “Visto el Memorial qe. aquí se coloca de Jph. García, Profesor de Pintura y dibuxo: Acordaron Sus Señorías la permisión que solicita para el establecimiento de la Academia ó Escuela de Dibuxo en esta Cdad”.

Más y Gil nos habla en su estudio sobre el Consulado, de un tal José Luciano García, de quien afirma que fue el primer profesor que tuvo la Escuela. Lo que hace posible que José García y José Luciano García coincidan en la misma persona. Si así fuera podría entenderse que aunque la Escuela no estaba todavía y de forma oficial en marcha, la formación academicista sí que existía ya.

La escuela de dibujo del Consulado y el pintor Suárez

Figueras Pacheco habla de la Escuela de Dibujo instalada, como sección, en el Consulado Marítimo y Terrestre, junto a las de Agricultura y Comercio, Náutica y otras más, señalando que “las Bellas Artes pidieron también plaza en la organización cultural de la época”. Y evacuados “todos los trámites, la conclusión de la Casa del Consulado en la plaza del Mar, facilitó el término de la empresa permitiendo instalar espaciosamente la Escuela, en el segundo piso del edificio”. El polígrafo alicantino es rotundo al afirmar que “la inauguración, pues, de la Academia de Dibujo se celebró... en 1795, comenzando a actuar bajo la dirección del pintor italiano D. Vicente Suárez, el cual siguió al frente del establecimiento largo tiempo”.

Otro nombre, pues, surge silenciándose por contra el de José Luciano García ¿Es que en consecuencia ahora se oficializaban los estudios y se buscaban los servicios de otros profesores? Tal vez ésta sea la razón de la entrada en escena del nuevo pintor de quien se dice que es italiano aunque “sus apellidos —el segun-

do es Ordoñez— bien parece negarle tal origen”, como observa Más y Gil. Y es creíble que la actividad de la Escuela se inicie con este pintor que quizá nació en Italia de padres españoles o que simplemente amplió estudios o realizó la carrera en Roma.

Suárez dirigió la Escuela y “siguió al frente del establecimiento largo tiempo”, por lo que tuvo ocasión de marcar su impronta. Como artista sabemos que dejó en las dependencias del Consulado Marítimo y Terrestre algunos dibujos —tintas aguadas— con motivos clásicos, estudios y bocetos, y dos obras que hoy se conservan en la colección de la Diputación Provincial, bien diferentes la una con respecto a la otra, aunque del mismo formato —oval— e idénticas medidas: “Jasón conquistando el Vellocino de Oro” y una curiosa y espléndida “Vista de la Ciudad de Alicante”.

A él deben adjudicársele también unos lienzos pintados al óleo que corresponden a la interpretación simbolista de las diferentes partes del mundo, tales como Asia, África y América, temática en boga por aquel entonces.

Jose Aparicio, pintor de cámara de Fernando VII

Bajo la dirección de Vicente Suárez Ordóñez, y siguiendo los planes de trabajo vigentes, ordenados y regulados debidamente, con la anuencia de la Real Academia de Bellas Artes valenciana, empiezan los estudios en la ciudad. Es en la “Crónica” de Viravéns donde hallamos los nombres y apellidos de los estudiantes primeros: Ramón Guillem y Llobregat, Joaquín Berenguer, Vicente Rodes y Artés —escribe Artés en vez de Aries, que es el verdadero—, José Peyret y Bosque y José Aparicio Inglada. Una lista menguada, ciertamente, que se ampliará con otros aspirantes.

José Aparicio Inglada (1770-1838), alicantino de cuna, realiza sus estudios en San Carlos de Valencia y los continúa a partir de 1792 en San Fernando de Madrid, obteniendo de Carlos IV en 1798 una pensión de doce mil reales anuales para perfeccionar su arte y su “profesión” en el “extranjero”, concretamente en París. Esta beca avala su óleo “Godoy presentando la Paz a Carlos IV”.

Ya en Francia Aparicio acude al estudio de Louis David, padre del academicismo galo, siendo profunda la relación maestro-alumno que a partir de entonces se establece en una época en la que cuantos españoles se trasladan a la ciudad del Sena entran en contacto enseguida con el autor de “El juramento de los Horacios”.

Aparicio aprovecha su estancia en París y en el Concurso General de premios al que aspiraron “gran número de Nacionales y Estrangeros”, de 1805, es premiado por aquel “Gobierno con una gran medalla de Oro”, exponiendo un año más tarde su obra “La fiebre amarilla de Valencia” en el Museo Napoleón.

No cabe duda que estos aciertos le valen al artista el visado para Italia. Estamos en 1807 y el propio pintor señala: “En virtud de esta honorífica distinción se le mandó pasar a Roma para que acabase de perfeccionarse en la pintura...”. Pinta entonces “El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III” y la obra es expuesta en la Chiesa della Rotonda, logrando como resultado el nombramiento de académico de mérito de San Lucas.

La invasión napoleónica en España le retiene en el extranjero, hasta el regreso con “dos caxones con pinturas... para el Rey Nuestro Señor”. Tratará entonces de rentabilizar su expatriación y ya descaradamente suplicará beneficios, sueldos atrasados —la pensión— y cargos honoríficos, haciendo gala de su patriotismo —las más de las veces patriotismo interesado— al negarse a reconocer al intruso José Bonaparte como rey de los españoles, si bien había pintado un delicioso retrato de Carolina Bonaparte, esposa del general Murat.

En 1815, Aparicio escribe al rey “Suplicando se digne nombrarle Pintor de Cámara, con aquel sueldo que sea del superior agrado de V.M., no bastando para mantenerse con su familia la pensión que disfrutaba en Roma...” y el 23 de agosto de dicho año el pintor alicantino pasa a formar parte de esa pequeña corte de artistas al servicio de la corona.

Comienza Aparicio “Las glorias de España”, e inicia una etapa de cierta intensidad. De sus pinceles sale el buen retrato del sacerdote Manuel Regidor Brihuega, hoy pieza valiosa en el Bowes Museum de Londres; se conoce igualmente un boceto de “Batalla de moros” y quizá unas “estampas obscenas”, temas clá-

sicos con toda seguridad, que copia de vaciados de yeso y algunas estatuas deterioradas. En 1817 es creado académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando, y en febrero del 29 académico de mérito. ¡Todo un record, sin duda!

El análisis de la obra de Aparicio, de todo su conjunto —obras religiosas, retratos, temas tomados de la Biblia y cuadros del género histórico— permite que se le sitúe en el neoclasicismo tardío, propicio a la mitología y a la escenificación ampulosa. Aparicio es un pintor alicantino fuera de Alicante. Sale de su tierra y no vuelve. Sin embargo, quedan en Alicante algunas piezas de su primera época, tales como: “Judith con la cabeza de Holofernes”, “Retrato de dama” y posiblemente “San José y el Niño” y “Santa Mártir”, con una probable “Alegoría de la navegación” que, procedentes del Consulado figuran hoy en la colección de la Diputación Provincial.

Que es un pintor escenográfico, dado a la parafernalia compositiva —lo que le acredita como buen dibujante— lo corroboran trabajos como “La batalla de San Marcial”, “El desembarque de Fernando VII” y “El hambre de Madrid”, entre otros óleos; y es necesario igualmente vincularle al grupo del pintor francés David a través de los temas como “Patroclo”, “Combate de Horacios y Curiacios” y “Atalía y Joan”. En el retrato Aparicio se muestra más suelto y natural, encajando desde el primer momento la figura que trata: “General Castaños”, “General Reading”, “Diego Robadán”, etc.

Quizá de toda su producción el cuadro “El hambre de Madrid”, inmensa tela en sus dimensiones, fechable en torno a 1815, sea la obra más conocida por divulgada; lienzo que alcanzó una cotización en su momento superior a la propia “Rendición de Breda”, de Velázquez, lo que no deja de ser curioso y a la vez testimonial de una época en la que se valoraban más las circunstancias sociopolíticas, las intrigas y los comentarios literarios —no críticos— que la bondad artística y, desde luego, estética.

La temática histórica —la historia más cercana, la referida a las efemérides más próximas y a los monarcas más inmediatos— continúa más tardíamente con “El desembarque de Fernando VII en la isla de León, en Cádiz”, de 1827, cuyo boceto se encuentra en el Museo Romántico de Madrid.

Con los primeros contratiempos en su salud, dolencias que aparecen a causa de una pulmonía en 1833, recibe Aparicio la Cruz de Prisionero Civil, y desde palacio se le declara “cesante”, falleciendo en Pozuelo de Alarcón el 6 de marzo de 1838.

El miniaturista José de Rojas

Un soldado que toma parte en las campañas contra Napoleón, que manifiesta espíritu romántico, alma de poeta y afición por las Bellas Artes, es José de Rojas y Pérez de Sarrió (1776-1833).

De su madre recibe las primeras lecciones o quizá consejos, y luego es alumno de la sala de dibujo del Consulado Marítimo y Terrestre. Cabe pensar en todo caso, que Aparicio le pudo orientar en algunas ocasiones, o que llegaba a las aulas de las academias de Valencia o quizá de Madrid, con cierta preparación.

Lo que está mejor probado es que José de Rojas mantuvo alguna relación con Francisco de Goya, ya que del maestro de Fuendetodos se conoce una acuarela en la que se retrata al militar y artista alicantino vestido con el uniforme de granadero. José de Rojas se dedicó, cuando la milicia se lo permitía, al retrato en miniatura, con limpieza, acertada ejecución, luminoso colorido, en una época, además, en que este arte se consideraba muy escasamente y apenas si tenía seguidores. Pocos se interesaban por la miniatura-retrato, sin embargo, tal labor es la que facultó a este artista para que en sesión de 19 de enero de 1817 la Academia de San Fernando le designara individuo de mérito.

Vicente Rodes, pintor al pastel

Si antes se ha dicho que Aparicio es un artista alicantino fuera de Alicante, también puede decirse lo mismo de Vicente Rodes Aries (Alicante, 1791-Barcelona, 1858): otro pintor que se da a conocer y que adquiere fama y prestigio fuera de la ciudad que le vio nacer. Sin embargo, Rodes se vincula por un tiem-

po con el arte y la cultura alicantinas no solamente por ser discípulo del Consulado Marítimo y Terrestre, sino después, en 1809, director interino del propio centro por autorización precisa de la Academia de Valencia, con el informe favorable de los pintores académicos Luis Antonio Planes, Vicente López y Mariano Torra.

Es en 1803, a sus doce años, cuando inicia los estudios de dibujo, realizando las tradicionales copias “del antiguo” y obteniendo por esta labor los premios establecidos y las más altas puntuaciones. El registro de alumnos de San Carlos de Valencia ya cita su nombre en 1807. Años después el artista alicantino recibe la autorización para “exercer esta arte”, facultándosele, pues, para la profesión de pintor, lo que ocurría según resolución académica de 6 de agosto de 1815. De todo ello se desprende que Rodes ha ido poco a poco, sin prisas y sin pausas, jalonando su carrera, afianzándola en todo momento, hasta llegar a ser académico del mismo establecimiento en el que cursa sus estudios, después de haber desarrollado el tema propuesto por la Academia: “Figura que represente a la España, colocando en el trono al Rey, N.S.D. Fernando Séptimo, con las alegorías correspondientes á este asunto” (1818).

Milego y Galdó apuntan a que este traslado ocurrió en 1820, para pintar el retrato del Conde de Santa Clara, que al ser contemplado por un amplio público vino a propiciarle de inmediato nuevos encargos, pues “llamó poderosamente la atención”.

La especialidad de Rodes fue, precisamente —al margen de otros “asuntos” y temas obligados de la época, aunque no preferentemente históricos— el retrato y, además, empleando y desarrollando al máximo la técnica del pastel, tan delicada, precisa y difícil, acaso aprendida de Vicente López. Y así cabe señalar los retratos del escultor Damián Company, que figura en la colección de la Academia de San Jorge de la ciudad Condal, algunos retratos de Fernando VII, del general Concha, del escultor Francisco Alberola.

El dibujo, sobre todo en tina, a la aguada, fue en Rodes no una necesidad sino un puro deleite y un goce completos. Tomaba los temas o bien de la Biblia o acaso de las mitologías clásicas. Así “Moisés salvado de las aguas”, “Sansón destruyendo

las columnas”, en el primer caso; “Mujer desesperada” y “Hombre joven atacando a un dragón”, en el segundo. “Cleopatra”, “Wamba en su trono”, “Jesucristo y la samaritana” y “La conversión de San Pablo” son aguatinas, lápiz-plomo y diseños que igualmente pertenecen a su catálogo. “Llevado por las impresiones de su época —dice su biógrafo Carlos Pirozzini—, por la potencia y el fuego de su imaginación, que buscaba en el natural la verdad y belleza de sus concepciones...”. Rodes lograba aciertos completos, y de resultas de todo ello la Escuela de Nobles Artes de Barcelona le recibía como profesor de Colorido y Composición, cátedra que desempeñó desde 1834, llegando a director de la misma seis años después.

Gaya Nuño le califica de “especie de Ingres levantino, concienzudo y correcto”, que ejerció de profesor en la Escuela de la Lonja de Barcelona, labor pedagógica que se hizo de notar en la urbe próspera, burguesa e industrial de entonces durante muchos años. Rodes pertenecía a múltiples organismos en calidad de socio, tales como la Sociedad de Fomento de la Ilustración, de la Academia Nacional de Ciencias Naturales y Artes barcelonesa, así como de la Sociedad Económica de Amigos del País de aquella capital, y socio de mérito de la Academia de San Luis de Zaragoza, desde el 3 de agosto de 1845.

Una dinastía: Los Amérigo

Lista de artistas que tienen en Manuel Amérigo, nacido en 1720, al fundador de la dinastía, platero y orfebre que fue bien cualificado, experto en su oficio. Un nieto suyo, también de nombre Manuel, un siglo exacto más tarde, en 1820, trabajaba para los templos de la ciudad, así como para iglesias de otras poblaciones de la provincia, siendo de justicia recordar el Relicario de la Santa Faz.

Ya plenamente decimonónico es Ramón Amérigo y Morales (1807-1884), nacido en esta ciudad, discípulo de José Peyret, y asiduo a las clases del Consulado. Luego se trasladaba a Valencia para cursar la carrera, y pasar con el ánimo de completar su formación, a Florencia y Génova, posiblemente pensionado por algún organismo oficial.

Se le sabe en 1841 en Valencia, ya de regreso de su estancia en Italia, figurando su nombre a partir de entonces en la Exposición de la Sociedad de Amigos del País. En Alicante se encuentra en 1860 y consta en la Exposición Artística, Industrial y Agrícola que organiza también la Sociedad de Amigos del País, exhibiendo “La Cartuja de Pavía”, un “Retrato de viejo” y el “Retrato de un vicario de la iglesia de Santa Ursula”, algunos paisajes alicantinos, bodegones y floreros —más de doce obras en total—, recibiendo en tal ocasión toda clase de parabienes.

También se dedicó a la estampación litográfica, siendo suyas, entre otras: “El milagro”, traducción de un dibujo de Vicente López que representaba la enfermedad y el restablecimiento de Fernando VII, “Cacería de zorras”, “Ciervo acosado”, “Galgo acosado” y un “Retrato de Isabel II, niña”, obras todas ellas que destinaba para la “Colección Litográfica” del pintor José de Madrazo. Realizó un retrato, quizá algo acartonado y severo, del gobernador don Trino González de Quijano.

Aunque Ossorio afirma que Federico Amérigo y Rouviere (1840-1912) vino al mundo en la ciudad de Alicante, la verdad es que el punto exacto del nacimiento es la población de Matanzas, cerca de La Habana, donde estaba establecido el matrimonio Gabriel Amérigo Morales y Josefa Rouviere. Pronto, sin embargo, regresará la familia a Alicante y Federico ingresa en la carrera diplomática obteniendo la embajada de España en Roma.

Su actividad fue desde joven múltiple y compleja a la vez: arquitecto, pintor de retratos y paisajes, diplomático, escenógrafo y litógrafo, en todas estas parcelas dejó buen nombre y una labor honesta e interesante y, sobre todo, curiosa, muy decimonónica.

Es en Italia donde tiene la oportunidad de conocer a Mariano Fortuny, Joaquín Agrasot y Lorenzo Casanova, recibiendo del primero, y en su estudio particular, múltiples lecciones y consejos. En 1867 está en España y presenta a la Exposición Regional de Valencia un paisaje o “país” que le vale medalla de cobre, acompañando dicho trabajo con “Anfora griega” y “Caída de la tarde”.

Con el cambio político que se origina en 1873 abandona su carrera de diplomático y vuelve a estar en Alicante, iniciando

una labor notable como retratista. El cuadro “Educación de Boabdil”, le vale una medalla de plata en la Exposición de Valencia de 1879. “El Sacrificio de Safo” —mitología, leyenda, literatura— es galardonado por estos mismos años en Barcelona.

Pinta el telón de boca del Teatro Principal de Alicante así como algunos frescos en este mismo edificio, y en 1882 regresa a Matanzas y se pone al frente, como director artístico, de una industria cerámica. Definitivamente regresa junto a su esposa Enriqueta Puchinelli, italiana, y retoma la paleta para realizar paisajes y retratos.

El Romanticismo: Peyret y Bushell

Después de un período neoclásico que jalona con bastante claridad la primera mitad del siglo XIX, hay que añadir la postura romántica que junto a otros fenómenos plásticos de diferente signo producirán un “mixtura” compleja y variopinta.

A la historia de la cultura y las artes alicantinas se asoma ahora un nombre, muy poco estudiado todavía, que responde al apellido Peyret: José Peyret y Alcañiz (1785-1847), pintor y restaurador de obras de arte, escritor y músico, que debió de estar estrechamente relacionado con el movimiento academicista de finales del XVIII en Alicante a través del Consulado.

Sí es más conocida la biografía de su hijo José Peyret y Bosque (1816-1851), alicantino como él, fallecido muy tempranamente, cuando contaba treinta y cinco años de edad, en el momento que más y mejor se dedicaba a la doble tarea de enseñar dibujo y de pintar. Educado, desde niño, en el ambiente artístico, realizó estudio en la tantas veces aludida escuela de “dibuxo” de la ciudad. Quiso, sin embargo, encaminar su vida por los derroteros de la administración pública y, tras unas oposiciones ganadas con esfuerzo, ingresó en el Ministerio de Hacienda, publicando entonces algunos artículos que aparecían en el “Heraldo de Madrid”.

Perfeccionista en su manera de ser, y de formación netamente neoclásica, la Diputación conserva suyos los lienzos “Alegoría de la Geografía” y “La musa Urania”, otra interpretación

simbolista, en este caso de la Astronomía, telas que pertenecieron al Consulado, entidad de la que fue director. Era remilgado y pulcro en su trabajo, de espíritu apasionado y romántico, habilidoso y técnico en el arte de la miniatura-retrato. Entre los retratos que realizó en pequeño formato cabe recordar: “Marqués de Beniel”, “Duquesa de Uceda” y “Conde de Casa-Rojas”.

Otro artista que pertenece igualmente al movimiento romántico, aunque se diferencia de Peyret, y que alcanzó una vida más dilatada, es Francisco Bushell y Laussat (1826-1901), quien además de pintor se dedicó a la enseñanza dentro y fuera de Alicante. Por su nacimiento todo hace pensar que los estudios primeros los realiza en el Consulado, cerca de la calle Labradores, en una de cuyas casas vino al mundo.

Los pasos siguientes son la Escuela Superior de San Fernando en Madrid y en París lecciones, ejercicios y constantes trabajos en los estudios de los pintores Le Poitevin y Dumas. Vuelve a Alicante y ejerce la enseñanza —cátedra de dibujo— en la Escuela de Comercio, a la vez que, facultado como está para los idiomas, enseña inglés y francés en el Colegio de San José.

Dentro de la actividad plástica alicantina existe un punto de referencia importante al que es preciso acudir siempre. Es la Exposición Agrícola, Industrial y Artística que bajo los auspicios de la Sociedad Económica de Amigos del País se celebra en 1860.

Bushell presenta en la referida exhibición once cuadros, temas de género, sin la prosopopeya de los grandes y aparatosos asuntos históricos o bíblicos. Son paisajes y vistas de ríos, alamedas, parques..., cacerías y pescadores. Una pintura sencilla, acomodada o pensada para una burguesía —comerciantes y profesionales libres— que podría tener a acceso a ella.

Su presencia en las muestras de arte de carácter local, regional o nacional es constante e indismayable. Este mismo año de 1860 está en la Nacional con su obra “Moros del Riff”, obteniendo del jurado calificador una mención especial. Dos años después acude a la muestra que en el mes de octubre se inaugura en la Nueva Casa de la Moneda, exhibiendo entonces su “Playa del Postiguet” que le vale medalla de tercera clase, acompañado dicho lienzo, que es adquirido para el Museo de Arte Moderno,

con otros dos paisajes: “Vista de la Mare aux Fées” y “Fontane blau”.

Un tema italiano, “Meditación y recuerdo de Sorrento” se cuelga en la Nacional del 64 y ello obedece a que un año antes Bushell ha obtenido la primera pensión que crea la Diputación de Alicante para ampliar estudios en el extranjero, otro de los importantes hitos que van a determinar acontecimientos artísticos en la ciudad y en toda la provincia. El asunto napolitano le vale una nueva mención de honor.

Sin desmayo y con un cargamento de cuadros ejecutados en el disfrute de su pensionado itálico, Bushell vuelve a la Nacional del 67, donde presenta la “Procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma”, “Interior de la catedral de Orvieto”, y “Claustro del convento de San Marcos de Florencia”. Se hace de notar el giro que se produce en su arte, ahora pensado para el certamen oficial, acompañándolo de los paisajes: “Vista de Alicante” y “Torre de Rabsemblanc, Elche”. El esfuerzo del artista se premia con otra consideración de tercera clase que recae en el primero de los lienzos a su vez medalla de plata en la Regional de Valencia de ese mismo año.

Se ha dicho que es el pintor más asiduo y constante en las exposiciones de arte de sus días y así es, figurando su nombre incluso en el extranjero (París, 1866, 79 y 81) y Edimburgo (1879). Alicante organiza también sus propias confrontaciones artísticas por estos mismos años, teniendo como antecedentes lo ocurrido en el año 60. Y Alicante otorga un primer premio a Francisco Bushell en la Exposición de 1878.

Por Real Orden de 7 de agosto de 1880 se le confirma como profesor numerario de la cátedra de dibujo de la figura y adorno en la Escuela de Bellas Artes de la Coruña. Su ausencia, sin embargo, no se prolongará en demasía, puesto que siete años después aparece ya avecindado en Alicante. Seis obras expone en 1894 y muere el 24 de junio de 1901.

La arquitectura neoclásica

Por lo general la formación de los arquitectos alicantinos, o de aquellos técnicos que trabajan en la ciudad se efectúa en

Valencia, siempre más próxima que Madrid, aunque también se registra la participación de otros maestros que introducen el cambio de gusto del rococó dieciochesco hacia el clasicismo, habiéndose formado en la Villa y Corte. Los arquitectos se enfrentan a la ardua tarea de liquidación del Barroco, “ante la boga creciente del puritanismo clasicista”, como ha señalado el profesor Garín.

Y al iniciarse el siglo XIX hallamos la figura de Antonio Jover, nacido en Alicante en el último tercio del XVIII, quien recibe el título de arquitecto de la Academia de San Carlos, en 1798, y realiza el proyecto de la capilla dedicada a la Virgen del Rosario del Palamó, en Villafranqueza, con planos de 1806.

El gusto por las formas clásicas va “in crescendo” día a día y Antonio Jover sabe interpretarlo desde su puesto de arquitecto titular de la ciudad de Alicante, construyendo en 1811 el primitivo matadero junto a la playa de Santa Ana, e interviniendo en la Casa de la Misericordia.

Señala Santiago Varela que “dentro de la consolidación del neoclasicismo conviene resaltar el papel desempeñado por el Consulado Marítimo y Terrestre” y aquí, en la sala de dibujo sin duda se estudiarían diseños, planos y dibujos referidos a la arquitectura, como complemento, quizá, de las enseñanzas que se impartían. Precisamente es de 1795, año en que inicia su labor dicha sala, el Panteón de los Guijarro, en Villafranqueza, tan próximo al casco urbano, todo un modelo, ejemplo bien representativo de unas formulaciones inspiradas en el mundo clásico.

Un arquitecto de gran trascendencia para la ciudad es Emilio Jover Pierrón, hijo de Antonio, autor del Teatro Principal, proyectado en 1842 y realizado en veinte meses, entre 1846-48, ocupando un lugar singular en la trama urbana de la nueva Alicante. Los planos fueron remitidos a Valencia por el alcalde Mariano Vicent, juntamente con los cálculos y método de construcción, y más tarde y una vez aprobados por los académicos valentinos, a San Fernando de Madrid.

Es de destacar de este singular edificio la fachada principal construida en sillería, con pórtico exástilo de orden gigante, rematado por un enorme frontón triangular con el tímpano liso, dentro de la más pura estética clásica. Suyo es también otro edificio que se inicia aún sin estar terminado el coliseo. Se trata de

la plaza de toros, reestructurada y ampliada unos años después, en 1888, a cargo del arquitecto Guardiola Picó, coso con capacidad entre 15.000 y 18.000 espectadores, y que contituye dentro de la zona urbana en la que se edifica —barrio de San Antón— un hecho importante y trascendente.

Emilio Jover fue víctima de la epidemia del cólera morbo de 1854, falleciendo el 25 de agosto de dicho año. Era correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Una pequeña muestra del gusto que por la estética neoclásica se sentía en Alicante por estos años, y aunque la arquitectura tenga un carácter totalmente distinto, el funerario, es el mausoleo del teniente general Félix Berenguer de Marquina, virrey de Nueva España, que fue construido en el romántico y desaparecido cementerio de San Blas.

Francisco Morell y Gómez, arquitecto valenciano autorizado en 1843, discípulo de Manuel Fornés, fue en repetidas ocasiones arquitecto titular de la ciudad de Alicante, debiéndose a él principalmente las obras de ornato y mejoramiento. En este sentido cabe recordar el Panteón de Quijano, “la única muestra de jardinería romántica urbana”, de planta cuadrangular cerrado por una cancela que el arquitecto Guardiola Picó hizo después, ya que el proyecto y la construcción es de 1855. La base del monumento funerario —aguja sobre plinto— tiene un cierto parecido al citado de Berenguer de Marquina, aunque aquí la decoración escultórica, medallones, orlas y figuras exentas configuran un trabajo mucho más amplio, de excepcional interés.

La ciudad de Alicante experimenta a lo largo del siglo un evidente cambio en sus formas arquitectónicas partiendo del contexto clasicista, atravesando el esteticismo romántico y desembocando, posteriormente, en los gustos eclécticos e historicistas que se dan frecuentemente a partir de la segunda mitad de la centuria, y más abundantemente al final de este período.

La casa número 9 de la calle de Altamira, de la primera mitad del siglo; el Hotel Palas, la casa de Quijano, de la primera mitad del ochocientos; la casa número 25 de la Rambla de Méndez Núñez —planta baja y dos pisos—; la casa número 6 de la plaza de Ramiro, de comienzos de siglo; el edificio de la plaza de

la Santa Faz número 1, esquina a la calle Mayor, se alinean en las formulaciones clásicas.

El ya citado jardín de Quijano, incluido el monumento funerario que centra todo el espacio; el esquema del desaparecido Paseo de la Reina, en el primer tercio del siglo, de aire romántico, apacible y pintoresco. Los jardines de Peñacerrada, en Muchamiel, de inspiración neoclásica y acentuación romántica, comenzados a construir a finales del XVIII y comienzos del XIX, en el amplio contexto de lo que podría entenderse como villas de recreo y para el entretenimiento.

El eclecticismo. Hacia el final del siglo

Y el eclecticismo de final de siglo que nos lleva, entre otros, ante el edificio —desgraciadamente mutilado, incomprensiblemente partido en dos— de la Casa Alberola, obra del arquitecto José Guardiola Picó, realizada en 1894 con ese remate o cúpula semiesférica única y singular en toda la arquitectura alcantina.

Es preciso recordar que la figura del arquitecto municipal —incluso la del arquitecto provincial— surge en una época de grandes transformaciones urbanas, años en que la construcción alcanza cotas considerables, momentos en que se abren nuevas vías en la ciudad y se realizan ambiciosos proyectos: plazas, jardines, fuentes públicas, monumentos, barrios enteros que se alzan más o menos próximos al centro histórico.

Ya se ha citado a Antonio Jover, que solicita el título municipal el primer año del nuevo siglo, y hay que contemplar luego la figura de Manuel Jover "... único titular del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad", quien realiza un padrón para evaluar el estado urbano. Lorenzo Chápuli, fallecido con posterioridad a 1800, y Manuel Chápuli Guardiola, que ejerció el cargo oficial hasta 1883, autor del proyecto para el Monumento a los Mártires de la Libertad, de 1844.

Arquitecto municipal es José Fuentes a la vez que lo es el valenciano Francisco Morell. Solicita la plaza de arquitecto segundo Antonio Garrigós López, quien trabaja en los aljibes de la

falda del monte Benacantil. Diversos proyectos del ensanche de la ciudad se deben a otro facultativo del municipio, cual es José González Altés, autor igualmente de planos para el parque de Canalejas al finalizar la centuria, concretamente en 1892.

Se ha hecho mención a la figura del arquitecto provincial y hay que pensar en Más Font, en el último tercio del siglo, pero además aparece el cargo de arquitecto diocesano —Jose Guardiola Picó— en un momento en que las construcciones religiosas no proliferan en la ciudad y aun en la provincia y el reino. Los esquemas neoclasicistas para las fachadas de los templos todavía perduran, y la nave en cruz latina acentúa su vigencia. Citemos la iglesia de San Juan, cuya frontera realiza en 1867 el arquitecto municipal alicantino Morell.

Volviendo al eclecticismo cabe citar que éste se incrementa durante la segunda mitad del siglo, y señala Varela que “a mediados de la centuria los maestros de obra son los auténticos artífices de la ciudad, pues con sus atribuciones profesionales pueden proyectar y construir todo tipo de edificios para vivienda... Los arquitectos, menos numerosos y limitada su actuación a la ciudades de Alcoy y Alicante, tienen una incidencia muy específica”. Hay que destacar los grandes edificios destinados a viviendas colectivas, y valga como ejemplo, muy particular además, el edificio Américo que presenta fachada a las calles Mayor y Altamira, construido en 1856 según proyecto de Vicente Pérez, con pasaje de conexión entre ambas calles, introduciendo esta tipología que era frecuente en tales tiempos en Europa.

Uno de los arquitectos de mayor nombradía en esta etapa de transformación urbana de la ciudad es José Guardiola Picó (1836-1909), formado en Madrid, académico que fue de San Fernando, quien ejerció su profesión por espacio de más de cuarenta y cinco años, a quien se debe una larga lista de trabajos, desde las reformas introducidas en el paseo de la Reina, en 1867, al Asilo de Nuestra Señora del Remedio, desde las reformas añadidas en el Casino, en 1888, a ese edificio Alberola con la particular imagen que ofrece el torreón de su esquina —ya aludido—, de ventanas de herradura sobre las que se asienta una cúpula recamada de chapas de cobre, “hito visual en la línea de fachadas costeras”.

La Diputación Provincial y sus pensionados de Bellas Artes

Al igual que hicieran otros organismos oficiales, la Diputación Provincial de Alicante crea en el primer trimestre de 1863 una serie de ayudas o pensiones para artistas nacidos en esta tierra. Pueden optar a las becas los artistas de la capital y de los pueblos y ciudades que configuran la provincia, iniciados ya en los campos de la pintura, la escultura y la música, y que deseen ampliar estudios en Madrid primero, y luego en el extranjero, preferentemente en Roma.

Es el primer agraciado Francisco Bushell y le sigue en el listado el oriolano Joaquín Agrasot y Juan (1836-1919), amigo en Italia de Mariano Fortuny. La tercera pensión, en 1872, se otorga a Antonio Amorós Botella (1849-1925), artista nacido en la propia ciudad de Alicante y formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, cultivador "in extremis" del cuadro de género, del paisaje y aún de los temas de raíz histórica. Fue un asiduo de las Exposiciones Nacionales. Así, y merece destacarse, en la de 1876 presenta la insólita cantidad de doce cuadros, trabajos de academia y asuntos baladíes, de entre los cuales vale destacar los titulados "Lavandera del Pisuerga" e "Interior de una casa de comidas". Continúa su participación en las confrontaciones artísticas de 1878, 1881, 84, 87, 1894 y 1904, no logrando no obstante su insistencia nunca una primera medalla.

De su amplia producción cabe destacar por pertenecer a dos colecciones oficiales alicantinas, "Lavandera de la campiña romana", firmado en 1880 en Roma, que está en la Diputación, y "Vieja hilando" en las dependencias del Ayuntamiento. Otra vertiente del pintor fue la enseñanza, siendo profesor de dibujo en Mahón de donde pasa a Madrid ocupando plaza en la Escuela Superior de Artes e Industrias. Realizó dos amplias muestras personales, una en el Ateneo de Alicante en 1894, a raíz de haber sido galardonado en la Exposición organizada por la Sociedad Amigos del País, y una antológica en 1924, un año antes de su muerte.

La figura de Lorenzo Casanova Ruiz, nacido en Alcoy en 1844 y fallecido en Alicante en 1900 hay que estudiarla completamente aparte, por lo que representa para el arte nuestro y por su

significación y trascendencia. Dígase ahora que es él el siguiente pensionado en Roma, a cuya ciudad acude a partir del verano del 74. Resulta curioso que la Diputación no guarde obra alguna de este artista y sí el Ayuntamiento, con una “Zambra gitana” firmada en Italia. También el Casino alicantino conserva en sus colecciones dos lienzos grandes —poco habitual en este artista no dado a las medidas excesivas y enemigo de los concursos públicos— que pertenecen a un gusto historicista: “El halconero” y “Jaque mate”.

La siguiente pensión no será para el “extranjero” sino para Madrid, y la ayuda recae en Rafael Farach y Pomata entre 1878 y 1881, un artista éste que no aparece en catálogos de exposiciones ni en otra documentación de la época. Sin embargo, es rica en resoluciones y anotaciones artísticas el acta provincial de 3 de abril del 82, donde figuran los nombres de los pintores Fernando Cabrera Cantó, de Alcoy, Vicente Navarro Tormo, Eduardo Dagnino, Pedro Serrano y Rafael Hernández, alicantinos todos ellos “pidiendo pensión para continuar la carrera de la pintura”. En tal ocasión el organismo provincial propone que sean Eduardo Dagnino y Pedro Serrano Bossio quienes ocupen las dos plazas que quedan libres en Madrid “a fin de año económico, concediendo el título de supernumerario a D. Rafael Hernández, D. Vicente Navarro y D. Fernando Cabrera, para el caso de que los anteriores abandonen su carrera”.

Y se da el hecho de que Dagnino no abandona la carrera sino que fallece, en plena juventud, en 1883, sustituyéndole no uno de los tres supernumerarios, sino el pintor ilicitano Mariano Antón Serra (1857-1932). A Roma se pensiona en 1882 al pintor petrelense Vicente Poveda y Juan, casi con seguridad ya beneficiado de la Diputación en Madrid. Es ahora —acuerdo de 6 de abril del 83— cuando la corporación decide que estas plazas “en lo sucesivo se provean por oposición”.

Pedro Ibarra, de Elche, solicita se le nombre alumno pensionado en 1886, pero los procedimientos han cambiado y ahora priva el abrir concurso público. En Madrid disfruta de ayuda Rafael Hernández López que ahora remite a la Diputación, como prueba de su trabajo, una copia del lienzo de Moreno Carbonero

“La rendición de Granada”. Hernández es alicantino, nacido en 1854, artista malogrado que biografía el poeta Carmelo Calvo.

En 1886 disfruta de ayuda provincial Pedro Serrano Bosisio, quien se traslada a Italia con el beneplácito de la Diputación alicantina. El artista alcoyano Cabrera Cantó, sólo a un voto de distancia del vencedor, es agraciado con una pensión para Madrid “con mil pesetas anuales”, si bien “el estado de fondos de la provincia no consentía nuevas cargas...”.

Un nuevo artista asoma ahora a las actas de la entidad patrocinadora. Es Antonio Celdrán y Frías, que obtiene mil pesetas anuales durante cuatro ejercicios para perfeccionarse como pintor en la capital de España. Lorenzo Casanova dirige una instancia —documento importantísimo en extremo— mediante la cual señala que puesto que él ha montado una Academia de Bellas Artes, a cuyo obrador acuden, entre otros, artistas como Rafael Hernández, Vicente Bañuls, Lorenzo Pericás, Adelardo Parrilla, Mariano Orts y otros, se considere su escuela en el papel que desempeña Madrid, y se bequen a sus alumnos, comprometiéndose el propio Casanova a “admitir como protegidos de la Diputación a ocho discípulos, cuatro por cada una de las plazas hoy existentes”. Se obliga, además, a “sostener, bajo su constante dirección, el curso ordinario desde octubre a mayo”.

Es, pues, una fórmula y una manera distinta —aunque el objetivo sea el mismo— de premiar a aquellos estudiosos de las Bellas Artes, y puesto que una de las plazas en Madrid termina —la de Cabrera Cantó—, a partir de estos momentos —11 de abril de 1890— los artistas Lorenzo Pericás Ferrer, Rafael Hernández López, José López Tomás y Vicente Bañuls Aracil, se convierten automáticamente en pensionados del “Cuerpo Provincial” en la Academia de Pintura alicantina que ha fundado Lorenzo Casanova. Cabrera Cantó acaba en Madrid, pero su eficaz y brillante estancia en aquella ciudad, bajo la dirección de Casto Plasencia, le lleva el año 91 a Roma.

Vicente Bañuls Aracil solicita en 1897 ayuda para trasladarse a Italia. No hay concurso-oposición y obtiene la plaza por mayoría de votos.

La academia de Casanova. Alumnos más destacados

De regreso de Roma, Casanova contrae matrimonio con Teresa Miró, y tras una cortísima estancia en su tierra natal, Alcoy, se establece de por vida en Alicante, lo que ocurre exactamente en 1855, año en que firma su espléndido “Nacimiento” y queda fundado el Ateneo de Alicante, entidad que invita al pintor a presidir la comisión artística. El periódico “La Tarde” anuncia ya el ambicioso proyecto: “trata de establecer una Academia en Alicante”, dice, y ésta queda domiciliada en 1887 en la casa número 16 de la calle Luchana.

Por la instancia que Casanova dirige a la Diputación —2 de abril de 1890— exponiendo su idea, la de obtener becas para sus alumnos, sabemos que era prácticamente imposible en aquellos días cursar estudios superiores en artes “... porque siendo elemental la Cátedra de Dibujo agregada al Instituto —señala—, no existía en Alicante ni en la provincia ningún centro donde poder cursar los estudios superiores”. La institución que ha fundado y sostiene es “un Local de inmejorable situación, Academia á todas horas abierta á los alumnos, dirección constante y estudio continuo del natural...”.

A los primeros alumnos “oficiales”, Hernández López, López Tomás, Pericás Ferrer y Bañuls Aracil, pronto se unirán otros muchos —aparte de los que con anterioridad frecuentaban el obrador—; la Diputación, además, señalaba años después, subvencionaba con 1.500 anuales por cada alumno, pero Casanova se obligaba a “enseñar gratuitamente á quince alumnos” que designaría la propia entidad provincial. Y así se registrarán los nombres, entre otros, de Heliodoro Guillén Pedemonti —pintor singular e ilustre catedrático—, Manuel Harmsen Bassecourt, Adelardo Parrilla Candela —gran bodegonista, sucesor de Casanova en la enseñanza—, Andrés Buforn Aragonés— posiblemente el único “marinista” que ha dado la ciudad—, Lorenzo Aguirre Sánchez, Sebastián Cortés Sevilla, Bernardo Carratalá Poveda; los escultores Bañuls, Juan Planelles, Reus, Fernández y Oliver, Samper y Orts...

Escultores decimonónicos. Vicente Bañuls Aracil

Antes de fijar la atención en una serie de pintores enormemente significativos en el último tercio de siglo, “casanovistas” en sus orígenes, prácticamente todos, bueno es que recalemos en el mundo de la escultura, todavía no examinado.

Cuando en 1849 el escultor contestano Pascual Agulló —discípulo de Clostermans— es designado teniente director de escultura, vive ya en Alicante-capital el último de los hermanos Riudavest, Antonio, posiblemente oriundo de Orihuela, tal como su familia. Abre taller en la calle de la Princesa y es el estuquista-decorador tanto del Teatro Principal de Alicante como del de Alcoy, esculpiendo para la Colegiata de San Nicolás en 1851, y al decir de Viravéns, una imagen de San Rafael. El grupo “La Sentencia” de la semana santa alicantina era de su gubia, así como una “Cena” vendida a Cartagena y algunas piezas para Crevillente, destruidas en 1936.

Él mismo tenía conciencia de su quehacer y se intitulaba “escultor-retratista”, siendo conocido el retrato que hiciera en 1854 al gobernador Trino González de Quijano, víctima del cólera. A resultas de ello o como pago de este trabajo, la Diputación Provincial en 1869 “le concedió la suma de doscientos escudos por una sola vez”.

La figura de Juan Rizo, tallista en madera que debió de florecer en la primera mitad del siglo XIX no es todavía conocida y no debe estudiarse en el apartado de la escultura, dadas sus especiales características: la carpintería y el mobiliario, siendo autor de consolas, bargueños, mesas de despacho, mesas de juego, etc. Sin embargo, su nombre hay que enlazarlo con el de Vicente Bañuls Aracil, sin duda el escultor más completo y significativo de la época, el que marca el paso decisivo entre el naturalismo y el realismo de finales del XIX y los movimientos modernistas. Bañuls (1865-1934) tiene una etapa muy decimonónica, la que va desde sus inicios hasta su estancia en Roma, y que igualmente aparece marcada por el marchamo —disciplina y rigor— de Lorenzo Casanova.

Bañuls será dibujante, pintor, cartelista y escultor, quizá consecuencia de todo este mundo de formas que gravita sobre su

conciencia. Podría decirse que se da a conocer públicamente en la Exposición de 1894, donde exhibe una "Crucifixión" en madera, un bajorrelieve, una "Jijonenca" (busto), el boceto preparatorio para la estatua en el monumento a Maisonnave que se inaugurará un año después; el grupo en barro crudo titulado "Un compromiso", y el boceto "Gloria".

Después, Roma, de 1897 a 1904, y el Monumento a Canalejas, la fuente de la plaza de Gabriel Miró, el monumento a Jorge Juan en Novelda, los de Chapí, Campoamor y el doctor Ayala, y los bustos-retratos de Benito Pérez Galdós y el papa León XIII. En su haber múltiples recompensas y consideraciones, baste recordar la Gran Cruz de Isabel la Católica —de la que ya era caballero en 1898—, y la Cruz de Mérito Naval.

Desde el pensionado de Vicente Bañuls a Italia, en función de su actividad artística como escultor, se respira en Alicante un clima enormemente propicio y propenso hacia el arte de Fidias. Un alicantino, de Altea, Antonio Moltó y Such (1841-1901), autor de "Fray Bartolomé de las Casas amparando a un indio", marca en Madrid los avances de la escultura a nivel oficial, y a orillas del Mediterráneo, y teniendo como telón de fondo la casa-estudio de Casanova, la escultura sigue afianzándose. Es preciso recordar a José López Tomás, también pintor, que exhibe en la muestra del 94 un medallón-retrato abocetado en barro, una cabeza de estudio, un medallón-retrato de Montesinos y el estudio "Dolce Far niente".

Rafael Reus Moya (1880-1929) realiza toda su obra en el siglo XX, comenzando por su presencia en la Exposición de 1903, donde presenta una cabeza-estudio con aire modernista, pero con anterioridad ha dejado firmada —año de 1900— una bellísima terracota de tema taurino: "¡Buena estocata!", que le acreditan como escultor animalista.

Otro discípulo de Lorenzo Casanova, Angel Custodio Fernández y Oliver (1880-1935) es becario de la Diputación, y abandona los pinceles para tomar cincel y escoplo, dedicándose también a la fotografía. Suyo es el bajorrelieve "El improvisador" que muestra en la Exposición Provincial Agrícola, Industrial, Arqueológica y de Bellas Artes de 1903. José Samper Ruiz, nacido en 1880, es autor de un busto de Gabriel Miró, y la "Escena

pompeyana” que estaba en la escalera del palacio de la Diputación cuando ésta se domiciliaba en la calle de Villegas, es de Mariano Orts Masiá (1882-1917), autor igualmente de la medalla-retrato del pintor Casanova, su maestro, que figuró en la sepultura del artista alcoyano.

Podrían añadirse otros nombres: Miguel Nebot Sapena, autor de un bajorrelieve-retrato de Alfonso XII, expuesto en el certamen alicantino de 1878. El alcoyano José Carbonell, importante imaginero, autor de un “Resucitado”, de 1881. El también alcoyano Lorenzo Ridaura Gosálbez (1871-1963), formado en Barcelona, adscrito al movimiento modernista: “Fe, Esperanza y Caridad”, “Angel imponiendo silencio”, grupo de ángeles para la iglesia de San Jorge, etc.

Los pintores Guillén, Pericás, Parrilla y Buforn

El final de siglo registra en la ciudad, entre otros acontecimientos culturales, tres importantes exposiciones artísticas: 1878, 1879 y 1894. Las dos primeras las organiza la entidad “El Fomento” y la última —en la que interviene directamente Casanova—, la Sociedad Económica de Amigos del País. Manuel Chápuli, arquitecto, aparece en la del 78; Bushell, Amorós, Farach como pintores, el escultor Nebot y el grabador Heliodoro Payá son expositores. El 7 de agosto del 79 se repite la Exposición Industrial y Artística, y reaparece Francisco Bushell junto a Joaquín Agrasot, Mariano Antón, Pedro Ibarra.

La de 1894 tiene sin duda mayor envergadura, “llamada a ser muy visitada”, dice “El Alicantino”, instalada como está en el Teatro Principal. Exponen treinta y ocho alicantinos, treinta y dos pintores valencianos, artistas de Murcia, Madrid, Cádiz y Barcelona. Naturalmente es la gran ocasión para el alumnado Casanova que se vuelca ante este acontecimiento singular. Heliodoro Guillén (1863-1940), Lorenzo Pericás Ferrer (1863-1912) y Adelardo Parrilla Candela (1876-1953) serán figuras destacadas ya en tal evento. Joaquín Sorolla e Ignacio Pinazo —el impresionismo valenciano en Alicante— están presentes. La poderosa revista madrileña “La Ilustración Española y Americana” se hace

eco de tan importante y sugestivo concurso plástico. A la hora del fallo el jurado otorga medallas de oro a Fernando Cabrera y a Vicente Bañuls, en pintura y escultura, respectivamente. Para Guillén y Pericás, sendas medallas de plata. Heliodoro Guillén ha comenzado a estudiar a las órdenes de Aureliano Ibarra Manzoni. Después ha continuado su labor en Madrid bajo la dirección de Casto Plasencia. Marcha a Roma, donde pinta "Campaña romana", "Il pescatore di perle", y acude a certámenes de fuera de España, entre ellos el de Berlín.

Decorará el Salón Imperio del Casino —que guarda su óleo "¡Náufragos!", realizado en plena juventud—. Alicante y su paisaje será evocado e interpretado en multitud de títulos y telas de espléndida factura, tales como "El parque de Canalejas", "Ciudad Jardín", "El Castillo de Santa Bárbara", "Claustro de San Nicolás", etc. Catedrático de Dibujo en el entonces llamado Instituto General Técnico, luego en el Instituto de León, siendo presidente del Círculo de Bellas Artes-Academia Casanova de la propia ciudad.

Pericás, pese a haber nacido en Alcoy, se considera alicantino siempre, seguidor de Casanova, con él compartía incluso los modelos vivos. Se especializó en flores y bodegones, temas de interiores y asuntos de género. Trabajó para el Casino y asimiló las fórmulas modernistas propias ya de finales de siglo. En parte continuó prolongando el arte —estilo y maneras— del maestro.

Adelardo Parrilla fue quien sustituyó a Casanova en su Academia. Nacido en Cartagena, a los nueve años ya cursa estudios en el Instituto de Enseñanza Media de Alicante. Viajó por Europa y trajo un aire nuevo y fresco al paisaje de reducido formato. Se especializó en el bodegón siguiendo las líneas más clásicas de este género.

Alicante, ciudad cara al mar, que vive del mar en una gran parte, y a excepción de Andrés Bufoarn Aragonés (1877-1943) no puede presentar una nómina de artistas marinistas. Alicante, aunque parezca extraño, no ha dado pintores del mar, como si éstos hubieran vivido de espaldas al Mediterráneo. Sólo el hijo de un "calafater" que conocía los secretos y el argot marinos fue capaz en los últimos años del XIX y en el primer tercio de la centuria siguiente de exhibir una obra dentro de estas coordena-

das. Había estudiado en Madrid con Alejandro Ferrant y en Alicante mismo, “in situ”, había recibido consejos del propio Sorolla. Se dedica a captar amaneceres luminosos y puestas de sol en la playa o en el puerto, incluso el mar embravecido y el drama histórico: “Presagio de tormenta”, “Naufragio”, “El incendio del Tiflis”.